

# **MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA**

**TESIS:**

## **LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO EN MÉXICO**

**MARTHA BLANCO GALINA**

**ASESOR: MAESTRO OTTO FERNÁNDEZ REYES**

**13 DE ABRIL 2012**

**TRIMESTRE 12- I**

## INTRODUCCIÓN

El estudio sobre el Estado ha sido siempre una preocupación tanto para la Sociología como para la Politología, y ha estado marcado por diferentes tendencias particularmente en el estudio de los casos latinoamericanos, producto de la influencia anglosajona de los años cincuenta y sesenta, los análisis se concentraron en identificar quienes eran países “desarrollados” y quienes eran “países en vías de desarrollo”, así como sus implicaciones. Actualmente la premura académica consiste en clasificar los procesos de democratización.

El horizonte actual de comprensión de lo político ha estado muy influido por las tesis de la posmodernidad y el pragmatismo estadounidense. Ello ha determinado que cualquier procedimiento analítico que trate de comprender las transformaciones del Estado desde una perspectiva que se enfoca en la dominación social sea catalogado como “economicista” u “holista” y por lo tanto como ya superado. Por lo que el estudio sobre el Estado se ha dejado un poco de lado.

Sin embargo, a pesar de los cambios que ha traído la globalización (pérdida de la soberanía total, interdependencia, multiculturalismo), el Estado sigue siendo un factor central dentro de la reproducción social, ya que no ha logrado ser sustituido como una forma política esencial donde discurre lo político y el conflicto.

El Estado es una configuración histórica típica de la modernidad, que para Occidente fue parte del mismo proceso civilizatorio. La complejidad de su estudio está dada por sus transformaciones es decir, como parte de la modernidad y por ende inmerso en el proceso singular de la modernización y el cambio histórico-social. Bajo esa perspectiva el Estado se ha estructurado de distintas maneras a lo largo de la historia y dependiendo de las diversas expresiones sociales, por lo que parece relevante desde la sociología tratar de comprender su funcionamiento.

Se puede afirmar que el funcionamiento de una forma de dominación, de la reproducción del Estado en su totalidad, está determinado por la capacidad de institucionalización de una sociedad. Y la institucionalización es la posibilidad de una sociedad para trascender la existencia de sus individuos al formalizar sus

encuentros y desencuentros habituales a través de canales de interacción y/o procesamiento de demandas. Una comunidad no implica cualquier tipo de agrupamiento, sino uno regularizado, estable y en la medida de lo posible permanente. Cuanto más compleja y heterogénea es una sociedad, el logro y mantenimiento de la comunidad política depende más del funcionamiento de instituciones específicas, que serán eficaces en la medida en que se reproduzcan con altos niveles de coherencia, autonomía, complejidad y adaptabilidad.

De la misma manera si una sociedad quiere conservarse como comunidad política estable, debe utilizar los mecanismos adecuados que ayuden a morigerar el impacto de las transformaciones, lo que produce inevitablemente una paradoja, ya que la expansión de las nuevas instituciones socava por lo general a las tradicionales y al mismo tiempo termina por obstruir el adecuado desarrollo de las nuevas, produciendo que el desenlace quede abierto y se desarrolle de manera distinta en diversos contextos sociales.

El caso mexicano no es la excepción. La conflictividad en su proceso de conformación estuvo y ha estado dado por los distintos proyectos entrecruzados que pretendían insertarlo en la modernidad o retrasar y frenar su velocidad.

Desde los años ochenta y hasta la actualidad en México, a la luz del contexto mundial de la llamada globalización, se ha experimentado una aceleración de los cambios económicos, políticos y sociales, que se encuentran con un suceso significativo en la alternancia a nivel de régimen en el año 2000. Emprendiendo el relato sobre la complejidad de estos procesos a nivel del Estado, a fin de entender como desde esa “superficie político-institucional”, se redefinió el espacio público-estatal en una dimensión significativa. Al acelerar desenlaces sistémicos y en el que se mueven los sujetos sociales en las distintas lógicas de reproducción societal. Luego entonces de lo que se quiere dar cuenta es de la naturaleza de éstos cambios, la estabilidad o ausencia de ésta, las continuidades y permanencias, y por último la existencia o no de crisis parciales o generalizadas que enfrenta la reproducción y funcionamiento del Estado mexicano.

La presente investigación se conduce por una premisa básica y tres preguntas centrales: Si actualmente coexisten en el Estado Mexicano por un lado tendencias democráticas y por otro prácticas políticas heredadas de un sistema autoritario posrevolucionario que está en crisis pero que no desaparece ¿Cómo podemos definir al Estado mexicano actualmente? ¿Cómo se reconstituye el orden moral en medio de las tensiones provocadas por valores autoritarios contra valores democráticos? ¿Cómo se reproduce la comunidad estatal en términos de mando estatal, legitimación y soberanía?

Para poder intentar resolver estas preguntas he comenzado por la elaboración del primer capítulo, donde realizo una reflexión teórica acerca de la concepción general del Estado así como del estudio de sus transformaciones, desde la perspectiva sociológica, lo que implica la discusión sobre el concepto mismo de Estado- nación y posteriormente sobre la caracterización de sus diversas formas de configuración histórica como Estado liberal, Estado social y actualmente Estado nacional de competencia.

Esta discusión me permitió acercarme en el segundo capítulo, a las distintas interpretaciones sobre la formación y naturaleza del Estado mexicano posrevolucionario, el cual lleva un curso excepcional, este recorrido comienza con el Cardenismo hasta llegar a los años noventa, todo esto con el fin de:

- Identificar los procesos centrales que permitan registrar las dimensiones de "fractura", "desintegración", "redefinición institucional", "bloques burocráticos" o "transformaciones y crisis del tejido estatal" en el período que considera el proyecto, es decir, 1940- 2010.
- Especificar las dimensiones en función de qué y cuáles procesos aparecen formando parte de las dinámicas relacionadas a la reestructuración de los cambios estatales: 1) internamente, 2) en el vínculo entre Estado-actores y 3) Estado-políticas.

Por último en el tercer capítulo pretendo mostrar que a pesar de que la construcción de una forma de dominación pertenece a los tiempos largos de la

historia, que se consolidada en la medida en la que logra sobrepasar las diferentes coyunturas, en el caso de México a partir del año 2000 y hasta la actualidad lo que está en juego no es solo la “consolidación democrática” sino la posibilidad de reproducción de la comunidad estatal con una nueva naturaleza, evidentemente es un proceso que está abierto, sin embargo es posible observar las contradicciones en las conjugaciones ideológicas, así como en las practicas que aparecen como limites a nivel económico, político y social que pudieran o no, poner en peligro la integración sistémica, que en el caso mexicano remiten a procesos y datos muy precisos (procesos que aparecen como síntesis de múltiples determinaciones) que darán cuenta de la magnitud de la crisis estatal:

- 1) Límites al modelo neoliberal. Si entendemos el neoliberalismo como una forma de régimen económico, es decir, una forma de relación entre el Estado, la economía y la sociedad, en la que estas categorías se conjugan para aparecer como una entidad estructurada para competir a nivel mundial, los límites están dados por la incapacidad estatal como administrador eficiente, la incapacidad productiva (como satisfactor en la redistribución de bienes) y la ausencia de una estructuración competitiva del mercado ( a fin de evitar disparidades incontrolables).
- 2) Límites a ejercicio del mando político: El ejercicio de éste se entiende como la capacidad política para generar legitimidad y encuentra sus límites en el funcionamiento de las instituciones de intermediación de intereses.
- 3) Límites a la Cohesión Social: Los límites en este sentido aparecen cuando no hay procesos eficientes de socialización, que permitan desarrollar vínculos de solidaridad, así como identidades colectivas e individuales, que por un lado motivan las acciones de los sujetos y que por otro, permiten construir la percepción de confianza en la estructura social en general (es decir en la manera en la que se organiza la vida social en cuanto a formas políticas, económicas, culturales, etc).

## **CAPÍTULO I**

### **EL ESTUDIO DEL ESTADO Y SUS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN**

#### **HISTÓRICA**

##### **Introducción**

El presente trabajo de investigación esta centrando en describir la crisis actual del Estado mexicano intentando detectar la magnitud o singularidad de la misma. En buena medida la conflictividad en la conformación del Estado Mexicano estuvo y ha estado dada por los distintos proyectos entrecruzados que pretendían insertarlo en la modernidad. Esta característica no es propia únicamente del caso mexicano, sino de todos los países de América Latina con sus respectivas diferencias y concreciones históricas específicas, sin embargo un eje temático central en la explicación del cambio sociopolítico en éstos países es la construcción de Estados- Nación modernos y la transformación de los mismos.

Por tal motivo el objetivo del presente capitulo es discutir la teorización general acerca del Estado moderno, para posteriormente comprender las discusiones en torno a las diversas formas que adoptó a lo largo de la historia: liberal, social y de competencia. Esta exposición pretende ser el marco general de referencia para analizar el caso mexicano tomando en cuenta las particularidades del mismo debido a su peculiar trayectoria histórica.

Por otro lado, al final del presente capitulo me parece pertinente discutir sobre algunas tendencias interpretativas de las transformaciones políticas para de esa manera precisar cuál es el enfoque propio y argumentar las razones por las que se eligieron ciertos ejes o conceptos y no otros.

## 1.1 Algunos conceptos clave en la definición sociológica de Estado.

El estudio del Estado y sus transformaciones puede ser emprendido desde diversas perspectivas y enfoques, eso que denominamos “Estado”, es comprendido de diversas maneras por la Filosofía, la Economía, la Ciencia Política o la Sociología y esta diferencia de concepciones repercute por lo tanto en la interpretación de sus mutaciones; para la presente investigación nos inscribimos en el enfoque de esta última disciplina la cual concibe al Estado como una relación social, pero no cualquier relación social sino una que se construye a la par de la sociedad moderna.

Históricamente uno de los proyectos de la modernidad fue la construcción del Estado Nación soberano. En el medievo no existía la soberanía puesto que la configuración de la comunidad política era la de un entramado jerárquico de mandos señoriales subordinados a príncipes y reyes, unidos en la *res pública christiana* en la doble autoridad del Emperador y el Papa. Por lo que:

la constitución del poder soberano característico del Estado moderno fue resultado de un proceso violento que implicó la expropiación de mandos territoriales locales, la eliminación de jurisdicciones señoriales y la afirmación de la supremacía del mando estatal frente a otros poderes como el de la Iglesia<sup>1</sup>.

El principio de soberanía moderna, que surgió a partir del siglo XVIII, se refiere a la capacidad del Estado de ser el único en establecer una ley común en un territorio, y de ejercer el uso legítimo de la violencia, así como el de garantizar la protección y la seguridad tanto al interior como respecto del exterior. Esta característica no debe ser entendida como un atributo de los gobernantes, sino como una relación que se recrea constantemente en la renuncia por parte de los gobernados al uso de la violencia y la impartición de justicia, y con el reconocimiento de la validez del mandato traduciéndolo en obediencia.

Es así como fundamenta Weber el Estado como una relación social:

---

<sup>1</sup> Weckmann Luis. “El pensamiento político medieval y los orígenes del derecho internacional”, FCE, México 2ª edición, 1993, en Rhina Roux, *El Príncipe Mexicano. Subalternidad, historia y Estado*, Era México, 2005, p. 39.

“una comunidad humana dentro de los límites de un territorio establecido, ya que este es el elemento que lo distingue, la cual reclama para ella – con el triunfo asegurado- el monopolio de la legítima violencia física. (...) El Estado, al igual que toda entidad política. Es un enlace de dominio de individuos sobre individuos, sostenido mediante la legítima violencia”<sup>2</sup>.

Como él mismo lo explica, la fuente de la legitimidad puede ser de diverso tipo: tradicional, carismática o racional- burocrática; aunque ninguno de estos ideales existe puro, en ningún contexto; esta distinción nos es útil porque en la realidad encontramos éstos tipos de dominación de forma entremezclada. El concepto de legitimidad lo que permite observar es la condición necesaria de una dominación estable; Weber advertía la posibilidad de que la legitimidad se obtuviera por algún interés material, por resignación o mera costumbre, sin embargo una dominación estable que no raye en el despotismo requiere de una relación de autoridad, es decir, la relación estatal requiere de la obediencia por parte de los subordinados:

“obediencia significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido del mandato se hubiera convertido, por sí mismo, en máxima de su conducta... sin tener en cuenta la propia opinión sobre el valor o desvalor del mandato como tal”.<sup>3</sup>

Por tal motivo la dominación no es algo estático cristalizado, es un proceso continuo de negociación que aunque estable, nunca esta exenta de conflicto puesto que la creencia en el orden normativo (que puede aparecer en forma de reglas escritas sancionadas jurídicamente como las constituciones, o como derecho consuetudinario) puede ser cuestionado por los dominados:

El contrato social inherente a las relaciones de autoridad, siempre está siendo puesto a prueba y renegociado y en las revoluciones puede derrumbarse casi completamente. (...) Hay ciertas formas de violación de este contrato que por lo general producen agravio moral y un sentimiento de injusticia entre quienes están sujetos a la autoridad<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Weber Max, *El político y el científico*, Ediciones Coyoacán, México, 1997. pp. 7-8.

<sup>3</sup> Weber Max, *Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología comprensiva*, FCE, México, segunda edición, 1964, p. 172.

<sup>4</sup> Moore Barrington, *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, UNAM, México, 1989.p. 35.



El origen del sentimiento de agravio por parte de los subordinados siempre se da en relación al orden normativo, pero puede ser motivado por diferentes percepciones: porque se piense que se ha sido violado ese orden, porque se crea que es injusto, o porque se quiera hacer algunas modificaciones en él que incluyan nuevas reivindicaciones. La dinámica del conflicto también puede variar, en ocasiones se presenta como violenta y disruptiva, es decir, como una revolución que pretenda transformar por completo el orden existente y en otras la confrontación logra ser encauzada dando origen a algunas reformas. De ahí la importancia de la legitimidad como estabilizadora de la dominación, que por supuesto se fundamentará y reproducirá de manera distinta dependiendo el tipo de sociedad como construcción histórica específica.

El monopolio de la violencia legítima se da a la par del monopolio de los medios financieros y de recursos ejemplificados en la capacidad de recaudar impuestos, Elías<sup>5</sup> explica cómo la existencia de éste poder central en la modernidad, permite hablar de una pacificación de la existencia, no por que deje de existir la violencia sino porque todo está reglamentado y con ello se provee de certeza a los individuos puesto que parecía que todo podía ser calculado y previsto, haciendo más difícil que entre los hombres exista el riesgo de caer presa de pulsiones y deseos incontrolados de otros hombres o comunidades. El mismo autor explica que la construcción del Estado moderno es un fenómeno de larga duración que al igual que todos los grandes cambios se va gestando lentamente a través de procesos interrelacionados tanto de los espacios micro como macro sociales.

En este punto cabe aclarar que el Estado moderno es al mismo tiempo una forma política a la vez que una estructura de dominio y consenso desplegada en sus aparatos<sup>6</sup>. En la medida en que la sociedad se presenta escindida, y diferenciada, debido a que no existe una sociedad pura anterior al ordenamiento normativo-simbólico, necesita una mediación; al estar dividida no puede verse ni actuar por sí

---

<sup>5</sup> Vid. Elías Norbet, *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, FCE, México-Madrid-Buenos Aires, 1987, Segundo apartado "La génesis social del Estado", pp. 333-446.

<sup>6</sup> Holloway John, "El Estado y la lucha cotidiana", en *Cuadernos políticos*, núm 24, México, 1980.

misma. Es decir, sólo a través de una representación general de sí es que puede relacionarse consigo misma. En algún momento esta representación la encarna la religión pero en la época moderna y específicamente en el capitalismo esta función la ocupa el Estado:

Es bajo la forma Estado como cada sujeto se reconoce en su particularidad y como la sociedad en su totalidad se afirma en su diversidad y deviene idéntica consigo misma. En esta perspectiva permanece válida la intuición hobbesiana del Estado como un “dios mortal”. El Estado, es efectivamente, un referente trascendental en tanto que “lugar de sentido” exteriorizado y objetivado por mediación del cual los hombres existen como sujetos, la forma estado reemplaza la figura de dios. En ambos casos se trata de una mediación, que es ella misma una producción social<sup>7</sup>.

El Estado es así el contenedor de la conciencia colectiva. Esta se compone de una parte descriptiva- cognoscitiva de lo que es la realidad y otra parte normativa. Es por eso que el estado es una *conciencia moral*, es un conjunto de creencias, valores, mitos, deseos, acerca de la realidad y son compartidos en tanto que comunidad política actuando como un factor de cohesión a la vez que de coacción. Esto remite a la formación de un *ethos* particular que no solo es un entramado simbólico sino que tiene implicaciones en la realidad material y en la vida cotidiana de los individuos<sup>8</sup>.

El proceso de construcción de un Estado opera a través de la concentración y el desposeimiento:

La génesis del Estado es un proceso durante el cual se opera toda una serie de concentraciones de diferentes formas de recursos: concentración de los recursos de la información (la estadística a través de las encuestas, los informes), de un capital lingüístico (oficialización de un dialecto que es erigido como lengua dominante, de modo que todas las demás hablas son sus formas deprimadas, descarriadas o inferiores). Este proceso de

---

<sup>7</sup> Lechner Norbert, “Acerca del ordenamiento de la vida social por medio del Estado”, *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 43, núm. 3. (julio- septiembre 1981), p. 1095.

<sup>8</sup> Vid. Philip Corrigan y Derek Sayer, “El gran Arco. La formación del Estado Inglés como una Revolución Cultural”, en María L. Lagos y Pamela Calla (compiladoras), *Antropología del Estado: Dominación y prácticas contestatarias en América Latina*, Cuaderno del Futuro No. 23 agosto 2007, Bolivia. pp. 46-47.

concentración va de la mano con un proceso de desposeimiento: constituir una ciudad como capital, como lugar donde se concentran todas esas formas de capital, es constituir la provincia como desposeimiento del capital; constituir la lengua legítima es constituir todas las demás lenguas como dialectos. La cultura legítima es la cultura garantizada por el Estado<sup>9</sup>.

En este sentido la formación y consolidación del Estado como un *orden descriptivo y moral* es institucionalizado en la medida en la que es reproducido a través de prácticas y rutinas, que lo reproducen constantemente y es también en esas prácticas en la vida cotidiana que se dan las transformaciones a partir de rupturas.

El Estado es así un proceso no una organización cerrada. Ahora bien la manera en la que se configura históricamente un Estado, con su fundamento soberano, su legitimidad propia, su idea de *bien común*, de autoridad, de política, etc., está enmarcado en procesos hegemónicos en los que se encuadran las relaciones de desigualdad. Debemos entender la *hegemonía* no como un consenso perfecto sino como un proceso en extremo conflictivo puesto que lo que pretende la hegemonía es la unidad de la comunidad política:

“La unidad requiere el control del estado (por definición, las clases subalternas no están unificadas por que no son el estado), pero el control del estado por las clases gobernantes no se presupone. Ese control es al mismo tiempo jurídico y político, y moral y cultural”<sup>10</sup>.

La hegemonía lo que construye no es una ideología compartida, sino un marco común tanto material como simbólico en el que se desarrollan las relaciones de dominación, dando los elementos para hablar y actuar en ella dentro de una sociedad específica. En este marco común es que se dan las relaciones no sólo entre gobernantes, sino entre los gobernantes y entre los subalternos.

---

<sup>9</sup> Bourdieu Pierre, “Las dos caras del Estado”, en *La Ciudad Futura*, Texto inédito extractado de los cursos sobre el Estado que dictó en el Collège de Francia entre 1989 y 1992, enero del 2012. <http://laciudadfutura.blogspot.com>

<sup>10</sup> Roseberry William, “Hegemonía y lenguaje contencioso”, en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comp.), *Aspectos cotidianos en la formación del Estado*, Era, México, 2002, p. 218.

El Estado se configura también como un entramado material que actúa a partir de sus aparatos, de forma autónoma respecto de los poderes de la sociedad civil como pueden ser el ideológico, el político o el económico. Michael Mann realiza una distinción sobre los poderes estatales que pueden ser poder despótico y poder infraestructural; el primero es la capacidad de las elites para tomar decisiones sin someterlo a discusión de la sociedad civil; mientras que el poder infraestructural se refiere a la capacidad de los estados para penetrar en la vida cotidiana de la sociedad civil y poner en ejecución las decisiones políticas por todo el país a través de sus instituciones, aparatos y estructuras burocráticas. El poder despótico que no va acompañado de poder estructural es débil puesto que no penetra todos los ámbitos de la vida, se ejerce sólo por la fuerza o la costumbre lo que a la larga termina desgastándose<sup>11</sup>.

Lo que le da autonomía al Estado es la capacidad de centralización, en cuanto a la decisión y a su aplicabilidad en un territorio específico permitiendo la reproducción de una determinada forma de organización de la vida, tanto en términos económicos, cómo político y morales. En teoría, los Estados capitalistas democráticos se basan en el poder infraestructural, puesto que la mayoría de decisiones deben ser debatidas.

## **1.2. La configuración histórica del Estado, su dinámica los procesos de transformación.**

Lo que anteriormente hemos denominado Estado surgió con la sociedad burguesa capitalista y es adjetivado por muchos como un proceso civilizatorio. Históricamente ha estado sometido a diversas transformaciones. En este sentido el estudio del Estado queda enmarcado en distintas etapas históricas: capitalismo liberal burgués, capitalismo tardío y en la nueva fase de acumulación capitalista de tipo neoliberal.

---

<sup>11</sup> Mann Michael, *States, War and Capitalism. Studies in Political Sociology*, Oxford & Cambridge, USA, 1988. pp. 1-32.

### 1.2.1 El Estado liberal

A finales del siglo IV d. C. con el hundimiento del Imperio Romano de Occidente se inaugura la Edad Media que se caracterizará por el eclipse de la autonomía política ante la hegemonía del cristianismo católico. En este modelo prevalecerán las monarquías de corte patriarcal legitimadas tradicionalmente, es decir, los reyes y obispos serán vistos como padres que ejercerán un poder despótico tratando a los súbditos como menores de edad necesitados de tutela. Será hasta el siglo XV y XVI que una serie de acontecimientos en especial el Renacimiento y la Reforma Protestante pondrán fin a la Edad Media, inaugurando así la Modernidad en la que muchos autores intentarán recuperar la herencia cultural grecolatina, generando innovaciones artísticas, tecnológicas, filosóficas y políticas.

En este contexto la concepción del Estado liberal limitado surgirá como oposición al Estado absoluto y la justificación de su existencia estará dada por la doctrina del iusnaturalismo y del contractualismo<sup>12</sup>. El primero refiere a un conjunto de derechos que todos los hombres tienen por naturaleza independientemente de su voluntad y anteriores a cualquier tipo de formación social, como es el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, la felicidad etc. El contractualismo es complementario a la doctrina iusnaturalista puesto que es un modelo heurístico (no comprobable ni empírica, ni históricamente) que busca justificar la existencia del Estado demostrando que los derechos naturales solo pueden ser protegidos dentro de esta comunidad política y mostrando los riesgos que representa el hipotético “estado de naturaleza” para los individuos<sup>13</sup>.

En el siglo XVII Thomas Hobbes será el primero en utilizar el modelo contractualista entrando de lleno a la filosofía política moderna, el esfuerzo de éste autor consistirá en dotar de una nueva justificación racional al Estado como poder soberano, que coincidiría en última instancia con la legitimación del absolutismo,

---

<sup>12</sup> Vid. Solari Gioele, “La concepción liberal del Estado”, en París Pombo María Dolores (Comp), *Política y estado en el pensamiento moderno*, UAM- Xochimilco, México, 1996, pp. 71- 117.

<sup>13</sup> Bobbio Norberto, *Liberalismo y Democracia*, FCE, México, 1989. p. 12.

pero ya no sobre las bases del “derecho divino y la ley natural”, sino del lusnaturalismo.

Para Hobbes el Estado será un artificio que se explica por su concepción del “estado de naturaleza”, el cual se caracteriza por la ausencia de lo político, en él reina la libertad negativa, es decir, la ausencia total de obstáculos, que permite que los hombres hagan uso de todos los medios a su alcance para preservar su vida, lo que los coloca en estado de igualdad dada por la misma capacidad potencial de sobrevivir. El hombre no es para Hobbes un ser malo por naturaleza, pero es un ser pasional y competitivo no sólo por los recursos para la sobrevivencia, sino por el poder, el honor, y la gloria; por lo que el hombre puede llegar a actuar irracionalmente haciendo que la igualdad traiga la consecuencia negativa de la “guerra de todos contra todos”, que es en si mismo un atentado contra la “ley natural” que pone en riesgo la condición determinante del hombre que es la vida.

Este inconveniente hará que los hombres quieran salir de ese estado de naturaleza, lo que trae consigo el momento fundacional del Estado, el contrato racional entre los individuos libres e iguales, para pasar al estado civil, que dé las mayores seguridades para la conservación de la vida. El pacto constitutivo tiene un carácter absoluto, es la cesión de todos, de su derecho natural a un soberano que no pacta y que concentra el mismo el estado de guerra.

Después de Hobbes encontraremos una reformulación del lusnaturalismo en la figura de John Locke, quién inaugura la corriente empirista en oposición al racionalismo de Descartes, Spinoza y el propio Hobbes. En la teoría de Lock la categoría de individuo deja ser una descriptiva y regresa como en la tradición griega a ser normativa, al considerar que la razón es una capacidad de discernimiento que persigue lo bueno, lo bello y lo verdadero, lo que da como resultado una categoría moral del individuo considerado por lo tanto como “libre”. Es también una categoría relacional puesto que indica cómo debemos tratar a los demás para ser reconocidos en nuestra propia libertad.

Lock también recurre al modelo heurístico de “estado de naturaleza” para explicar como se constituye la sociedad política, sin embargo él la caracteriza de forma distinta: el estado de naturaleza no es pues un estado caótico, es más bien un estado de perfecta libertad aunque no de licencia. En el existe ya un orden social espontáneo aunque imperfecto, debido a que aunque en un primer momento exista paz y ayuda recíproca, puede suceder que los individuos no siempre se rijan por la ley y no logren frenar sus pasiones y que en consecuencia haya hombres que violen la ley natural, con premeditación, y en ausencia de un juez supremo que imparta la justicia, todos se vuelven jueces de su propia causa. El pacto es pues una idea preventiva del estado de guerra, en el que pactan individuos libres e iguales en cuanto a la capacidad de autogobernarse por ser propietarios de sí mismos y de lo que legítimamente es suyo producto de su trabajo, aquí lo que ceden al soberano no es todo su “derecho” sino únicamente la capacidad de juzgar.

“Mientras que Hobbes, en efecto, evalúa el poder desde la perspectiva del eje “caos-orden”, y parte de que la paz y la seguridad son los valores políticos superiores. (...) Locke, en cambio, asume el eje de evaluación “opresión- libertad”, y considera que la libertad es el valor supremo, pues sólo ella permite evitar el mal mayor que es la esclavitud y la pérdida de dignidad moral<sup>14</sup>.

El Estado civil se constituye así con la finalidad de proteger la propiedad (la vida y la de los bienes) y el bien público que queda entendido como el bien de los asociados.

En este sentido podemos decir que el lusnaturalismo desmonta los fundamentos de legitimación del orden estamental contra el supuesto de desigualdad natural, para por el contrario hacer extensiva y universal la igualdad natural, por lo que la legitimación de los poderes, no sólo el político, sino también el del padre, marido, y señor tiene su origen en un contrato en el que cada una de las partes cede algo a cambio de algo.

---

<sup>14</sup> Salazar Carrión Luis, *Para pensar la política. La lección de los clásicos*, UAM- Iztapalapa, México, 2004. p. 285.

En la tradición lusnaturalista como vemos tiene especial importancia la figura del individuo “abstracto” como centro de conciencia independiente y la manera en la que se constituye como “individuo político” ciudadano, que le deja al gobierno la única tarea de la representación de intereses privados.

Es por eso que Bobbio siguiendo a Constant, plantea que al diferencia entre los antiguos y los modernos radica en su concepción acerca de la libertad; para los primeros era sinónimo de distribución del poder entre los ciudadanos, mientras que para los modernos la libertad significa el goce privado de garantías establecidas por instituciones en lo público; el lusnaturalista que más se acercará a los antiguos será Rousseau.

Siguiendo el modelo interpretativo del estado de naturaleza, para este autor lo característico del mismo será la perfecta igualdad y libertad, el ser humano en este estado es un ser inocente en el que aun no está desarrollada la razón. En la medida en la que el hombre evoluciona y comienza a socializarse, el despliegue de la consciencia motiva la comparación, ésta la envidia y la descomposición moral.

La consecuencia será la introducción de una desigualdad ilegítima debido a la creación de la propiedad privada que deviene en desigualdad económica y dependencia. Lo que conduce al estado de guerra y a la necesidad de un pacto que funde la sociedad civil. “Pero, por fundarse en una nueva desigualdad (la política), ésta tiende por su parte a degenerar, a oponer ya no sólo los ricos a los pobres, si no los jefes (poderosos) a los súbditos (débiles), cayendo tarde que temprano en un nuevo estado de naturaleza gobernado solamente por las pasiones de los déspotas”<sup>15</sup>. Es imposible regresar al estado de aislamiento y perfecta libertad por lo que el remedio es un nuevo contrato social que consiste en un acuerdo racional entre individuos libres e iguales, pero en el que todos van a ceder todo a la comunidad, de tal manera que cediendo todos <todo>, es como si nadie cediera nada. En este sentido para proteger la libertad civil el Estado tendrá como soberano a la voluntad general, es decir, a la voluntad de la mayoría no a la

---

<sup>15</sup> *Ibíd.*; p. 335.



voluntad de todos. En este sentido los ciudadanos son al mismo tiempo partícipes del soberano así como súbditos sometidos a él. Rousseau a diferencia de Hobbes y Locke concibe a la libertad como positiva, ya no como ausencia de obstáculos sino como la capacidad de participar en la formación de la voluntad general lo que implica obedecer a la ley que uno mismo se ha puesto, esto es, la autonomía. Por lo que para éste autor el valor natural por excelencia es la libertad, el valor político la igualdad y la degradación política es la desigualdad.

La aparición del Estado liberal, ese que se concibe como distinto al Estado social, surgió históricamente con otro calificativo con el que es nombrado: Estado liberal democrático, sin embargo, ambos conceptos no necesariamente son compatibles, e inclusive como lo menciona Bobbio, pueden existir estados liberales que no sean democráticos. Los valores naturales, así como políticos que inaugura el iusnaturalismo, así como la concepción del individuo cobran relevancia en la definición de las formas estatales y específicamente en el debate sobre la democracia donde aparecen dos corrientes principales: el liberalismo y los igualitarismos<sup>16</sup>. En el primero la libertad es una capacidad del individuo que le da autonomía y autarquía y la igualdad está relacionada con la misma capacidad de libertad. Por otro lado en el discurso de los igualitarismos tiene preminencia la igualdad por encima de la libertad, ésta última relacionada a la soberanía de la comunidad y la autonomía, pero la igualdad de todos en todo provoca la dificultad de explicar sus límites.

Sin embargo es posible denominar al Estado liberal como democrático:

La democracia puede ser considerada como el desarrollo natural del Estado liberal, a condición de que no se considere la democracia desde el punto de vista de su ideal igualitario sino desde el punto de vista de su fórmula política que, es la soberanía popular. La única manera de hacer posible el ejercicio de la soberanía popular es la atribución al

---

<sup>16</sup> La definición sobre la democracia no es el tema central del presente trabajo de investigación por lo que no se ahonda más en este debate, sin embargo se puede consultar en Cohen Jean y Arato Andrew, *Sociedad Civil y Teoría Política*, FCE, México, 2002, pp. 23-34.

mayor número de ciudadanos de participar directa e indirectamente en la toma de decisiones colectivas.<sup>17</sup>

Es decir el Estado es liberal en la medida en la que los derechos naturales de los individuos están resguardados por el Estado de derecho entendido en sentido fuerte<sup>18</sup>, es decir, no solo el reconocimiento constitucional de los mismos sino a la par la existencia de mecanismos (limitación del ejecutivo a través el poder legislativo, autonomía del poder judicial respecto de la política, autonomía de gobiernos locales respecto del poder central etc.) que protejan a los ciudadanos del arbitrio de los gobernantes; y al mismo tiempo es democrático en la medida en la que los ciudadanos participan de manera indirecta (democracia representativa) en las decisiones sobre asuntos públicos.

En resumen, de acuerdo con la tradición liberal el Estado es entendido como una organización racional orientada hacia ciertos objetivos y valores con su estructura jerárquica. Esta racionalidad queda expresada en leyes abstractas, en la división de poderes como garantía de la libertad y como la posibilitadora de una organización burocrática de la acción estatal. Sus valores primordiales serán por lo tanto la libertad, la convivencia pacífica, la seguridad, y la propiedad. Dentro de esta concepción el Estado existe como oposición a la sociedad, por ser dos sistemas con un alto grado de autonomía y con límites bien definidos.

En el Estado liberal burgués se construyó así la separación moderna de lo público-estatal en contraposición a la esfera de los intereses privados. Allí el mando político aparecía separado y diferenciado de la vida religiosa, doméstica y material. Esta concepción es criticada por Norbert Lechner quien argumenta que justamente lo que se niega aquí, es la posibilidad de comprensión del Estado no

---

<sup>17</sup> Bobbio Norberto, *Op.cit*, pp.45-46.

<sup>18</sup> A diferencia de autores como Weber que concibe al Estado como una relación social, esta la visión jurídica sobre el Estado expuesta por Hans Kelsen, según la cual el orden normativo es la personificación del mismo: "El Estado no es un hombre o muchos hombres que están bajo un poder ordenado: es un orden bajo cuyo poder están los hombres". en Kelsen Hans, *Compendio de Teoría general del Estado*, Colofón, México, 1992. p. 133. De acuerdo a esta concepción el estado de derecho se concibe en un sentido débil - como lo expone Bobbio- puesto que solo se habla de la existencia del Estado a partir del orden normativo constitucional, pero sin reparar en el contenido del mismo, por lo que pierde su fuerza calificativa.

como un exterior constitutivo ajeno a la sociedad sino como una relación de mediación que permite a la sociedad actuar sobre sí misma.

Para algunos autores marxistas, esta separación entre Estado y sociedad significa que el carácter social de los seres humanos se exterioriza en una manera desfigurada no reconocible de inmediato, aunque sería importante aclarar que no por ello se elimina la posibilidad de que el Estado sea una mediación para que la sociedad actúe sobre sí misma puesto que, como lo mencionamos anteriormente, el Estado es un proceso no cerrado que se desenvolverá en la dinámica del conflicto, expresada en el núcleo de la relación de dominación intersubjetiva entre dominados y subalternos. La subalternidad <sup>19</sup> no indica una carencia material sino una ubicación relacional, por lo que el conflicto radica en el reconocimiento por parte de los dominadores de la voluntad de los dominados y de estos últimos por tratar de imponer condiciones a la dominación.

El tradicional Estado burgués es pues no solo un aparato coercitivo, la peculiaridad del modo de socialización capitalista es la separación y vinculación simultánea de la política y la economía, ninguna antecede a la otra, ni el Estado es una simple superestructura, tampoco existe, únicamente, como el representante de los intereses de una única clase social. Ya que al estar, aparentemente, por encima de la lucha de clases, permite que se exprese en él, la comunidad política de la sociedad:

El Estado es el proceso de unificación, por medios políticos, de una sociedad cuya reproducción material, subordinada a la *valorización de valor*, se funda en vínculos de dominio/subordinación: relaciones de poder, asimétricas, recreadas en la apropiación de *trabajo vivo*, mediada (y ocultada) por el dispositivo del intercambio mercantil privado. <sup>20</sup>

En el liberalismo en su forma estatal, la libertad ciudadana y la igualdad no son meras ilusiones ideológicas sino que tienen una base material en el contexto capitalista. Es en virtud de esto que los hombres y las mujeres aparecen como

---

<sup>19</sup> Roux Rhina, *Op. cit.*, p. 42.

<sup>20</sup> Roux Rhina, "El *Príncipe* fragmentado. Liberalización, desregulación y fragmentación estatal", en *Veredas*, UAM- Xochimilco, México, núm. 20, 2010, p. 76.

ciudadanos que con igualdad y libertad formal pueden establecer contratos en los que se vende la fuerza de trabajo sin que exista de por medio una coacción física directa<sup>21</sup>.

El Estado ya conformado es resultado de una serie de relaciones capitalistas impuestas globalmente, sin embargo si se desea adentrarse en la complejidad de sus interrelaciones es necesario que no se observen única y exclusivamente desde las relaciones de explotación y de clase, se tiene que poner atención también en la forma de socialización, puesto que los individuos inmersos en este proceso están atravesados por una multiplicidad de determinaciones y pertenencias, económicas, sexuales, religiosas o culturales.

Una característica del capitalismo liberal es que el Estado se basa en la individualización de los seres humanos como seres abstractos formalmente libres e iguales que están fuera de sus contextos históricos particulares, y son tratados como objetos de la burocracia, o sujetos de derechos o electores. La modernidad y su capacidad civilizatoria en este sentido puede percibirse como una irrupción violenta, que, en el proceso de secularización y racionalización, mina pertenencias y ordenaciones tradicionales, culturales y religiosas.

El Estado moderno enfrenta los antagonismos no solo de clase, sino también los problemas de identidad, esto lo hace otorgando a los individuos un lugar en el espacio y tiempo, transmitiéndoles la sensación de pertenencia y seguridad en su existencia a través de la “nacionalidad”. El Estado moderno como nación surge cuando los contextos socioculturales y las tradiciones culturales se reconstruyen.

El Estado intenta dar así una expresión única de lo que en realidad son experiencias multifacéticas y diferenciadas. En el fundamento de la nación encontramos no solo las relaciones de clase, sino también las relaciones de género, etnicidad y religión, es decir, el fundamento del Estado moderno capitalista, es la explotación, el patriarcado y el racismo.

---

<sup>21</sup> Hirsch Joachim (1995), *El Estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global*, UAM- Xochimilco, México, 2001. pp. 38-40.

En primer lugar la nacionalidad remite a un conjunto de individuos que conforman un “nosotros”, respecto de “otros”, lo que identifica y cohesiona a los primeros diferenciándolos de los segundos es un lenguaje, una historia compartida, descendencia, costumbres, etc. Esta diferenciación no solo es al exterior con otros estados, creando a los “foráneos”, sino también al interior; delimitando minorías étnicas y culturales. Sobre esta segregación descansa la ciudadanía y los que son acreedores a la misma.

Ninguna nación moderna posee una base "étnica" dada, aunque proceda de una lucha de independencia nacional. Por otra parte, ninguna nación moderna, por muy "igualitaria" que sea, se corresponde con la extinción de los conflictos de clase. El problema fundamental es producir el pueblo. Mejor aún, que el pueblo *se produzca a sí mismo* en forma permanente como comunidad nacional. En otras palabras: es producir el efecto de unidad mediante el cual el pueblo aparecerá a los ojos de todos "como un pueblo", es decir, como la base y el origen del poder político.<sup>22</sup>

Esta diferenciación es propiamente el “racismo” que opera como miedo y desprecio a los que aparecen como cultural o genéticamente diferentes. Wallerstein afirma que el racismo permite obtener “una pureza” la identidad y cohesión de la nación después de haber expulsado (física o simbólicamente) al “otro” del territorio, sin embargo al ganar eso se pierde la oportunidad de integrarlos como fuerza de trabajo productiva, para la continuidad de la acumulación capitalista, que es la forma de reproducción material que acompaña la conformación de los estados. Para solucionar este inconveniente el racismo permitirá la “etnificación” de la fuerza de trabajo que será flexible y se configurará de manera distinta, pero que tendrá como objetivo reducir los costes de producción lo que incluye reducir los gastos que genera la fuerza de trabajo, es decir, justificando en la diferenciación cultural o genética la diferenciación de salarios y jerarquías profesionales<sup>23</sup>.

El racismo a su vez se interrelaciona con la socialización como patriarcado, en la separación entre lo público y lo privado y dentro de éste último oculto lo

---

<sup>22</sup> Wallerstein Immanuel y Etienne Balibar, *Raza, Nación y Clase*, IEPALA, Madrid, 1991, p. 146.

<sup>23</sup> *Ibíd*, pp 55-57.

doméstico, que encuentra su expresión en el amor romántico y el ideal de la familia nuclear, con la unión de individuos sexuados separados en una relación generalizada. Las estructuras familiares permiten que en el espacio doméstico, jóvenes, ancianos y mujeres realicen “trabajo no remunerado” relacionado con actividades de “subsistencia” que permitan subsanar los bajos salarios de los trabajadores. Esta correspondencia entre racismo y patriarcado, se expresa en los Estados en forma de políticas demográficas como “control de natalidad”, políticas de “asilo” e inmigración<sup>24</sup>.

El Estado es entonces producto de relaciones de poder y dominación en determinados contextos socioeconómicos, no existen naciones, razas o géneros prefigurados.

### **1.2.2 El Estado Social**

La expansión mundial del capital expresada doctrinariamente en la utopía liberal del mercado autorregulado en el siglo XIX, fue frenada en el siglo XX por la aparición del Estado social, o Estado Benefactor.

Históricamente el Estado social significa el intento de adaptación del Estado tradicional liberal burgués a las condiciones sociales de la civilización industrial y posindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero a la vez con nuevas posibilidades económicas y organizativas para combatirlos.

Las experiencias previas a la Segunda Guerra Mundial, demostraron que la existencia del Estado estaba sometida a fuertes tensiones, a grandes costos de energía, permanentes crisis políticas etc. que, en algunos países, terminaron con el régimen democrático dando paso a los totalitarismos con todos los costos que eso implicó; es por eso que el Estado Social se constituyó como la principal fórmula pacificadora de las democracias capitalistas, lo que permitía la reproducción del sistema como tal en la medida en la que por medios políticos se

---

<sup>24</sup> Hirsch Joachim, *Op. cit.*, pp. 59-60.

evitaría que los conflictos se expresarán de manera directa y fuera de los cauces institucionales.

- **La eficacia del Estado Social de Bienestar.**

Cabe hacer una aclaración respecto a las diversas formas en las que se ha nombrado a la configuración de este tipo de Estado. El concepto *Welfare state* hace referencia a una de las dimensiones de la política estatal, es decir el bienestar social, esta característica puede ser cuantificada en función de las cifras o índices respecto de la distribución de presupuestos destinadas a los servicios sociales, así como de los posibles costos. En cambio el *Estado social* se refiere a los aspectos totales de una configuración estatal específica que incluye sí el bienestar social, pero también los problemas generales como sistema<sup>25</sup>.

El Estado social a diferencia del liberal tiene como función central asegurar los fundamentos básicos del *status quo* tanto económico como social, evitando disturbios, por lo que la acción que lleva a cabo es estructuradora de la sociedad. Podemos hablar de una tendencia que va en dos direcciones: la estatización de la sociedad y la socialización del Estado.

El Estado social fue designado por los alemanes como aquel que se responsabiliza por la “procura existencial”. El hombre desarrolla su existencia en un espacio vital en la medida en la que se constituye como un ámbito con una serie de escenarios, bienes y servicios tanto materiales como inmateriales. Dentro de este espacio podemos distinguir:

El espacio vital dominado, o sea aquel que el individuo parece controlar y estructurar intensivamente por sí mismo, o lo que es igual sobre el que ejerce señorío (que no tiene que coincidir necesariamente con la propiedad) y, de otro lado el espacio vital efectivo constituido por aquel ámbito en el que el individuo realiza fácticamente su existencia y

---

<sup>25</sup> García Pelayo Manuel, *La transformación del estado contemporáneo*, Alianza, Madrid, segunda edición, 1985. p. 13-14.

constituido por el conjunto de cosas y posibilidades de las que se sirve, pero sobre las que no tiene control o señorío.<sup>26</sup>

El desarrollo tecnológico ha acrecentado constantemente el espacio vital efectivo, al mismo tiempo que ha disminuido el espacio vital dominado, es decir, el individuo ha perdido crecientemente el control sobre la estructura y medios de su propia existencia, lo que produce la inestabilidad de la existencia denominada “menesterosidad social”. Es por eso que en el Estado social, la seguridad formal debe de ir acompañada de la seguridad material frente a la necesidad económica permanente o contingente, permitiendo que los individuos puedan desplegar todas sus potencialidades.

El Estado social no es propiamente un Estado capitalista tradicional, pero tampoco es uno de tipo socialista. A la luz de la doctrina keynesiana, de la planificación económica el Estado de Bienestar llegó a concebirse no tanto como una carga impuesta a la economía, sino como un estabilizador interno, que ayudaba a regenerar las fuerzas del crecimiento y evitaba que la economía cayese en continuas y profundas recesiones.

Para esta conformación histórica del Estado, la legalidad cobra un nuevo sentido distinto del que tuvo en el Estado liberal, en el cual la ley se entendía como una normatividad abstracta, general y válida para un número indeterminado de casos: tal planteamiento se correspondía con una representación de las funciones del Estado y con una idea de la racionalidad:

en el primer aspecto se correspondía con un Estado que se limitaba a crear las mínimas condiciones ambientales para que los sistemas sociales y económicos, supuestamente autorregulados, actuaran con arreglo a su propia dialéctica, es decir la ley creaba un orden para la acción de otros, pero ella misma no era –normalmente- un instrumento de acción.<sup>27</sup>

En el Estado de Bienestar la ley pasa a ser un instrumento para la ejecución de decisiones, y su contenido deja de ser abstracto volviéndose específico para

---

<sup>26</sup> García Pelayo Manuel, *Op. Cit.* p. 27.

<sup>27</sup> *Ibíd.*, p. 62.



actores tanto individuales como colectivos situados en sus contextos. Parte de la capacidad estructuradora de la sociedad por parte de este tipo de Estado es su incidencia continúa a través de su configuración como un Estado administrativo que garantiza por un lado la paz social y por otro asegura y mejora las condiciones de valorización del capital, en este sentido son diversas las funciones que realiza<sup>28</sup>:

- a) Fortalecimiento de la capacidad competitiva nacional, organización de bloques económicos supranacionales, etc.
- b) Consumo improductivo por parte del Estado (industria espacial y de armamentos)
- c) Orientación del capital, por razones político-estructurales, hacia sectores que han sido descuidados por la economía autónoma del mercado.
- d) Mejoramiento de la infraestructura material (sistema de comunicaciones, organización escolar y sanitaria, centros de esparcimiento, planificación urbana y regional, construcción de viviendas etc.)
- e) Mejoramiento de la infraestructura inmaterial (promoción general de la ciencia, inversiones en investigación, desarrollo de proyectos, etc).
- f) Incremento de la capacidad productiva del trabajo humano.
- g) Resarcimiento de los costos sociales y materiales que genera la producción privada.

Como lo menciona Clause Offe<sup>29</sup>, esta fórmula pacificadora es exitosa en la medida en la que se asegura el bienestar social por medio de la implementación de diversas políticas como son el establecimiento de salario mínimo, el pleno empleo, prestaciones, el crecimiento de la capacidad de consumo tanto material como inmaterial etc., así como por otro lado el reconocimiento del papel formal que desempeñan los sindicatos tanto en las negociaciones colectivas entre

---

<sup>28</sup> Habermas Jürgen (1973), *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Cátedra, España, 1999. pp. 71-72.

<sup>29</sup> Offe Clause (1980), "Algunas contradicciones del moderno Estado Social", en *La Sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro*, Alianza, Madrid, 1992. p. 371.

trabajo y capital , pero también de manera importante en el proceso de formación de la voluntad política.

La forma de socialidad se conforma de manera organizacional, puesto que los seres humanos reproducen siempre su existencia así: nacemos en organizaciones, somos educados en ellas, trabajamos en alguna, se consigue servicios por intermediación de alguna organización etc. La condición de la existencia de las organizaciones es la consecución de objetivos, representando siempre intereses sectoriales que entran en competencia por la capacidad de influir. La sociedad se relaciona así de una manera distinta con el estado. De esa manera el poder social y la posibilidad de influir en los centros de decisión política, ya no se subjetiva en personas privadas, sino que se condensa en las grandes organizaciones.

No solo se trata de que las organizaciones hayan crecido cuantitativamente, tanto en su número como en su dimensión y diversificación, sino que también su estructura y funcionamiento internos se han hecho crecientemente más complejos, en un ambiente de interrelaciones tanto al interior como al exterior con otras organizaciones.

En este sentido es por eso que García Pelayo explica cómo se construye un nuevo tipo de legitimidad que le es peculiar a las organizaciones y que no está constituido necesariamente o solo, por el carisma, la tradición o el conjunto abstracto de leyes y reglas, sino por la capacidad efectiva de satisfacer demandas. A este tipo de legitimidad le corresponde también un nuevo concepto de autoridad: la “autoridad funcional” relacionada la mayoría de las veces a la tecnoestructura dentro de la cual determinadas personas aparecen como capacitadas para hacer efectiva y recrear la funcionalidad de la organización.

La sociedad se reproduce por mediación de organizaciones pero también el Estado necesita de estas para actuar sobre la sociedad. Pero en los hechos si el Estado ha de mantener la paz social, tendrá que hacerlo en coordinación con los grandes sindicatos, si quiere comunicarse con la universalidad de los ciudadanos

tendrá que hacerlo a través de los medios de comunicación, etc. Por lo que en un principio enfatizábamos esta doble proceso de estatización de la sociedad a la vez que de socialización del Estado.

El Estado de Bienestar fue acreditado en la posguerra como la solución política a las contradicciones sociales, y representó en cierto sentido la utopía de que podía constituirse una sociedad que no solo fuera democrática políticamente sino también socialmente. Este criterio fue convergente entre las élites políticas no solo de los lugares donde se encontraba plenamente desarrollado (como Inglaterra o Suecia por ejemplo) sino también en donde representaba un modelo irrealizado, sin embargo, sería a partir de mediados de los años setenta que en varios países capitalistas se cuestionaría este modelo por parecer ahora una nueva fuente de contradicciones y divisiones políticas.

#### **- Evaluación y crítica global del Estado de Bienestar**

Las críticas al Estado de Bienestar surgen tanto de la derecha como de la izquierda, a ambas Offe<sup>30</sup> las cataloga como neoconservadoras, y las criticará, más por lo que se callan que por lo que dicen.

El ataque de la derecha surge a mediados de los años setenta cuando la aguda recesión económica provocó un renacimiento intelectual del neo *Laissez faire* y de doctrinas económicas monetaristas. Desde esta perspectiva el Estado de bienestar se convierte en la enfermedad de lo que en un principio pretendió curar, es decir en vez de actuar como pacificador de los conflictos de la sociedad mercantil, los exacerba. Esto se debe a dos circunstancias: por un lado el Estado al imponer una carga fiscal y normativa al capital provoca un desincentivo para la inversión y, por otro lado al garantizar las pretensiones de los sindicatos y trabajadores a través de las posiciones de poder colectivas provocan un desincentivo para el trabajo:

---

<sup>30</sup> Offe Clause y Elke Köpen, "El renacimiento de las teorías conservadoras", en *Revista mexicana de sociología*, UNAM, México, Vol. 43. Número extraordinario, 1981, pp 1847-1866.

Tomados conjuntamente, ambos efectos conducen a una dinámica de crecimiento declinante y crecientes expectativas, de sobrecarga en la demanda económica (conocida como inflación) y a una sobrecarga en la demanda política (ingobernabilidad), que cada vez pueden satisfacerse menos por medio de la producción disponible.<sup>31</sup>

El problema de esta crítica para Offe no tiene que ver con la ausencia de veracidad en sus argumentos, el problema radica en que los teóricos conservadores -entre los cuales se encontraba en ese momento Huntington-, pensaban que el origen de esta crisis resultaba del proceso democrático político. Es decir, de las necesidades creadas y las sobre expectativas que resultan de la competencia entre organizaciones y partidos, el pluralismo de asociación y los medios de comunicación, poco o nada tenían que ver para estas posturas las contradicciones económicas. Ante esto el Estado estaba imposibilitado –con tal diagnóstico - se localizaba fácilmente la enfermedad, y la posible cura, que para la derecha significaría un regreso al *laissez-faire*, aunque se reconocía la imposibilidad de llevarlo a cabo de manera tan abrupta.

Por otro lado estaban las críticas por parte de la izquierda - también conservadora- al Estado de Bienestar, las cuales giran en torno a tres ejes: ineficacia, represión y un condicionamiento del entendimiento falso de la realidad social y política. La ineficacia se refiere a que el estado de Bienestar es simplemente un instrumento estabilizador, más no transformador que tiende a actuar para aligerar las consecuencias de las contingencias pero no para evitarlas. En segundo lugar la represión que tiene que ver con el creciente control del Estado a través de las burocracias así como de otras organizaciones, las cuales crean clientelas, además de no actuar únicamente como representantes sino al mismo tiempo como espacios de disciplinamiento. Y por último en cuanto a la ideología, el Estado social hace que la gente olvide que las contingencias son producto de las relaciones de producción.

En este punto cabe mencionar que sería importante referirnos a la teoría de los sistemas y el mundo de la vida elaborada por Habermas la cual permitiría no solo

---

<sup>31</sup> Offe Clause (1980), *Op. Cit.* p 138.

comprender el desarrollo y funcionamiento del Estado Benefactor, sino el origen de su crisis; este modelo al mismo tiempo nos permitiría comprender la última de las transformaciones operadas en el capitalismo surgiendo así el Estado nacional de competencia, mismo que explicaré más adelante.

**- La concepción del capitalismo tardío y del Estado benefactor a partir de la teoría de los sistemas y el mundo de la vida.**

Para Habermas las sociedades están compuestas por el mundo de la vida y el sistema. Simplificándolo mucho podríamos decir, que el mundo de la vida remite al universo dado de la vida social cotidiana, es el conjunto de estructuras normativas, valores e instituciones que definen los procesos de aprendizaje, de socialización, legitimación etc., está compuesto por la cultura (acervo de saber válido-interpretación del mundo), por la sociedad (entendida como el conjunto de instituciones que promueven la solidaridad) y la personalidad (creación de identidades a partir de los procesos de socialización).

Los sistemas en cambio, son definidos como organizaciones de acciones puramente estratégicas, organizaciones que emplean una razón “funcional” que no tiene nada que ver con las preocupaciones o normas humanas”.<sup>32</sup>La concreción de estos sistemas lo encontramos en el sistema económico capitalista y el sistema político racional legal.

La modernidad en su vis positiva de acuerdo con Habermas trae consigo la evolución de las sociedades, en términos de cambios, explícitamente en el proceso de diferenciación que se da entre el sistema y el mundo de la vida, y las sub diferenciaciones que se realizan en el interior de estos: “las estructuras de los mundos de la vida históricos no varían de forma contingente en el espacio definido

---

<sup>32</sup> Alexander Jeffrey, “Ensayo de revisión: la nueva teoría crítica de Habermas su promesa y problemas”, en Sociológica, Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, México, año 3, núm. 7, mayo-diciembre, 1988, p. 9.

por la forma de interacción, sino que lo hacen dependiendo de procesos de aprendizaje”.<sup>33</sup>

Los saldos positivos de esta evolución se observan en el mundo de la vida, en la revisión y crítica permanente a las tradiciones, la dependencia de la sociedad de órdenes legítimos resultado de procedimientos formales de creación y justificación de normas y por otro lado en cuanto a la personalidad, el proceso de individuación cimentado en elementos sumamente abstractos.

La modernidad en este sentido no es la puesta en práctica de *a priori*, la normatividad, el cambio y la diferenciación que apuntan a una mayor racionalidad, se entreteje en las acciones cotidianas como procesos mismos de aprendizaje:

La racionalización de un mundo de la vida no aumenta en modo alguno las probabilidades de que los procesos de reproducción se vean libres de conflicto- simplemente se desplaza el nivel en que los conflictos pueden presentarse. Con la diferenciación de las estructuras del mundo de la vida no hacen más que multiplicarse las formas en que pueden presentarse las patologías sociales, según que componente quede perturbado y porque causa<sup>34</sup>.

La sociedad moderna se constituye así como un sistema de sistemas, el dominio de la complejidad y la conservación de los límites está dada por la integración sistémica y la social. La primera remite los rendimientos colectivos de autogobierno regulado, articulado en las estrategias sociopolíticas que mantienen el sistema de intercambios económicos hegemónicos, es en pocas palabras la capacidad de un sistema para autoproducirse tanto material como inmaterialmente. En cambio la integración social remite a los procesos de socialización eficientes.

Falta explicar cómo a partir de este esquema se comprenden el funcionamiento del Estado social benefactor. Como lo habíamos mencionado antes el Estado social se constituye como una forma total, como un sistema de sistemas, su

---

<sup>33</sup> Habermas Jürgen, *Teoría de la acción comunicativa, Tomo II Crítica de la razón funcionalista*, Taurus, Madrid, 1987, p. 205.

<sup>34</sup> Habermas Jürgen, *El discurso filosófico de la modernidad (Doce lecciones)*, Taurus, Buenos Aires, 1989, p. 410.

principio de organización es pues el intercambio universal, liberado de restricciones normativas. Su funcionamiento y crisis se remite a su contradicción constitutiva.

Para Habermas se entiende por contradicción no la existencia de unos pares opuestos, o el conflicto:

De “contradicción fundamental” de una organización formal podemos hablar si y solo si a partir de su principio de organización puede deducirse la necesidad de que en ese sistema se enfrenten individuos y grupos siempre renovados con pretensiones e intenciones incompatibles a largo plazo<sup>35</sup>.

La contradicción constitutiva e irresoluble del Estado Social se expresa en una producción que es administrativamente socializada pero tiene un modo de empleo y de apropiación de la plusvalía privado. Esto define la naturaleza del sistema en su conjunto, el cual se reproduce en los parámetros de la racionalidad, la legitimidad y la motivación, y será en estos mismos en los que se podrá observar el proceso de crisis.

El proceso normal de funcionamiento del Estado social implica que a nivel de la racionalidad la administración realice tareas específicas en cuanto al proceso de acumulación y valorización y al mismo tiempo de distribución (política social, seguridad, infraestructura, etc.). La efectividad de la administración se convierte así en un insumo para la legitimidad, que se traduce en la lealtad de masas. A su vez los productos de consumo tanto material como inmaterial, provenientes del sistema económico y político, fundamentan la identidad y permiten crear la motivación que orienta las conductas y expectativas de los individuos.

Como punto de encuentro entre Habermas y Offe tenemos pues que ambos reconocen la validez de las argumentaciones neoconservadoras excepto por que para ellos el origen de la crisis está en el sistema político, mientras que para

---

<sup>35</sup> Habermas Jürgen (1973), *Op. Cit.* p. 56.

nuestros autores el origen está en la contradicción constitutiva de la naturaleza del sistema de acumulación.

Justamente la crisis es explicada por Habermas como un movimiento de desplazamiento de esa contradicción<sup>36</sup> :

- a) El sistema económico no produce la cantidad requerida de valores consumibles.
- b) El sistema administrativo no aporta decisiones racionales en el grado requerido.
- c) El sistema de legitimación no produce motivaciones generalizadas también en el grado necesario.
- d) El sistema sociocultural no genera sentido motivante de la acción en el grado imprescindible y básico.

En la medida en la que en el sistema económico no puede resolverse la crisis se desplaza a la administración y si no se resuelve ahí se desplaza al terreno de la legitimidad dentro del sistema político, pero si tampoco logra contenerse ahí, finalmente se desplaza hasta el mundo de la vida, poniéndose así en riesgo la integración social. Si la crisis no logra ser controlada en alguno de estos parámetros y los abarca a todos en un mismo momento, es cuando se podría hablar de una crisis de integración sistémica.

Llama particularmente mi atención la distinción hecha por Noemí Ponce Lujan, entre legitimidad y confianza, lo que en parte explicaría la gravedad que comporta el que la crisis se desplace hasta el espacio motivacional.

Existe una relación estrecha entre la legitimidad y la confianza aunque no son sinónimos. La legitimidad del orden político da pauta a que se cree la confianza que implica expectativas a futuro. La confianza es una relación social en la que un

---

<sup>36</sup> *Ibidem*, pp. 87-94.



individuo o un sujeto colectivo crea expectativas respecto a otro en el que deposita ciertas cualidades:

La vida cotidiana se desenvuelve “como sí” los individuos tuvieran control sobre los procesos gracias a la confianza, que les permite suplir información en forma de datos duros por una no tan dura expectativa de que las cosas se desarrollarán conforme a lo previsto. (...)La construcción de horizontes temporales y de identidades son mecanismos que permiten establecer significados que trascienden los límites de la experiencia individual. (...) Tal posibilidad de construcción de sentido opera precisamente como un mecanismo reductor de la complejidad.<sup>37</sup>

Como fenómeno paralelo a la confianza está la desconfianza, que históricamente está dado por la familiarización con una estructura social determinada donde se normalizan ambos parámetros (confianza / desconfianza) como un binomio funcional, porque está dentro de los parámetros de la normalidad. Sin embargo si la desconfianza se vuelve sistemática seguida de una pérdida de sentido hacia todo, es cuando ocurre el riesgo de caer en la negación de todo el orden existente.

Sin embargo, es muy difícil que un sistema llegue a desintegrarse completamente. En los hechos no es un fenómeno muy recurrente, puesto que existen diversos mecanismos que pueden ser utilizados para contener los conflictos.

La crisis en el capitalismo tardío, no produjo la desintegración total de los sistemas, el desplazamiento del conflicto que trae la diferenciación de estructuras del mundo de la vida y el surgimiento de la pluralidad que conlleva, hacen que el antagonismo de la lucha de clases se disgregue en una amplia dispersión de posibles contingencias históricas. Esto lo evidencia el surgimiento de movimientos sociales como el feminista, los ecologistas, los etnicismos etc., que dan cuenta de la complejización en la formación de identidades; pero que no se traduce en última instancia en la desaparición del sistema.

---

<sup>37</sup> Luján Ponce Noemí, “Construyendo confianza: gobernabilidad y democracia en una transición incierta”, en Labastida Martín del Campo Juan, Antonio Camou y Noemí Luján Ponce (Coor.), Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina, IIS, FLACSO y Plaza y Valdés, México, 2000., p. 66- 67.

Las tesis neoconservadoras ofrecieron la cura a esta crisis diagnosticada como enfermedad, en esto concuerda Habermas<sup>38</sup> con Offe:

- 1- Una política económica que orientada hacia la oferta mejorará las condiciones de capitalización y pondrá de nuevo en marcha el proceso de acumulación.
- 2- Los costes de legitimación del sistema político deben reducirse. La inflación de expectativas y la ingobernabilidad son términos para una política que se orienta a una desvinculación mayor entre la administración y la formación de la voluntad pública.
- 3- Una política cultural que opera en dos frentes: por un lado despolitizando a la opinión pública y desprestigiando a los intelectuales como clase ociosa. Por otro lado es necesario seguir cultivando los poderes de la ética convencional, del patriotismo, de la religión burguesa y la cultura popular.

Esta tesis neoconservadoras parecen haber sido exitosas en la medida en la que la crisis del también llamado Estado fordista, adviene una reconfiguración en cuanto a la relación entre “Estado” y “capital”, es decir, se crea un nuevo tipo de estado capitalista.

### **1.2.3 El Estado nacional de competencia**

El estado de seguridad fordista se basaba en una política intervencionista estatal, orientada al desarrollo del mercado interno, el crecimiento, el pleno empleo, etc.; por otra parte contaba con una base económica política y social que era el corporativismo permitiendo la negociación entre el Estado, las federaciones empresariales y los sindicatos. Gracias a esta base política es que se

---

<sup>38</sup> Habermas Jürgen, “La crisis del Estado de bienestar y el agotamiento de las energías utópicas”, en *Ibídem*, p. 175-177.

institucionalizó el conflicto de clases en forma de conciliaciones corporativas, en gran medida concretado jurídicamente y así superado relativamente.

El nuevo tipo de estado capitalista opera con una lógica completamente distinta:

La lógica de la función del Estado nacional de competencia se basa en conducir todas las esferas de la sociedad hacia lograr la capacidad competitiva en dimensión global, en aras de la rentabilidad de los “emplazamientos” para un capital internacional que se torna cada vez más flexible.<sup>39</sup>

Esta nueva lógica se enmarca en la “globalización”. Sin embargo es necesario advertir lo siguiente: desde sus inicios el capitalismo tuvo lugar en el contexto de los mercados mundiales, sin embargo el hacer referencia a la globalización remite a la peculiaridad producida por el desarrollo tecnológico gracias a lo cual se pueden conectar *on line* lugares distantes de manera relativamente sencilla. Esta revolución tecnológica implicó la transformación de la economía que tiene como nuevo núcleo la flexibilización del tránsito de capital.

Después del fracaso del sistema Bretton Woods se dio una apertura política de los mercados de dinero, capital y financieros. Esta movilidad se liga a la liberación progresiva de tráfico de mercancías y servicios, aunque en la realidad suele ser quebrantada por prácticas proteccionistas. Al mismo tiempo se da un proceso de regionalización de la economía mundial a través de la conformación de bloques competitivos internacionales. La Globalización significa para las empresas multinacionales la posibilidad de ocupar mercados nacionales y regionales que siguen estando separados entre sí. Basta que existan las condiciones de un mercado mundial globalizándose para que la política estatal éste condenada al fracaso si toma en cuenta los intereses del capital internacional.

En este sentido la política asume la forma de negociaciones siendo las multinacionales la parte “independiente”, lo novedoso es que cada vez más esta forma se expande a áreas como las políticas tecnológicas, de comunicación,

---

<sup>39</sup> Hirsch Joachim, *Op. Cit.*, pp 147.

urbanismo, salud etc., hoy en día su movilidad global y la simple amenaza de retracción les confiere una posición cada vez más determinante frente al Estado.

En mayor o menor medida, dependiendo los contextos específicos de los países, este tránsito del Estado de seguridad social al Estado de competencia ha implicado:

1. Destrucción de los pactos corporativos de bienestar material y regulación de las relaciones laborales y su remplazo por el nuevo modelo de flexibilidad laboral y precarización de las relaciones contractuales salariales.
2. Abandono del control estatal de los movimientos del dinero y capitales en el espacio territorial nacional y redireccionamiento de las políticas estatales: Privatización, desregulación y competitividad.
3. Difusión de las instituciones de la democracia liberal como paradigma universal de legitimidad política.
4. Construcción de una nueva hegemonía que, remplazando los valores keynesianos de justicia distributiva y bienestar material, hace de la competencia el éxito personal y la productividad individual el sustento espiritual del nuevo modo de dominación.<sup>40</sup>

Aunque parezca paradójico el Estado sigue siendo uno de los pilares esenciales para esta forma de funcionamiento del capitalismo, al constituirse en un sistema total con capacidad para ser el garante de la reproducción capitalista, efectuar la mediación política y, al mismo tiempo, agente activo en la construcción de los mercados que son siempre creados política e institucionalmente. Lo paradójico es que frente a las teorías conservadoras que propugnaban por una reducción del Estado, la desregulación, el desmantelamiento del corporativismo, la difusión de nuevos valores competitivos, estos sólo pueden ser implementados por iniciativa del mismo Estado.

---

<sup>40</sup> Roux Rhina, "La desintegración de la res publica", en *Argumentos*, UAM- Xochimilco, Núm. 53 enero-abril 2007. pp. 96-97.

### **1.3. ¿Cómo estudiar los procesos de transformación de Estados específicos en los que los cambios están operando?**

En la investigación que llevo a cabo pretendo realizar un estudio sobre las transformaciones y el funcionamiento del Estado mexicano, mismas que se han operado en los últimos cien años y que viven en la actualidad un momento bastante álgido.

El problema radica en encontrar el marco teórico idóneo que me permita comprender todos los procesos que permiten la conformación de éste Estado así como su funcionamiento. Razón por lo cual se debe comenzar por adentrarse en los distintos debates y ejes problemáticos existentes en la literatura especializada sobre el tema.

En las ciencias sociales parecen existir siempre vanguardias, ya sea entendidas como modas o como ejes problemáticos que son estudiados recurrentemente hasta ser agotados y remplazados por nuevos temas de interés.

El estudio sobre el Estado ha sido siempre una preocupación tanto para la Sociología como para la Politología, y ha estado marcado por diferentes tendencias particularmente en el estudio de Estados como los latinoamericanos. En ese sentido desde hace dos décadas se ha tratado de teorizar y analizar los cambios socio políticos, para lo cual en algunos casos se ha tenido que renunciar a los tres principales marcos de análisis como son el pluralista, el clientelista y autoritario corporativista; dando como resultado esquemas eclécticos que explica los cambios mezclando factores nuevos y viejos<sup>41</sup>.

La teoría de la modernización es la que guía el enfoque pluralista, en el que se afirma que en América Latina surgiría de manera natural la democracia como

---

<sup>41</sup> Branchet Marquéz Viviane, "Transformación democrática en América Latina: un intento de teorización, en Viviane Marquéz Brachet (Coor), *Entre Polis y Mercado: el análisis sociológico de las grandes transformaciones políticas y laborales en América Latina*, El Colegio de México, México, 2001. p 25-95

resultado de procesos de largo plazo en materia de alfabetización por una parte, una economía capitalista, así como una sociedad civil participativa, un sistema común de valores y un sistema social abierto que te permita ascender a la población en la escala social.

Esta postura ha sido muy criticada ya que, en los hechos, esta combinación ha provocado en América Latina un crecimiento desigual colocando a la población en los índices más agudos de pobreza y en otras ocasiones consolidando dictaduras o tumultos populistas. El problema de fondo de esta teoría reside en:

Su uso de la teoría evolutiva y la suposición de los teóricos de la modernización de que todas las sociedades avanzan en un continuo de desarrollo lineal desde la sociedad tradicional hasta la sociedad moderna, como ocurrió en Occidente.<sup>42</sup>

Cada sociedad presenta estructuras sociales distintas e inclusive dentro de las que se denominaron por mucho tiempo como “subdesarrolladas” por lo que no se puede establecer un patrón de cambio igual a Occidente de ningún tipo en éstas.

Esto provocó que hubiera una modificación en dicha teoría ya que ahora no se esperaba que la democracia surgiera de forma natural como producto de las características estructurales antes mencionadas (como lo propone Seymour Martín Lipset<sup>43</sup>), sino que al contrario una vez que se haya dado el cambio de régimen impulsado por una coalición de élite, esto hará aparecer de forma espontánea una sociedad civil participativa; aunque en muchas ocasiones esta participación se reduce al voto, por que se cree que la existencia de un mercado político electoral garantiza la responsabilidad del gobierno. Lo mismo sucede con el debate acerca de los valores y la cultura política ya que estos ahora se ven como consecuencia de la instauración de la democracia y no al revés; aunque el debate acerca de los valores sigue vivo.

---

<sup>42</sup> Mattiace Sanan y Roderic Ai Camp, “Democracia y desarrollo: un panorama general”, en *La democracia en América Latina. Modelos y Ciclos*; Roderic Ai Camp (comp.), Siglo XXI, México. 1997. p. 29

<sup>43</sup> Cfr. Lipset Seymour, *EL hombre político. Las bases sociales de la política*, Buenos Aires, Eudeba, 1963.

Por otra parte, la explicación del cambio sociopolítico a partir de la teoría corporativista ilustra las tensiones entre los factores estructurales y culturales propios de los países latinoamericanos, los cuáles conservan socialidades y concepciones del sistema político, que como lo explica Roderic, parafraseando a Péter Klarén residen en:

La tradición del Estado orgánico (que hace hincapié en la comunidad política y en el papel central del Estado para alcanzar el bien común), y afirma que tuvo su origen en Aristóteles y pasa por el derecho romano, el derecho natural medieval y la filosofía social católica contemporánea.<sup>44</sup>

En el texto antes citado de Viviane Brachet, se señala que hay que poner especial atención en el enfoque modernizador que choca fuertemente con la realidad, si ponemos atención a casos como el de Argentina que al comenzar a ser próspera era poco propensa a la democracia; o el caso de Costa Rica que siendo más pobre era más consistente en cuanto a la democracia, así como el caso de México, en dónde, las demandas de autonomía y participación provenían de los sectores más pobres como el caso del movimiento zapatista.

Se pensaba que los estudios acerca de las transiciones democráticas permitirían abrir el panorama respecto a la visión evolutiva y lineal de desarrollo y del tránsito de una forma de sociedad a otra, ya que recordaban que la complejidad social determinada históricamente de forma específica en cada país, provocaría también que los cambios y procesos tengan características distintas por lo que la dinámica del cambio socio político presenta particularidades de región a región. Por otro lado se debería tener especial cuidado al estudiar la “transición” ya que al reconstruir los procesos no sería adecuado apelar a la racionalidad y la experiencia de las élites o el determinismo olvidando la contingencia por lo que:

---

<sup>44</sup> *Ibíd.*, p. 30.

Referirse a un sistema sociopolítico como “en transición” ya no significa localizarlo en algún lugar entre dos extremos, y solo asumir que está cambiando. Implica además, analizar cambios reales tal como se presentan, con traslapes y tensiones entre lo viejo y lo nuevo, señalar los efectos aceleradores o desaceleradores que tienen eventos clave y coyunturas críticas, e imaginar varios escenarios posibles. También significa que la incertidumbre ha sido incorporada al imaginario sociológico.<sup>45</sup>

Sin embargo, a pesar de este esfuerzo analítico que comporta el estudio sobre las transiciones, ha privilegiado el estudio sobre el régimen político lo cual parece insuficiente. Al menos para la empresa de esta investigación, puesto que estos marcos interpretativos no están dirigidos a entender la racionalidad subyacente que dirige la lógica de las transformaciones del Estado, y es que el horizonte de comprensión ha estado muy influido por las tesis de la posmodernidad y el pragmatismo estadounidense. Ello ha determinado que cualquier procedimiento crítico que trate de comprender las transformaciones del Estado desde una perspectiva analítica en la que se vinculen esas mutaciones con los fenómenos de la explotación y la dominación social, de inmediato quede descartado como “anticuado”, “superado”, “holista”, “metafísico”, “pretencioso”, “valorativo”, “economicista”.

El problema con los estudios sobre la “transiciones” y “consolidaciones” democráticas, es que quedan enmarcados en una lógica en espiral que se vuelve irresoluble, al crearse un esquema general del proceso, que choca con el acontecer específico en los diversos países y que lleva al reconocimiento de ambigüedades, pero sin lograr explicar el porqué de las mismas. Abriendo además así un debate interminable sobre los límites de la democracia en términos normativos.

Como producto de una obsesión típicamente anglosajona de los 50 y 60, las energías se empeñaron en calificar quienes eran países desarrollados y quienes eran países en vías de desarrollo. Actualmente la premura persigue “implantar”, “reconocer” o “consolidar” los procesos de “democratización” como una tendencia irreversible, única y exclusiva. Se pasa

---

<sup>45</sup> Branchet Marquéz Viviane, *Op cit.*, p. 36.



de una constatación de cambios políticos reales a una consideración normativista de los mismos.<sup>46</sup>

Gillermo O'Donell, quien es uno de los principales teóricos sobre el tema afirma concluyentemente: "La existencia de un régimen democrático puede bastar (metonímicamente) para calificar a un país como democrático, aunque en el mismo haya serias deficiencias en lo que se refiere a la efectividad de varios derechos civiles y sociales"<sup>47</sup>.

A mi parecer el análisis que lo lleva a esta conclusión entra en esa espiral que mencione en los párrafos anteriores y me parece pertinente explicar el por qué. El régimen es entendido como: "Las pautas formales e informales, explícitas e implícitas, que determinan los canales de acceso a los principales cargos de gobierno, las características de los actores admitidos y excluidos de tal acceso, y los recursos y estrategias que se les permite emplear para lograr el mismo"<sup>48</sup>.

Para comprender si el régimen es democrático, aunque por democracia se acuñe una definición tan pragmática como la de Schumpeter<sup>49</sup>, es necesario tomar también en consideración al Estado pero sobre todo visto como un orden legal así como algunas características del contexto. Así, explica O'Donell que, la idea de democracia entendida como un método y arreglo para toma de decisiones políticas, caracterizado por ser aquel en el que los individuos adquieren el poder de decisión a través de la lucha competitiva de sus votos, no es tan minimalista como parece puesto que entra en juego solo en la medida en la que se relaciona con los principios jurídicos y morales de una sociedad.

---

<sup>46</sup> Fernández Reyes Otto, "Política economía y subjetividad: De la transición posible a la consolidación improbable", en *Revista sociológica*, UAM- Azcapotzalco, México, año 7, núm. 19, mayo-agosto de 1992. p.5.

<sup>47</sup> O'Donell Gillermo, "Teoría Democrática y Política comparada" en, Víctor Alarcón Olguín (Coor.), *Metodologías para el análisis político*, UAM- Iztapalapa, México, 2006.p. 221.

<sup>48</sup> *Ibidem*, p. 180.

<sup>49</sup> Schumpeter definirá la democracia como un método político, es decir un procedimiento institucional para llegar a la toma de decisiones a partir de la lucha competitiva electoral. Vid Joseph Alois Schumpeter, *Capitalismo, Socialismo y Democracia*, Folio, Barcelona, 1984.

Para este concepto de democracia la característica principal del régimen democrático implica que existan elecciones limpias, sin embargo esto a su vez requiere que exista un conjunto básico de libertades incluyentes y universalistas, que a su vez deben tener un margen de efectividad real, es, decir, una agencia efectiva de individuos que puedan desarrollar sus potencialidades, y a su vez enmarcado en un Estado delimitado territorialmente en el que son efectivos, y que asegura además su aplicabilidad así como la coacción en caso de no ser así. Pero aquí advierte O'Donnell que, el problema con las libertades y con la característica de los contextos sociales que deben posibilitarlos, tiene límites, pero estos son indecibles.

Por lo que ahora podemos entender la conclusión a la que llega, y que al mismo tiempo evidencia el callejón sin salida de estos tipos de análisis, parece entonces que se tiene dos opciones como investigadores: primero nos apresuramos a afirmar el carácter democrático de los países o en segundo lugar nos dedicamos eternamente a seguir utilizando tipologías como “democraduras”, “semi-democracias”, “poliarquías”, etc, que simplemente nos enfrascan en una discusión normativista para indicar quien va por buen camino y quien no hacía lo que se cree es la mejor de las formas posibles de existencia política que es la democracia, pero tampoco cualquier democracia, sino en su forma liberal.

El problema con este tipo de enfoques es que se ocupan únicamente de la gobernabilidad y omiten la dominación. Si lo que se quiere comprender es los procesos de transformación, crisis, desintegración o superación con todas las ambigüedades y contradicciones que se presentan en las sociedades, es necesario hacerlo a partir del Estado entendido este como una configuración total, donde se producen los desenlaces sistémicos y en los que se mueven los sujetos sociales en las distintas lógicas de reproducción tanto económicas, como políticas y socioculturales.

Para estudiar los procesos de transformación de los Estados, se dirijan a donde se dirijan (modernización, democratización, autoritarismo, etc.), es necesario primero explicar su funcionamiento o en dado caso la ausencia del mismo. Es, decir, en términos del enfoque Habermasiano antes expuesto, es necesario comprender como se reproduce el sistema en su conjunto, con sus procesos de aprendizaje, diferenciación, racionalización, legitimidad y cohesión, todo lo cual lleva a la preservación del sistema autónomo como tal.

Es por eso que Samuel Huntington afirma que la diferencia política más importante entre los países se refiere no a su forma de gobierno, sino al grado de gobierno con que cuentan. Es decir, para una sociedad que acepta vivir en comunidad, su primordial necesidad es la de ser gobernados, puede ser muy favorable el que sea un autogobierno, que sea un gobierno justo, pero que a final de cuentas sean gobernados, porque lo que se juega aquí es la necesidad de preservar la existencia de la comunidad política.

La capacidad de funcionamiento se relaciona con la capacidad de institucionalización de una sociedad, como lo menciona Huntington siguiendo a los clásicos es la capacidad de una sociedad para trascender la existencia de sus individuos. Una comunidad no implica cualquier tipo de agrupamiento, sino uno regularizado, estable y en la medida de lo posible permanente. Cuanto más compleja y heterogénea es una sociedad, el logro y mantenimiento de la comunidad política depende más del funcionamiento de instituciones específicas, que serán eficaces en la medida en que se reproduzcan con altos niveles de coherencia, autonomía, complejidad y adaptabilidad:

Si una sociedad quiere mantener un elevado nivel de comunidad, la expansión de la participación política, debe ir acompañada por el desarrollo de instituciones políticas más fuertes, complejas y autónomas. Pero esa expansión socava por lo general a las instituciones políticas tradicionales y obstruye el desarrollo de las modernas. Así la modernización y la movilización social tienden a producir en especial una decadencia política, a menos de que se tomen medidas para morigerar o reducir su impacto sobre la

conciencia y la participación políticas. Gran parte de las sociedades, aún aquellas que poseen instituciones políticas tradicionales bastante complejas y adaptables, sufren una pérdida de comunidad política y una decadencia de las instituciones durante las fases más intensas de modernización.<sup>50</sup>

Específicamente en esta cita Huntington se refiere a los procesos de modernización y el paso de las sociedades tradicionales a las complejas, sin embargo podemos hacer extensiva esta afirmación a todos los procesos de cambio que han experimentado los Estados a lo largo de la historia especialmente en la época actual en la que la globalización y la nueva forma de acumulación del capital han obligado a los sistemas a reorganizarse, a plantear nuevos límites, nuevas formas de socialización, etc., que exige un aprendizaje continuo como sistema en la búsqueda de integración sistémica que busca reproducirse y auto preservarse.

Al estudiar los casos latinoamericanos, siempre existe una predisposición a verlos como excepcionales, ambiguos, o atrasados, mismo que ha llevado afirmaciones tales como las de Arturo Waldman, quién se refiere a éstos como Estados anómicos, básicamente porque: los estados no ofrecen a sus ciudadanos ningún marco de orden para su comportamiento en el ámbito público, provocando una ambigüedad que consiste en que los ciudadanos no están seguros de que reglas deben obedecer, si las universalistas del Estado o las particularistas de diversos grupos que operan en él. Al mismo tiempo el propio personal estatal se convierte en focos de desviación de las normas<sup>51</sup>. Para este autor, los Estados anómicos son débiles, aunque siguen siendo estados, el problema es que en estos casos la función del Estado de ofrecer un marco vinculante que haga que tanto el comportamiento estatal como el social sean calculables hasta cierto punto no se realiza del todo, lo que provoca que no se produzca correctamente la mínima confianza social básica. En este caso la anomia es referida a un problema de

---

<sup>50</sup> Huntington Samuel, *El orden político en las sociedades en cambio*, Paidós, Buenos Aires, 1972, p. 86.

<sup>51</sup> Vid. Waldman Peter, *El Estado anómico: derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina*, Iberoamérica, Madrid, 2006.

regulación social, no de integración social, lo que está en riesgo aquí es la eficiencia de algunos procesos sociales no el de la integración.

Es curioso como con marcos similares de referencia Huntington y Waldman lleguen a conclusiones tan distintas sobre un mismo caso como lo es por ejemplo México. Para el primer autor el Estado posrevolucionario es un claro ejemplo de una institucionalización exitosa, mientras que para el segundo autor es considerado como un “falso Leviatán”.

Aunque a mi juicio me parece más acertada la conclusión de Huntington, debe tenerse en cuenta este debate al estudiar los procesos de cambio y de conformación del Estado, repensando en qué medida se pueden escindir los problemas de regulación de los de integración. Y teniendo también en cuenta la peculiaridad de la conformación histórica de los estados latinoamericanos, y la manera en la que diversos momentos fundacionales repercuten en su reproducción, a pesar de los cambios y muchas de las veces de manera no consiente.

Este tipo de estudios en los que se debate qué tipo de Estado es el que finalmente se consolidará mundialmente, es decir, si los estados deben ser débiles o fuertes, intervencionistas o no y las condiciones que posibilitan o merman su configuración<sup>52</sup> comienzan en los años noventa como reflexiones impulsadas a partir de la caída del Muro de Berlín y del Bloque Soviético, pero tienen repercusiones en las reflexiones académicas actuales sobre todo a partir de la crisis financiera del 2008 estados deben ser débiles o fuertes, intervencionistas o no y las condiciones que posibilitan o merman su configuración<sup>53</sup>. Además de términos como Estados anómicos encontraremos nuevas terminologías como:

---

<sup>52</sup> Vid. Esquivel Solís Edgar, “Las transformaciones del Estado. Una aproximación al debate contemporáneo”, *Revista Argumentos: El Estado otras miradas*, UAM- Xochimilco, México, No. 65/año 24, 2011, pp. 39-56.

<sup>53</sup> Vid. Esquivel Solís Edgar, “Las transformaciones del Estado. Una aproximación al debate contemporáneo”, *Revista Argumentos: El Estado otras miradas*, UAM- Xochimilco, México, No. 65/año 24, 2011, pp. 39-56.

Teniendo a la legitimidad y la debilidad institucional como eje temático se comenzaron a utilizar términos como “Estados fallidos” o “cuasi- Estados”. Este tipo de términos hacen referencia a los estados con bajo nivel de institucionalización, o con problemas para ejercer la soberanía tanto al interior como el exterior, por lo que se toman indicadores económicos, políticos y sociales para medirlo como: el nivel de desarrollo económico, niveles de desigualdad, desplazamientos masivos al interior y fuera del territorio, deterioro de servicios públicos, niveles de violencia, presencia de crimen organizado, intervención de otros estados, etc. Lo cual los lleva a ser estados peligrosos no solo para los ciudadanos que los habitan sino para el contexto internacional<sup>54</sup>.

Otro eje temático de análisis es la decadencia de los estados a partir de los niveles de corrupción, específicamente a partir de los años ochenta en los que se reconfigura el Estado en medio del avance del neoliberalismo. Se utiliza el termino “Estado capturado” para referirse al conjunto de personas, grupos o empresas que influyen sobre decisiones que anteriormente solo competían al Estado como la elaboración de leyes, decretos y políticas gubernamentales de diverso tipo, buscando su beneficio privado en medio de procesos que la mayoría de las veces son ilícitos<sup>55</sup>.

Este tipo de estudios arrojan luz, sobre algunas características del funcionamiento estatal, sin embargo también se debe tener cuidado en que no se vuelvan conceptos normativistas y por lo tanto estériles. Por tal motivo en el presente trabajo de investigación es primordial, poner especial atención en el Estado entendido como un proceso, que varia históricamente de país a país, haciendo que aunque se compartan indicadores, en la realidad se observen consecuencias político sociales muy diferentes.

---

<sup>54</sup> Este análisis es impulsado por Moisés Naim, quién a través de la revista *Foreign Policy* ha creado indicadores y realizado mediciones sobre diversos estados.

<sup>55</sup> Esquivel Solís, *Op.cit*, pp. 47-49.

## Conclusiones

Todo lo desarrollado en el presente capítulo me permitirá acercarme a mi objeto de estudio que es el Estado mexicano. Con las salvedades, excepciones y ambigüedades que presenta tanto en su proceso de conformación como en sus múltiples transformaciones, en todo caso lo que me interesa es estudiar de qué manera se reproduce el mando estatal, la dominación, el ejercicio de soberanía, la manera en la que el estado se relaciona con la economía y la que funciona como una institución total como contenedora de sentido y a la vez como despliegue de sus facultades en sus aparatos, es decir, la ausencia o capacidad en términos de integración sistémica y social para reproducirse como un sistema autosuficiente.

El proceso de conformación del Estado, en su forma liberal, de seguridad social y por último de competencia, es un modelo que se gestó históricamente y que se procesado teóricamente para ser explicado, remite la mayoría de las veces al modelo de las sociedades avanzadas como Europa o los Estados Unidos, sin embargo no podemos por eso desecharlos para el caso de México, puesto que el proceso de construcción como Estado- Nación estuvo siempre ligado a Occidente.

Justamente el contenido del siguiente capítulo implica el análisis de este proceso de construcción tratando de comprender de qué manera se construye y reproduce el Estado mexicano como un estado total, que se desenvuelve con una lógica específica presentando ambigüedades y contradicciones pero manteniendo por un largo tiempo la estabilidad traducida en integración tanto social como sistémica y detectando en qué momento se dan rupturas, como logran o no ser subsanadas y comprendiendo las implicaciones de los procesos de transformación y perpetuación de la comunidad política en medio de estos procesos.

## **CAPÍTULO II.**

### **LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MEXICANO: CONCRECIÓN, RUPTURAS, TRANSFORMACIONES Y CRISIS.**

*El momento trágico es, pues, aquel en el que se abre en el corazón de la experiencia social una fisura lo bastante grande para que entren el pensamiento jurídico y político por un lado, las tradiciones míticas y heroicas por el otro, se esbocen claramente las oposiciones; pero lo bastante leve a la vez para que los conflictos de valor se sientan todavía dolorosamente y la confrontación no deje de llevarse a cabo.*

Jean- Pierre Vernant

#### **Introducción**

El estudio de la conformación, consolidación, así como el cambio en los Estados ha implicado la recurrencia al estudio histórico comparativo. La pertinencia de este enfoque radica en la necesidad de estudiar el cambio no como un proceso lineal, ni persiguiendo un fin teleológico, que busca dar explicaciones unicasales a los fenómenos.

La formación del Estado mexicano como cualquier otro remite a la confluencia de procesos conflictivos y contradictorios, que implican la implementación del proyecto modernizador del estado, que a su vez, involucró la agrupación de proyectos liberales, populistas y por último neoliberales, a la par de la integración o las resistencias por parte de los subordinados a estos procesos.

Ahora bien el recorrido histórico no pretende ser historiográfico, es decir, no implica referencias exhaustivas a nombres, fechas y hechos minuciosos ordenados cronológicamente, es más bien a partir de una revisión crítica de algunos textos desde diversos enfoques que pretendo detectar como a partir de la revolución y los procesos subsecuentes se le fue dando contenido específico a categorías tan abstractas como el orden moral, la legitimidad, la forma de



autoridad, la hegemonía y la soberanía que permitieron la reproducción de la comunidad estatal.

Evidentemente estudiar el cambio social o específicamente el cambio político implica recurrir a la historia puesto que:

Toda estructura social tiene una dimensión temporal que excede el período de vida de cualquier individuo. (...)Por consiguiente, con el fin de ampliar el periodo de cambios observables es menester confiar en abstracciones extraídas de los datos históricos, con vistas a llegar a proposiciones vinculadas con el cambio social. Tales proposiciones no constituyen generalizaciones en el sentido común de la palabra, lo que hacen, más bien, es establecer que cierto tipo de estructuras han dejado de predominar y su lugar ha sido ocupado por otra<sup>56</sup>.

Es imposible detectar si se ha dado un cambio en el orden moral político que sustenta al Estado mexicano si no se realiza este recorrido histórico, puesto que parto del supuesto de que existen momentos fundacionales, es decir momentos claves ya sean hechos violentos, pactos, líderes emblemáticos, o procesos que repercuten a nivel de imaginarios, que después son reproducidos en la vida cotidiana afianzándolos y que finalmente pueden ser derrumbados por cambios estrepitosos o paulatinos.

Como lo mencionamos en el capítulo anterior, existen diversas corrientes de pensamiento que trataron de analizar el sistema político mexicano, la interpretación histórica que resultaba de estas corrientes tenía como ejes temáticos el pluralismo (complejización de la sociedad, procesos democratizadores, desarrollo etc), el autoritarismo (enmarcado en la crítica a la parafernalia republicana y democrática) o el marxismo (que concibe al Estado mexicano como comprometido con la forma de producción capitalista, pero al mismo tiempo como el eje articulador situado por encima de las clases sociales, el llamado bonapartismo).

En el presente capítulo se retoman conceptos y formas de análisis de estas corrientes, pero teniendo como objetivo mostrar la construcción del Estado como

---

<sup>56</sup> Bendix Reinhard, *Estado nacional y ciudadanía*, Amorrortu, Buenos Aires, 1964. p. 22-23.

un proceso conflictivo, que al mismo tiempo logra ser efectivo para contrarrestar los cambios permitiendo la cohesión y permanencia de la comunidad política por más de setenta años, hasta llegar a los ochenta, cuando los cambios empiezan a representar modificaciones más profundas en términos de la dominación como sistema.

El Estado mexicano se configura en un proceso histórico en tres grandes coordenadas caracterizadas por la tensión constante de los procesos de modernización:

- En el siglo XIX ante el remplazo de la hegemonía mundial española por la británica, con el triunfo del liberalismo y el despegue de la acumulación capitalista estadounidense, los liberales mexicanos emprendieron el proceso de construcción del Estado- nación, el cual se extendió no solo al porfiriato sino hasta el régimen posrevolucionario llegando hasta la expropiación petrolera en 1938.

En el presente capítulo partimos de la breve reconstrucción acerca del periodo cardenista puesto que el Estado mexicano aparece aquí como la concreción del estado moderno como tal descrito desde la teoría política.

El proyecto del liberalismo había implicado en un primer momento la conservación de la integridad del territorio nacional (entre 1836 y 1853 se habían perdido los territorios de Texas, Nuevo México, Alta California y la Mesilla), la afirmación de la soberanía tanto al interior como al exterior, así como la construcción de una esfera pública secularizada (la Guerra de Reforma). Entre 1892 y 1913 el proceso de modernización durante la expansión del capitalismo trastocaría el mundo agrario propiciando la Revolución.

Sería hasta el periodo de entreguerras (1918-1939) que se optaría por el corporativismo como forma de Estado, ante el eminente compromiso con la lógica del desarrollo capitalista, pero que buscaba conciliar con la base social de masas (volviéndolo un estado contradictorio). En el Cardenismo es que se reafirma la soberanía, se reconstruye una idea de bien público, una forma de legitimidad, de transmisión pacífica del mando, es decir un modelo de dominación en su conjunto.

- El período subsecuente hasta llegar al año 1974, estuvo inmersa en la larga fase de crecimiento y expansión capitalista de la segunda posguerra, con su correspondiente forma política conocida como Welfare State, que se tradujo en el país como “el milagro mexicano”. Lo importante de este periodo es mostrar como el engranaje construido con el Cardenismo, aunque con leves modificaciones mantiene funcionando toda la estructura de la dominación y moldeando los conflictos aún terminando el ciclo de reformas sociales y a pesar de la aparición de movimientos sociales que mostraban indignación ante diversos agravios.
- Será a partir de los años ochenta y continuada hasta la actualidad, que se produzca una reorganización del Estado a partir del contexto de la globalización y su variante neoliberal, que busca transformar al Estado social autoritario en un Estado nacional de competencia.

## **2.1 El Cardenismo: la concreción de todos los mitos.**

A lo largo de la historia en México el proceso de construcción del Estado y sus instituciones estuvo atravesado por momentos de conflicto y de violencia, después de la conquista los procesos subsecuentes representaban la complejidad de crear una identidad que fuera la síntesis histórica de los diversos momentos fundacionales y las diversas formas de relación social. La conflictividad en la conformación del Estado Mexicano estuvo y ha estado dada por los distintos proyectos entrecruzados que pretendían insertarlo en la modernidad. Esta peculiar experiencia de la modernidad comienza desde la llegada del liberalismo europeo, pasando por la emblemática Constitución de Cádiz en 1812, las reformas juaristas, el ciclo de violencia agraria del siglo XIX, y la revolución mexicana como respuesta a la ofensiva porfirista.

La construcción del Estado moderno, es entonces excepcional por la naturaleza de los pactos, por las alianzas y rupturas entre las clases dirigentes, entre la elite y sus subordinados, y entre éstos últimos.

El Cardenismo se presentaría como la culminación del proceso histórico de construcción del Estado mexicano, puesto que resolvió la peculiaridad del pacto fundacional y sentó las bases que permitirían la reproducción de la comunidad estatal en todos sus niveles.

La Constitución de 1917, fue producto de la correlación de fuerzas que resultaron de la revolución, en el documento estaba dada la naturaleza contradictoria del Estado mexicano, que tenía a la vez un origen popular, así como un compromiso con el desarrollo capitalista, más que con una clase<sup>57</sup>. Por lo que la relación entre Estado y masas sería al mismo tiempo de alianza como de control<sup>58</sup>. Cuatro de las interpelaciones claves de la Constitución estaban contenidas en los artículos: 3° (educación masiva), 27° (reforma agraria), 123°, (régimen laboral) y la 83° (no reelección). Todos estos pilares que evidencian la contradicción entre aspiraciones tanto revolucionarias como liberales.

El periodo caudillista que siguió a 1917 comprendió rápidamente que la conservación de estos pilares permitiría la lealtad de las masas, sin embargo, esta contradicción originaria se manifestaría constantemente en las distintas visiones y proyectos de las élites que se disputaban el control del Estado, la correlación de fuerzas entre éstos, así como entre éstos y la presión de los subordinados, dando como resultado que no todos los gobiernos fueran populistas, pero que intentaran parecerlo.

Desde la década de los veinte se iniciaría la reconstrucción de la economía por lo cual se establecieron los mecanismos jurídicos e institucionales necesarios como la creación de diversas instituciones entre 1925 y 1926: la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México, la Comisión Nacional de Caminos, el Banco de

---

<sup>57</sup> Basáñez Miguel, *El Pulso de los Sexenios. 20 años de crisis en México*, Siglo XXI, México, 1990. pp. 29- 33.

<sup>58</sup> En el arreglo constitucional confluían tanto el liberalismo como el nacionalismo, y las aspiraciones revolucionarias. El primero impulsado por los liberales mexicanos decimonónicos, que tenía como propósito instaurar un gobierno de leyes, una esfera pública secularizada, la afirmación de la soberanía tanto al interior como al exterior, así como un estado de derecho y en resumidas cuentas una forma republicana de Estado. Y al mismo tiempo contenía como resultado de la revolución las demandas de las clases obreras y campesinas.

Crédito Agrícola, la rehabilitación de los ferrocarriles, la promulgación del Código Nacional Eléctrico y la Ley de Industrias Mineras. En 1931, en medio del desmoronamiento de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y el impacto de la crisis de 1929 se promulgaría también la Ley Federal del Trabajo que sentaría las bases de la regulación corporativa de las relaciones laborales<sup>59</sup>.

Paralelo al proceso de la reconstrucción económica, -como ya es bien sabido- el tránsito de la época de los caudillos a la época de las instituciones estuvo impulsado por el proceso de modernización política de Calles y con la creación del emblemático Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. La reelección presidencial de Obregón había evidenciado que faltaba un acuerdo para la circulación interna del mando entre los miembros de la burocracia política, con la creación del PNR se trasladaría la disputa política del ejército al partido:

El objetivo de esta nueva organización será no el de competir por la toma y preservación del poder frente a otros partidos, sino el de proveer un mecanismo a través del cual se resolvieran pacíficamente las múltiples controversias existentes en el seno mismo del grupo gobernante, especialmente aquellas provocadas por la transmisión del poder, a nivel local o nacional.(...) El PNR fue concebido como un partido de cuadros y no de masas; la incorporación de los contingentes obreros y campesinos organizados tuvo entonces una prioridad muy secundaria.<sup>60</sup>

En realidad el PNR fue creado por la casta militar triunfante, que veía en el partido la posibilidad de darle legitimidad republicana a su monopolio, echando mano de la realización de elecciones y el relevó periódico - que no alternancia- , había surgido como una extensión partidaria del aparato estatal, por lo cual se justificaría el uso patrimonialista de los recursos públicos.

---

<sup>59</sup> Este marco jurídico laboral limitaba los despidos, autorizaba huelgas aunque con ciertas restricciones, obligaba a los sindicatos a obtener el reconocimiento estatal como condición de su legalidad, hacía obligatorio el arbitraje estatal en conflictos laborales, contenía la cláusula de exclusión, reconocía el contrato colectivo, etc., es decir, convertía la relación laboral en una relación estatal.

<sup>60</sup> Meyer Lorenzo, "El Estado mexicano contemporáneo", en *Historia Mexicana*, El Colegio de México, México, Vol. 23, No. 4, Apr. - Jun, 1974. p. 729-731.

Sería el problema agrario de los años treinta<sup>61</sup>, el que dividiría a la élite gobernante al interior del partido entre “agraristas” (Lázaro Cárdenas, Francisco J. Múgica, Adalberto Tejeda, Gilberto Fabila, Marte R. Gómez, Graciano Sánchez, Saturnino Cedillo y Leonides Andrew Almazán) y “sonorenses” (encabezados por Calles y su proyecto modernizador)<sup>62</sup>. Los primeros veían en el ejido una forma permanente de posesión y trabajo de la tierra que no se podía incorporar a la lógica del mercado; en cambio para los sonorenses el ejido era una formación transitoria, lo que querían era la construcción de un país de “farmers”, es decir la conversión de la tierra en mercancía y de los campesinos en pequeños “rancheros”. Este conflicto es el que enfrentaría directamente a Calles con Cárdenas en 1935, con el consecuente destierro de Plutarco Elías Calles como Jefe Máximo de la Revolución.

La sucesión presidencial de 1934 se dio en un contexto conflictivo por un lado la reorganización sindical y el ascenso en la curva de movilizaciones que van de los años 1934 a 1936<sup>63</sup>, y que tenía como antecedente inmediato la crisis mundial de 1929 traduciéndose en la formación de los grandes sindicatos de industria nacionales como el de ferrocarrileros (1933), mineros (1934), petroleros (1936) concluyendo en 1936 con la Confederación de Trabajadores Mexicanos en el que confluían todos los anteriores además de las principales corrientes lombardistas y el sindicato electricista. Sería el sector obrero quién daría su apoyo a Cárdenas en la confrontación con Calles.

Por otro lado la situación del campo era de potencial violencia ya que en los años treinta el reparto agrario seguía siendo sólo una promesa, como ya lo mencionamos anteriormente, para los sonorenses, la figura del ejido era sólo una

---

<sup>61</sup> En 1930, más de las tres cuartas partes de la población laboral mexicana (5.1 millones) eran campesinos o trabajadores rurales, de los cuales aproximadamente el 70% seguía sin tierras.

<sup>62</sup> Vid. Roux Rhina, *El Príncipe mexicano. Subalternidad, Historia y Estado*, Era, México, 2005. pp. 176-179. Así como Medín Tzvi, *Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas*, Siglo XXI, México, decimotava edición, 2003, pp. 29-39.

<sup>63</sup> “Según los datos oficiales el número de huelgas se disparó en 1934 al registrarse 202 huelgas estalladas en comparación con las 13 huelgas de 1933, tendencia que se mantendría hasta 1937, en que la curva huelguística comenzaría a descender”, en Roux Rhina (2005), *Op. cit.*, pp. 179-180.

forma transitoria, el reparto que comenzó en los veinte no fue continuo debido a que obedecía a los intereses de éstos, que de cuando en cuando tenían que apoyarse en los campesinos armados, para resolver los conflictos derivados de la incompleta centralización del mando político.

Paralelo a las movilizaciones obreras por iniciativa del presidente Cárdenas, se pasó al intento de centralización de la organización campesina vista como una estrategia para conformar un frente popular que lo apoyará en la confrontación política con Calles, para 1938 estos esfuerzos dieron como resultado la creación de la Central Nacional Campesina (CNC).

Por su parte la grande y mediana empresa privada también fueron organizadas desde el gobierno:

“Se expidió en 1936 la Ley de Cámaras de Comercio e Industria, que dejó a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) como las organizaciones formales a través de las cuales el Estado recibiría las demandas de este sector y con cuya colaboración elaboraría aquellas políticas que afectaran directamente sus actividades”.<sup>64</sup>

El corporativismo durante el periodo de entreguerras 1918-1939, fue la fórmula de reconfiguración estatal, amenazada de fractura por la insubordinación de las clases subalternas, no era solo una forma de regulación laboral, o una forma de representación política, como un fenómeno que típicamente pertenece a la vida moderna se configura como una forma de Estado:

“un modo de integración en comunidad política, una forma de vinculación entre gobernantes y gobernados, una forma de legitimidad y un tipo de politicidad (...) cuya peculiaridad en contraste con la república, consiste en reconocer e incorporar los derechos particulares de las clases sociales, en la constitución política del Estado”.<sup>65</sup>

En marzo de 1938, se realizaría el congreso para crear el Partido de la Revolución Mexicana (que reemplazaría al PNR), la propuesta central implicaba la

---

<sup>64</sup> Meyer Lorenzo (1974), *Op.cit.*, p. 737.

<sup>65</sup> Roux Rhina (2005), *Op. cit.*, p. 170.

organización sectorial además del ala campesina en la CNC y la obrera de la CTM, del sector popular que en ese entonces estaba representado únicamente por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), con la novedad de la creación del sector militar. La forma de funcionamiento del partido en ese entonces era conocida como “democracia funcional”, un tanto opacada por la centralización de las decisiones en el Comité Central Ejecutivo (CCE). El requerimiento mínimo para la conservación de la alianza, implicó la repartición de cuotas de poder, es decir, establecer mecanismos para la distribución de candidaturas entre los sectores, reconociendo su peso específico en el nivel regional y nacional.

Con la transformación del partido Cárdenas logró dos objetivos políticos fundamentales:

“de un lado, redujo a la burocracia política a una disciplina más rígida al sujetarla al CCE y a su propio arbitraje; de otro, completó la obra, iniciada con la salida de Calles del país, de instaurar el presidencialismo al estilo mexicano, fundiendo el mando administrativo presidencial del Maximato con la primacía política arbitral del Jefe Máximo”<sup>66</sup>

Sin embargo cabe hacer una aclaración sobre la interpretación de este momento histórico. Sin restarle importancia a sus consecuencias políticas y al autoritarismo que se ejercería durante los siguientes gobiernos, la transformación del partido no fue solo una estrategia ideada por Cárdenas para controlar la acción social, si bien la sociedad ocupaba una posición subordinada en la alianza, también es cierto que fue el resultado de la correlación de fuerzas, que tenía su antecedente en movilizaciones, conflictos y negociaciones de los dominados y el reconocimiento de sí mismas como parte de la comunidad estatal que habían contribuido a construir:

“El pacto cardenista fue la verdadera fundación del régimen político mexicano, no solo porque creó las organizaciones que iban a ser fundamentales para el control y la movilización de las fuerzas populares, sino porque estas organizaciones surgieron sobre la base de un pacto real. (...) El pacto tenía un carácter popular en tanto que pretendía un desarrollo incluyente, en

---

<sup>66</sup> Medina Peña Luis, *Hacia el nuevo Estado. México, 1920- 2000*, FCE, México, tercera edición, 2010. p.157.



contraste con el modelo porfirista que excluía del proceso de modernización a la mayor parte de la población”.<sup>67</sup>

Estos cambios se traducirán en la estructura social como cifras favorables y cambios importantes. El periodo de 1936-1937 como lo describe Luis Gonzáles fue el de las “jornadas agraristas”<sup>68</sup>, el reparto de tierras fue la obra predilecta del gobierno para tratar de remediar las desigualdades, ya antes se habían repartido terrenos pero nunca tantos para que se conformarán ejidos. El reparto de esta época significó la distribución de casi 18 millones de hectáreas de tierra frente a los 8.7 millones de los quince años anteriores. De 7 049 ejidos existentes en 1935 se llega a 14 526 en 1940. Sin embargo el ejecutivo tomo en cuenta que los ejidos habían estado ejerciendo presión sobre terrenos colindantes, razón por la cual en esos años se tuvo también que activar el registro de las pequeñas propiedades inafectables<sup>69</sup>. Paralelamente al Banco Nacional de Crédito Ejidal funcionaba el Banco Nacional de Crédito Agrícola, lo que para Cárdenas era una muestra de que el gobierno no actuaba en favor de una sola clase.

El sexenio de Cárdenas representó para los trabajadores urbano-industriales el mejoramiento real de los salarios así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el número de sindicatos industriales casi se duplico de 639 en 1933 a 1094 en 1939. La tendencia a las huelgas, la reorganización, y el aumento en la tasa de sindicalización era un fenómeno que estaba ocurriendo en ambos lados de la frontera (en Estado Unidos fue emblemática la United Automobile Workers surgida del procesos de sindicalización de las industrias fordistas) y que acompañó en todo el mundo al proceso de reestructuración productiva del periodo de entreguerras.

El Estado incentivó la economía mediante un extensivo programa público de inversiones y la creación de organismos públicos de estímulo y orientación

---

<sup>67</sup> Bizberg Ilán, “La transformación del poder político en México”, en *Revista Mexicana de Sociología*, UNAM, México, núm. 3, vol. 61, julio- septiembre de 1999. pp. 144- 145.

<sup>68</sup> González Luis, *Los días del presidente Cárdenas*, en *Historia de la Revolución mexicana*, tomo 15, El Colegio de México, México, 1981, pp. 92-93.

<sup>69</sup> Medin Tzvi (1973), *Op.cit*, pp. 166-167.

económica entre los que sobresalieron la Nacional Financiera, la Corporación de Fomento, la Compañía de Inversiones y el papel destacado del Banco de México como financiador de la obra pública.

En ese entonces los ahorros estaban en manos de terratenientes ausentistas y comerciantes por lo que no estaban disponibles para la creación de infraestructura necesaria como comunicaciones, puertos, escuelas, hospitales, riego, etc, necesarios para el desarrollo económico, y en vista de que para el capital privado no eran atractivos estos rubros por su bajo rendimiento, el gobierno tuvo que hacerse cargo.

El resultado fue el incremento de la productividad agrícola, el aumento de consumidores y la liberación de la mano de obra; hasta finales de la administración se manifestaba una mejoría en la capacidad de consumo de la población, los salarios de los trabajadores fueron en cierta medida erosionados por el alza de precios, puesto que la demanda estaba por encima de la capacidad de producción o bien por restricciones a las importaciones debido a la inestabilidad internacional ante la inminencia de la guerra.<sup>70</sup>

La reinserción de México en la economía mundial, pasaba también por la disputa jurídica planteada en el artículo 27 de la Constitución en referencia a la propiedad del subsuelo, de la que dependía la propiedad del petróleo. Como es bien sabido en 1934 aproximadamente el 98% de la industria petrolera, estaba en manos de 16 compañías extranjeras (entre ellas la Mexican Petroleum Company, la Royal Dutch Shell y la Standard Oil). En 1923 los “acuerdos de Bucareli” firmados entre el gobierno sonorense y Estados Unidos no había resuelto el conflicto de principios, los títulos de propiedad absoluta se convirtieron en “concesiones confirmatorias”, dejando abierta la cuestión de si las compañías petroleras debían pagar impuestos o regalías. Teniendo como preludio la huelga general de los trabajadores petroleros entre mayo y junio de 1937, esta disputa terminaría con la expropiación petrolera en 1938.

---

<sup>70</sup> Loyola Díaz Rafael y Antonia Martínez, “Guerra, Moderación y Desarrollismo”, en Elisa Servín (Coor.) *Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994*, FCE, México, 2010. pp. 29-30.

La expropiación petrolera en palabras de Luis Gonzáles, fue vivida como “una reconquista del subsuelo”, quedó plasmada en el imaginario como una revancha contra Estados Unidos, e implicó por eso mismo la consagración del Estado al afirmarse como representante del interés general.

La reacción del gobierno británico para el cual la expropiación había sido un “robo descarado” y la implementación de un “socialismo de estado”, llevó a éste país a romper relaciones con México en mayo de 1938 y la prohibición a los empresarios británicos de comprar crudo mexicano, acompañado de un boicot económico. Sin embargo a pesar de la reacción de esta potencia la expropiación se había realizado dentro de un contexto regional favorable existente desde 1933 con la inauguración por parte del presidente norteamericano Roosevelt de la política del Buen Vecino, que teniendo como perspectiva el potencial estallido de la Segunda Guerra Mundial, implementó esta política exterior que con América Latina implicaba la renuncia a la intervención armada directa a cambio de la neutralidad del hemisferio, en el caso de que la guerra estallara. Este contexto favorable sería heredado al siguiente gobierno quien concretaría nuevos acuerdos respecto al pago de indemnizaciones.

Para cerrar el círculo, llegaría el momento de la sucesión presidencial en 1940, en el que se haría efectiva la facultad primordial metaconstitucional del presidencialismo mexicano<sup>71</sup>, la transferencia de “la aureola sagrada”, es decir, el ritual heredado del régimen posrevolucionario en el que la supremacía del mando estatal no recaería en la persona física del presidente sino en la institución y la inmortalidad del cuerpo político que el presidente encarnaría durante su mandato.

---

<sup>71</sup> Los poderes metaconstitucionales del presidente remitían no solo a la capacidad de asignar a su sucesor, incluirían además la capacidad de influir considerablemente en la designación de los candidatos a gobernadores, imponer pactos y concertaciones a los distintos sectores, impulsar los programas de desarrollo económico y de reestructuración; todo esto ante un legislativo. Éste mecanismo de reproducción del poder estatal contaba con todas las características aparentes del gobierno republicano como la celebración periódica de elecciones, la división de poderes, la Cámara de diputados etc; aunque en la realidad el presidencialismo y la centralización parecían más una monarquía. En los estados se reproducía el presidencialismo en la figura de los gobernantes con mandatos específicos de control y la presencia de las instituciones federales y de las organizaciones corporativas del partido en las negociaciones en los distintos estados del país.

Es así como en el sexenio Cardenista, pero, más emblemáticamente entre los años 1935- 1938 se vislumbraría el momento hegemónico por excelencia, ese en el que el Estado tenía la capacidad para asumirse, como la concreción de todos los mitos, en la que se presenta como la síntesis histórica y el marco común tanto legal-formal, como informal en el terreno del *orden moral*; a partir del cual se reproduciría la comunidad estatal.

Es en el período Cardenista que se concretan los enclaves metaconstitucionales: presidencialismo, partido del aparato estatal y corporativismo, teniendo como base la incorporación en la comunidad estatal de las politicidades agrarias y obreras, con el consecuente reconocimiento de derechos subalternos, las reglas de circulación del mando entre las élites, la parafernalia republicana, y la legitimidad que recordaba aquel viejo pacto monarcómico, heredado de la conquista que implicaba la lealtad al “rey” a cambio del reconocimiento de los derechos. Este entramado material y simbólico lograría reproducirse de forma estable aún pasada la época de reformas sociales y a pesar de signos de rebeldía y tendencias democratizadoras que comenzaría a transformarse en los años ochenta con el comienzo de la reestructuración del Estado.

Al concluir el sexenio cardenista se daría una especie de repliegue, que culminaría con la sucesión del mandato a un “conservador”, Manuel Ávila Camacho con un sexenio que arrojaría como conclusión la revolución congelada. La moderación al final del Cardenismo se explica por el contexto complicado tanto al interior como al exterior: En el contexto internacional se estaba dando la liquidación de la disidencia soviética y el exilio forzado de los intelectuales europeos. En 1939 la República española estaba derrotada y ascendió Franco, al mismo tiempo la guerra se anunciaba con el pacto entre Hitler y Stalin.

Fueron años de reorganización del pensamiento conservador y al interior del país de la reacción anticardenista<sup>72</sup>; el PRM se había comprometido inicialmente con

---

<sup>72</sup> La reforma agraria había provocado el descontento de los propietarios agrarios tradicionales, quienes manifestaron su descontento con expresiones violentas en el medio rural, a los que se sumarían empresarios y sectores medios que vieron disminuidos sus ingresos por la inflación. Aunado a esto estaba el descontento por los preceptos socializantes del artículo 3° constitucional,

las causas proletarias dejando el campo libre para la reorganización de la derecha en esas épocas actuaba ya la Unión Nacional Sinarquista, la Confederación de la Clase Media y la Confederación Patronal de la República Mexicana. A los pocos meses de constituirse el PRM, se iniciaron los trabajos que culminaron con la creación del Partido de Acción Nacional (PAN) en 1939. Fue también la época de la revuelta del general Cedillo apoyado por las compañías petroleras extranjeras; en este contexto puede pensarse que la decisión de un sucesor conservador como Ávila Camacho en lugar de un radical como Múgica obedecía a la necesidad de conservar lo ya ganado.

### **2.1.2 Estado social y corporativismo en el Cardenismo**

El Cardenismo construye así el llamado Estado social, traducido en una de sus formas posibles que es el corporativismo (recordemos que el Estado social en Estados Unidos no se fundamentó en relaciones corporativas). Es importante profundizar en la discusión acerca de este término puesto que es un eje articulador en la interpretación del Estado mexicano, y que tendrá una trayectoria y concreción histórica cambiante.

Este término tiene hasta la actualidad una carga peyorativa ya que en un principio se asociaba a los gremios medievales y posteriormente a las corporaciones fascistas<sup>73</sup>. Será Schmitter el primero en abstraer los rasgos de las relaciones corporativas tanto en países desarrollados como subdesarrollados en los años treinta y cuarenta, haciendo una distinción entre lo que se entendería como corporativismo societal y estatal.

Ambos son una forma de representación de intereses de los componentes de cada corporación en oposición a la representación ciudadana de intereses abstractos, se convierte en una forma gubernamental de toma de decisiones extraparlamentaria que da una nueva legitimidad al Estado. El modelo de

---

así como el descontento de los políticos que habían sido desplazados del poder. *Vid.* Loyola Díaz Rafael, *Op.cit.*, p. 31.

<sup>73</sup> *Vid.* Ocampo Alcantár Rigoberto, *El sistema político mexicano: el agotamiento de un modelo corporativo*, Universidad Autónoma de Sinaloa- Publicaciones Cruz O, México, 17-26.

Schmitter<sup>74</sup> finalmente se identifica con las corrientes del pluralismo puesto que el criterio de diferenciación establece el corporativismo societal como la forma más deseable al reproducirse en el contexto de sistemas políticos partidistas, competitivos, con alternancia en el poder y niveles importantes de cultura democrática; mientras que el corporativismo estatal estará vinculado a sistemas autoritarios.

La discusión teórica de fondo está comprometida con la neutralidad o ausencia por parte del Estado, de si esta forma de organización persigue únicamente la gobernabilidad o si se configura como una forma de dominación comprometida con el desarrollo del capitalismo<sup>75</sup>.

En la interpretación del caso mexicano podemos observar esta disputa teórica en las diversas formas de interpretación. Uno de los primeros en acuñar el término corporativismo fue Arnaldo Córdova<sup>76</sup> quién reduce el concepto a su utilización política al identificar el corporativismo únicamente con la forma de organización del partido de Estado (PRI) por sectores, es decir, como una forma de legitimidad política desligada de lo productivo; de igual manera para Manuel Camacho<sup>77</sup> el corporativismo en México sería una creación estatal para fragmentar a las clases y controlarlas, es decir que es una forma de desviación del corporativismo societal.

Desde la interpretación del marxismo se tiende a identificar la organización corporativa del Estado como una modalidad bonapartista entre los años 1920 y 1940; Rodríguez Araujo<sup>78</sup> describe como en estos años de crisis, producto de la Revolución de 1910, ninguna clase social estaba en posición de asumir o influir directamente en el poder y al mismo tiempo la clase militar tampoco se identificaba con una clase, pero sí con el modelo de propiedad privada, propiciando que el

---

<sup>74</sup> Schmitter Phillip, “¿Continuamos en el siglo del corporativismo?”, en *El Buscón: Revista de Teoría y Política*, México, 1986, núm. 14 y 15.

<sup>75</sup> De la Garza Toledo Enrique, “El Corporativismo: teoría y transformación”, en *Iztapalapa* 34, julio-diciembre 1994. p. 13 y 14.

<sup>76</sup> Vid. Córdova Arnaldo, *La formación del poder político en México*, Era, México, 1976.

<sup>77</sup> Vid. Camacho Manuel, *La clase obrera en la historia de México. El futuro inmediato*, Siglo XXI, 1981, segunda edición.

<sup>78</sup> Vid. Rodríguez Araujo Octavio, *La reforma política y los partidos en México*, Siglo XXI, México, 1990, onceava edición, pp. 20-23.

Estado se volviera el eje articulador que gobernará por encima de las clases pero manteniendo el tipo de reproducción capitalista, es decir el estado no es neutral; según el mismo autor en los años posteriores a la segunda guerra mundial y específicamente entre el periodo 1959-1970, se hará evidente que la burguesía ya reconstruida comienza a tener mayor fuerza para incidir en decisiones de política pública.

Las diferentes posturas reseñadas aquí brevemente, efectivamente aportan elementos importantes para el análisis del caso mexicano, sin embargo estas quedan vacías, si se le da peso únicamente a cada uno de los ejes por separado, es necesario ver cómo se desarrolla el corporativismo como un proceso conflictivo, que precisamente es lo que definirá su variación histórica.

Efectivamente la forma de estado corporativista que surge en el cardenismo no será la misma que se reproducirá en los años posteriores. La peculiaridad en la consumación del pacto que se da en el cardenismo radica en que como “ideal” al menos discursivamente estará presente como marco de referencia de los conflictos.

El pacto no estaba fundamentado únicamente en la justificación liberal del Estado, como la protección de la vida (Hobbes) o la propiedad privada (Locke), aunque se suponía puesto que fue la culminación del proceso emprendido por los liberales del siglo XIX, que fundamentaron la soberanía al interior y al exterior, construyeron una esfera pública secularizada y delimitaron el territorio nacional. Sin embargo lo emblemático del nuevo pacto, era el reconocimiento de los derechos subalternos en el espacio público, es decir, la ley y el ejercicio del poder se ejercía no sobre entes abstractos figurados como ciudadanos, sino con el reconocimiento de sujetos colectivos históricamente configurados con intereses distintitos, que tenían fuerza propia. Lo que se configura siguiendo a Rhina Roux es una *forma de Estado* corporativa, una forma de vinculación entre gobernados y gobernantes que es en sí mismo una forma de dominación que enmarcará los conflictos y que no es solo una forma de representación de intereses.

Como lo menciona Enrique de la Garza el corporativismo no fue creado por el Estado. Durante el Cardenismo ya existían organizaciones como la Casa del Obrero Mundial, los sindicatos de electricistas y ferrocarrileros etc, en realidad lo que sucedió es que estaban experimentando una reorganización después del golpe que representó la crisis del 29, y el posterior conflicto entre Calles y Cárdenas, en su momento estas organizaciones con fuerza propia pensaron que les traería mayores beneficios aliarse con el Estado a través de la estructura partidista del PRM. Evidentemente el corporativismo experimentado en México implicó mucho mayor subordinación de los sindicatos y organizaciones ante el Estado y mucho menor democratización al interior de las mismas en comparación con países desarrollados, lo que este pacto permitió fue la instauración de un conjunto de regularidades no formales. Implicó una forma de dominación y de legitimación (política), pero influía también en cuotas de seguridad social aunque distribuidas escalonadamente, fue también base de un modelo económico del Estado interventor (no solo político), el corporativismo en ocasiones también influyó en puestos de la administración pública e incluso interviniendo en el diseño de políticas públicas. Todo esto entreteje un conjunto de instituciones y leyes no escritas que son precisamente las que darán su funcionalidad y capacidad de reproducción al Estado.

Como veremos más adelante, efectivamente el reconocimiento de los derechos o la capacidad de participación de los sectores subalternos tendería a suprimirse enmarcado en el contexto del autoritarismo, y del nuevo patrón de acumulación de la posguerra, sin embargo la figura del “pacto original” permitirá que el Estado siga reproduciéndose aún cancelado el ciclo de las reformas sociales y ante inminentes muestras de rebeldía de la sociedad civil

## **2.2. El Proceso de descomposición del pacto original**

A partir de los años cuarenta el estado mexicano contradictorio tendería a dar mayor énfasis al desarrollo capitalista en detrimento de su carácter popular:

A partir de Ávila Camacho el populismo y el nacionalismo mexicano cambiaron su contenido real; se dio una ruptura significativa en el modelo político a pesar de la



continuidad que se mantuvo en ciertos elementos institucionales. A nivel de proyecto social, se pasó de un modelo de desarrollo de capitalismo "autónomo" e integrador, (...) a un modelo de desarrollo asociado y excluyente en el que el nacionalismo y el populismo pasaron a servir exclusivamente como elementos de control desmovilizadores de las masas, independientemente de la mejoría en los niveles de vida de algunos sectores claves de las clases populares.<sup>79</sup>

La modernización económica del país, es decir, el proceso de industrialización vía sustitución de importaciones (ISI)<sup>80</sup> llegó tarde a México en comparación con los países de América Latina en donde la Primera Guerra Mundial había promovido este tipo de desarrollo. Después de la gran depresión 1929-1933, es cuando México entraría en una etapa de crecimiento acelerado y empezaría a romper con el modelo de exportaciones primarias. La etapa de crecimiento sostenido iría de los años 1936 a 1976 y de acuerdo a éste modelo en relación a los procesos inflacionarios y las políticas de estabilización podemos distinguir: la primera etapa que va de 1938 a 1954 caracterizada por crecimiento con inflación y devaluaciones; la segunda que comprende el periodo de 1956-1970, llamado "desarrollo estabilizador", y el periodo de 1970-1976 llamado "desarrollo compartido". El énfasis en el desarrollo económico implicaría por un lado la prolongación institucional del pacto estatal mexicano, en su forma "paternalista" (expresada en el gasto social continuo), pero en detrimento del pacto original cardenista ya que poco a poco iría ganando peso el corporativismo autoritario y la desmovilización de las masas.

Ávila Camacho llegaría a la presidencia en 1940 en medio de unas controvertidas elecciones en las que Juan Andrew Almazán le disputaba la presidencia al PRM, lo que polarizó al país en dos extremos, que puso en evidencia la existencia de un sector de la sociedad que no se identificaba con el partido oficial y a la cual

---

<sup>79</sup> Labastida M. del Campo Julio, "Algunas hipótesis sobre el modelo político mexicano y sus perspectivas", en *Revista Mexicana de Sociología*, UNAM, Vol. 36, núm. 3, julio- septiembre 1974, p. 638.

<sup>80</sup> "Hay una secuencia lógica en el crecimiento de una economía capitalista dependiente: 1) Exportador de materias primas (EMP); 2) industrialización sustitutiva de importaciones, fase 1 (ISI-1); 3) industrialización sustitutiva de importaciones fase 2 (ISI-2), y 4) contradicciones internas." en Basáñez Miguel, *Op.cit.*, p. 35.

podemos identificar genéricamente como “derecha mexicana” con sus dos formas de expresión: la “moderada” (clase media urbana e ilustrada, vasconcelista, pro democrática y anti cardenista, que habían fundado al PAN), y la “radical”(clase media rural tradicional y católica que tuvo su mayor expresión en la UNS)<sup>81</sup>.

Al interior del PRM también existían fracturas entre el ala radical “cardenista” y los “moderados” que darían su apoyo a Ávila Camacho en su proyecto de unidad nacional. De acuerdo a este contexto es que el partido decidiría crear por un lado la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en 1943, y por otro desaparecer el sector militar del partido. La primera decisión obedecía a la necesidad de disputar a la oposición el monopolio de la representación de la clase media y la segunda influida por el temor a que las fuerzas armadas se politizaran de nuevo. La creación de la CNOP fue una decisión acertada, ya que el PAN sólo podía representar a la clase media tradicional heredada del porfiriato, sin embargo existía una “nueva clase media” surgida del desarrollo económico posrevolucionario, que difícilmente podía sentirse cómoda en un partido conservador<sup>82</sup>.

En los años cuarenta comenzará el despegue de la industrialización, el panamericanismo estadounidense y su política de asistencia económica para América latina, sería aprovechado por el gobierno que llegó en 1941 a un convenio respecto a las indemnizaciones por las expropiaciones agrarias y la petrolera, llegando además a un acuerdo comercial, que garantizó el acceso de hidrocarburos mexicanos al mercado estadounidense, el intercambio comercial con este país fue tan intenso que al final del sexenio camachista represento tres cuartas partes de la comercialización en total hacia el exterior.

De acuerdo con las tendencias mundiales de regulación estatal, en México esa intervención en el desarrollo económico se dio a través de diversos mecanismos

---

<sup>81</sup> Vid. Medina Peña Luis, *Op.cit.*, pp. 158-160.

<sup>82</sup> “La CNOP se pronunciaba en favor de los derechos de la mujer, la preparación de la juventud, en favor de la vivienda para las clases populares urbanas, la limitación del capital extranjero, así como en contra de toda hegemonía imperialista o racista.” Documentos fundacionales de la CNOP, citado por, *Ibídem*, p. 160.

como: la creación de la Ley de Industrias de Transformación (1941), la Ley de Fomento de Industrias de Transformación (1946), creación de infraestructura de servicios, comunicaciones y transportes, una política estatal de créditos y transferencias de recursos financieros, exenciones fiscales a empresas privadas, promoción de una agricultura orientada a la exportación, conversión de la producción agraria en una palanca subsidiaria de la industrialización, y la creación de nuevas empresas en sectores estratégicos como: Ferrocarriles Nacionales, Comisión Federal de Electricidad, Altos Hornos de México e Industria Petroquímica Nacional.

Sin embargo, este despegue de la industrialización estaba basado en la disminución de los salarios reales de la clase obrera. El creciente y elevado proceso inflacionario, provoca el aumento de precios, a pesar de que los salarios nominales aumentaron entre el 50 y 90% no lograron compensar el alza en el costo de la vida. Tomando como base el índice de 100- 1939, el salario real se deterioró en 1944 al descender al 83.6 y en 1945 al 72.2, paralelamente siguiendo el mismo índice el costo de la vida había aumentado un 223% <sup>83</sup>.

Esta forma de crecimiento con inflación tuvo como soporte la desmovilización de los sindicatos en el contexto del discurso de “la unidad nacional, la reconciliación de las clases y el arbitraje estatal”, en los años cuarenta la CTM comandada ya por Fidel Velázquez enfrente un proceso de burocratización como pieza clave del engranaje corporativo autoritario, que como parte de esta doctrina estatal de manera emblemática en 1942, renunciaría temporalmente al derecho de huelga. Sin embargo en 1944 ante la carestía de la vida se disparó el número de huelgas<sup>84</sup> e incluso saqueos en la ciudad; la respuesta a esa insubordinación sería el Pacto Obrero-Industrial firmado por la CTM y la cúpula empresarial CANACINTRA en 1945, como una continuación de la política de unidad nacional.

---

<sup>83</sup> Vid. Loyola Rafael, *Op.cit.*, pp. 46-48.

<sup>84</sup> En 1943 se había promulgado la Ley del Seguro Social, para 1944 ya funcionaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de acuerdo al contexto de encarecimiento en el costo de la vida, es paradigmática la reacción de los obreros, que se resistieron ante la propuesta del gobierno de implementar un sistema tripartito de financiamiento de éste organismo, ya que veían en las cuotas a pagar una reducción mayor a su salario.

El fin de la segunda posguerra trajo consigo la nueva hegemonía estadounidense, se establecieron los mecanismos mundiales de regulación financiera cristalizados en los acuerdos de Bretton Woods así como la reconfiguración política mundial con las negociaciones de Yalta. Todo esto traería una onda larga de expansión y crecimiento capitalista (1945- 1974) y en el caso de México la modernización del capitalismo, que tendría como correlato una “modernización política”.

La llegada de Miguel Alemán a la presidencia representó el inicio del “civilismo” el gobierno de los “licenciados” que clausuraba la época de los generales. En ese mismo año el PRM se convertiría en Partido de la Revolución Institucional (PRI), el viraje ideológico giraba en torno a la concepción de la Revolución, que para el nuevo partido había dejado de ser un proceso actuante y que representaba algo ya logrado, institucionalizado e interiorizado en el imaginario a partir de las figuras como: el ejido, la sindicalización, la contratación colectiva, el derecho a huelga, el seguro social, la propiedad de la nación sobre el subsuelo, etc. Este viraje ideológico también respondía a la necesidad de cerrar el paso a un renacimiento de corrientes cardenistas, purgar al partido de comunistas, ampliar la alianza, declarar por terminada la lucha de clases y marcar el camino hacia el perfeccionamiento.

La consigna del gobierno alemanista fue “primero el crecimiento, después la distribución de la riqueza”, el eje era la industrialización y potenciar prioritariamente a las empresas encargadas de la transformación de materias primas, la sustitución de importaciones daba prioridad a la adquisición de maquinaria refacciones y herramientas; el campo debía de incrementar su producción para abastecer el mercado interno y suministrar las materias primas necesarias para la industria así como para la exportación; sin renunciar al papel rector del Estado<sup>85</sup> en la economía, se le dio impulso a la iniciativa privada, sobre todo en el campo, ya que se creía que la pequeña propiedad privada era la única capaz de realizar la tarea asignada al campo, por lo que era necesario promover

---

<sup>85</sup> En 1951 se expidió la Ley sobre Atribuciones al Ejecutivo Federal en Materia Económica, que ampliaría las facultades del Estado, para controlar los precios e intervenir en la distribución de bienes y contrarrestar la inflación.

los créditos privados asegurar la inafectabilidad y en general la disponibilidad de utilidades. El desarrollo se dio así en el contexto de un “liberalismo limitado”<sup>86</sup> que con sus características se ajustaba al modelo keynesiano de reordenamiento de la economía mundial.

Aunque en el discurso se sostenía la promesa de continuar con el reparto agrario, lo que se dio fue la inversión radical de la tendencia cardenista. La idea del progreso estaba presente desde el siglo XIX, sin embargo a partir de la segunda posguerra a las ideas de urbanización, cosmopolitismo, integración nacional y cultural, se agregarían el modelo de la capacidad de consumo y la asimilación en México del *american way of life*, en la que los campesinos representaban el atraso.

La consigna alemanista de desarrollo y progreso incluía en su discurso la democracia; la reforma electoral de 1946 introdujo la figura del “registro”, es decir, la existencia legal de los partidos estaría condicionada por el reconocimiento estatal de los mismos. A partir de esta reforma el régimen mexicano, sin sacrificar el monopolio del mando estatal, funcionaría de manera estable permitiendo la existencia de partidos, y proyectando una imagen falsa de pluralidad.

El México agrario de los años veinte y treinta poco a poco sería remplazado por una sociedad industrializada. Una de las características sobresalientes a partir de los años cuarenta fue el crecimiento de las clases medias, con amplias perspectivas de movilidad social, y su ascenso en la escala social como símbolo de la modernidad. En resumen este modelo de desarrollo que se profundizaría en los años cincuenta y sesenta se caracterizó porque:

privilegio los intereses del capital frente al trabajo; la industria respecto a la agricultura; las ciudades ante el campo; el mercado de bienes duraderos contra los de consumo inmediato y

---

<sup>86</sup> Tzvi Medin, *El sexenio alemanista: ideología y praxis política de Miguel Alemán*, Era, México, 1990, pp. 31-33.

popular. La política de promoción de un vigoroso empresariado nacional creó oportunidades para los técnicos y profesionistas que demandaban el desarrollo industrial.<sup>87</sup>

Este modelo de desarrollo comenzaría a recibir críticas desde los años cincuenta, causaría mucha polémica un ensayo del autor Frank Tannenbaum, en la versión traducida en 1951 *Problemas agrícolas e industriales de México*; en este texto se exponía las contradicciones del modelo y se evidenciaban los altos costos sociales que implicaba la modernización impulsada “desde arriba”, además condenado al fracaso en la medida en la que el proceso de acumulación del capital terminaría por absorber los recursos económicos del país sin posibilidad de redistribuirlos a la sociedad.

La modernización, como afirma Huntington en su libro *El orden político en las sociedades en cambio*, suele ser el factor que más logra desestabilizar a los Estados y su funcionamiento, puesto que dicho en términos habermasianos, los procesos de reestructuración económica y modernización política, tienden a destruir los *mundos de la vida*, lo que explica las resistencias no a la modernización en sí misma, sino a la manera violenta en la que esta irrumpe, transformando no solo las condiciones materiales, sino también los órdenes simbólicos, los imaginarios.

Es por eso que en el caso mexicano se encontrarían diversas resistencias<sup>88</sup>: las batallas obreras de la segunda mitad de los cuarenta, la Caravana de los mineros de Nueva Rosita en 1951, el movimiento henriquista (defensor del agrarismo cardenista) con su participación opositora electoral en 1952 o las movilizaciones de maestros, telegrafistas, ferrocarrileros, campesinos y estudiantes en el periodo entre 1952- 1964.

La respuesta del Estado mexicano fue contundente y mostro la eficiencia de su engranaje corporativo, así como la impunidad para ejercer violencia: Aparecería el

---

<sup>87</sup> Loeza Soledad, “La sociedad mexicana en el siglo XX” en Joaquín Blanco José y José Woldenberg (Comp.), *México a finales de siglo*, FCE, México, Tomo I. 1993, p. 123.

<sup>88</sup> Vid. Servín Elisa “Los “Enemigos del progreso”: crítica y resistencia al desarrollismo del medio siglo”, en Servín Elisa, *Op.cit.*, pp. 79-127.

“charrismo sindical” inaugurado en 1948, cuando se impuso a Jesús Díaz de León en el sindicato ferrocarrilero; ante el deterioro del campo, las reformas al artículo 27, la CNC en todo momento actuó de manera pasiva y complaciente, lo que haría que recibirían como premio a su lealtad el reparto de tierras a sus bases después de la expropiación de Cananea en 1958, dejando a los campesinos que si se habían movilizado, sin nada; los muertos sinarquistas en Guanajuato en 1946, la represión no sólo del henriquismo sino de todos los movimientos sociales, el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962. Todo esto justificado en el contexto de la Guerra Fría, por la amenaza desestabilizadora del comunismo<sup>89</sup>. Todos estos fenómenos que parecen como una respuesta a los agravios provocados por una forma de desarrollo que parecía no respetar muchos de los acuerdos del pacto original que consistía no sólo en el reconocimiento de los derechos subalternos sino en la capacidad real de incidir en las decisiones respecto del interés publico.

El crecimiento y la expansión capitalista de la segunda posguerra (1945- 1974) con su correspondiente forma política el llamado “Estado de bienestar” tuvo su traducción nacional en el llamado “milagro mexicano”<sup>90</sup>: el crecimiento sostenido de la producción nacional en un promedio anual de 6.4% y el ascenso sostenido de la curva salarial a partir de 1952, con su máximo histórico en 1976 (40.3% del PIB). Paralelo a estos indicadores entre 1946-1970, el “gasto social” experimento un incremento sostenido de 7.9%; se creó un nuevo sistema público de seguridad social, en 1943 se creó el IMSS, en 1959 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE); en 1972 el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Es así que se daría un proceso de transfiguración del Estado que como ideología conservaba la idea del pacto original, pero que en la realidad se reproducía como un Estado más corporativo-clientelar y autoritario que popular.

---

<sup>89</sup> Una de las expresiones de anticomunismo más exagerada se dio en 1959, en el contexto de una segunda oleada de movilizaciones de ferrocarrileros por aumento salarial, que fue reprimida y en la que se llegó al extremo de expulsar del país al agregado militar y al segundo secretario de la embajada de la Unión Soviética, a quienes se acusó de estar implicados en la conjura vallejeista. *Ibidem*, p. 111.

<sup>90</sup> Roux Rhina (2005), *Op.cit.*, p. 216.

Al llegar Adolfo López Mateos a la presidencia en 1958, se encontró con un contexto económico negativo, con dos años seguidos con una balanza de pagos desfavorable que amenazaba el valor externo de la moneda; por otro lado se había reducido la actividad productiva por la disminución de la inversión pública, producto del control de gasto para evitar presiones inflacionarias, y la inversión privada se había retraído en espera de una mejoría. Las autoridades hacendarias optarían por fomentar el ahorro interno y externo, mezclándolo con la nueva estrategia de crédito externo. En este sexenio se dio un crecimiento espectacular de paraestatales, así como el aumento en la capacidad de endeudamiento, se le dio énfasis al sector turístico, la primera parte de este sexenio se caracterizó por la nacionalización de empresas, como la eléctrica y la cinematográfica. Díaz Ordaz continuaría con esta política solo que con un mayor apoyo a favor del empresariado nacional.

Hacia finales de los sesenta, la economía mundial se acercaba a una crisis cíclica que restringiría la disponibilidad de recursos externos; y por otro lado la balanza de pagos nacional se vería nuevamente sujeta a presiones, no solo porque se había agotado la etapa difícil de la sustitución de importaciones sino por que aumentaron las importaciones de bienes de producción necesarios para la industrialización. Ambos factores representaban serias amenazas al desarrollo estabilizador. De manera paralela la crisis en el campo<sup>91</sup>, empezó a provocar problemas de abastecimiento del mercado interno, lo que dio lugar a la importación de alimentos, reduciendo las divisas y presionando la balanza de pagos, la crisis en el campo provoco la migración masiva a las ciudades, por lo que el proceso de urbanización se convirtió en un fenómeno incontrolado.

---

<sup>91</sup> Fueron varios los factores que contribuyeron a está: "a) una disminución de la inversión federal destinada al campo, la cual bajo de 19.2% en 1950 a 6.9% en 1960. b) la reorientación de la producción agrícola a productos con precios de garantía, menos rentables pero más estables, (...) la contracción de la inversión en el campo por el deterioro de los precios agrícolas respecto de los manufactureros, así como la transferencia de recursos al sector industrial vía el sistema financiero (solo 60% del ahorro bancario del sector rural regresaba al campo en forma de crédito, mientras que el 40% restante iba a dar a la industria), en Medina Peña, *Op. cit.*, p. 147-149.



Es por eso que en los sesenta al igual que en los cincuenta había surgido voces precautorias<sup>92</sup>, que cuestionaban el modelo económico más que de desarrollo, puesto que se concluía que lo que había existido era crecimiento, más no desarrollo, es decir, no se había logrado una mejor distribución del ingreso, había una alta propensión al consumo y baja propensión al ahorro, todas estas tesis propuestas por Pablo Gonzáles Casanova en su libro *La democracia en México* y que serían confirmadas en los setenta por estudios macroeconómicos como el de David Ibarra.

Entre las conclusiones desfavorables de este modelo se encontraba también la tendencia en las distorsiones del mercado de trabajo, que exigían una política ocupacional dirigida por el Estado, se evidenció también el advenimiento de un cuello de botella determinado por el endeudamiento y el estancamiento de los ingresos fiscales, que cada vez tendría menos recursos para la inversión pública y servicios sociales. Francisco Javier Alejo encontró que había una distribución inequitativa de la carga fiscal por sectores económicos; igualmente el panorama demográfico era poco alentador ya que el gasto social del Estado se toparía cada vez más con tasas siempre en aumento de crecimiento demográfico.

El periodo que va de los años 1968 a 1983, será conocido como el de la crisis, caracterizado por la búsqueda de soluciones y adecuaciones para enfrentarla, pero sin modificar la naturaleza del Estado y la base que le daba sustento en las distintas alianzas.

Las voces precautorias surgidas desde los cincuenta y continuada en los sesenta, tendrían su consolidación en el surgimiento de una “nueva izquierda universitaria”, después de las predicciones y el diagnóstico desfavorable del modelo de crecimiento sin desarrollo y la represión y violencia desde mediados de los cuarenta hasta los sesenta, habían evidenciado un México autoritario y profundamente desigual. Desde 1965, el gobierno de Díaz Ordaz, resultó atrapado en la lógica del desarrollo estabilizador, que exigió mantener intacta la legislación

---

<sup>92</sup> *Ibidem*, pp. 172-180.

fiscal en favor del sector privado, que lo llevaría a aplicar una política de gasto público reducida especialmente en cuanto a la salud pública y la educación.

El movimiento estudiantil de 1968, derivó su importancia no tanto por ser un desafío serio al sistema en términos económicos, políticos o ideológicos, sino porque evidencio la naturaleza contradictoria del Estado mexicano<sup>93</sup>. El “nacionalismo populista” se convirtió en un “nacionalismo desarrollista” propiamente en un Estado de clases sociales, con el ascenso de las capas medias, que -en un contexto de deterioro de las relaciones entre el Estado y las universidades, con la percepción de un sistema que se había cerrado impidiendo la movilización social y favoreciendo a las clases altas,- no encontraron en el entramado institucional la posibilidad de expresar sus crecientes inquietudes. Fueron entonces los sectores ascendentes, y no las clases más explotadas o los grupos reprimidos quienes exigían la democratización política del país<sup>94</sup>. Fue una alerta también para una serie de cambios entre los arreglos y el funcionamiento del sector público y el privado. El primero había perdido la fe en la empresa privada en su papel en el mejoramiento del país, mientras que al mismo tiempo el sector privado había perdido su dependencia del gobierno para poder sobrevivir en intentaría provocar una nueva definición de fuerzas.

En 1970 Echeverría asumiría la presidencia con el principal propósito de reconciliarse con la clase media, el gobierno se presentaba a sí mismo como autocrítico y democrático. Para reconciliarse con las universidades se optó por incorporar a la “disidencia”, maestros y catedráticos que ingresaron en dependencias gubernamentales, además de un aumento considerable en los subsidios a las universidades.

El discurso político de éste sexenio reavivó los grandes temas nacionales como el indigenismo, el obrerismo, la reforma agraria, y la economía mixta, el antiimperialismo lo que provocó el ascenso de movilizaciones independientes así

---

<sup>93</sup> Basáñez Miguel, *Op.cit.*, p. 37- 39.

<sup>94</sup> Zermeño Sergio, *La sociedad derrotada. El desorden mexicano de fin de siglo*, Siglo XXI, México, 1996.

como la resistencia y fortalecimiento de los movimientos obreros campesinos, indígenas y de las élites económicas. La cultura política de las élites echeverristas tenían reminiscencias cardenistas de populismo revolucionario, inclusive más allá del ímpetu demagógico existía una derrama real de recursos hacia las organizaciones populares corporativas y hacia distintas instituciones gubernamentales y fideicomisos que debían modernizar el campo como Banrural, la Secretaría de la Reforma Agraria, Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) etc.

Los funcionarios y la familia presidencial exhibieron el folclor de la república, se realizó el rescate de diversas zonas arqueológicas y el Instituto Nacional Indigenista conoció su época de oro. Como en la época cardenista el populismo no sólo provocó el fortalecimiento de los movimientos obrero, campesinos e indígenas, sino también la resistencia organizada de las élites económicas regionales, encabezadas por sus organizaciones empresariales (en el conflicto con el grupo empresarial de Monterrey) y, en el campo por las asociaciones autónomas de pequeños propietarios agrícolas de las uniones ganaderas. Para decirlo con Paris Pombo<sup>95</sup>, la demagogia socialista de Echeverría pareció prender la mecha de la lucha de clases; ante el ascenso de los movimientos sociales independientes Echeverría recurrió a la coacción y a la cooptación de líderes a través del ofrecimiento de créditos. Ante la guerrilla urbana y rural, respondería con la represión.

Los hombres de negocios estaban preocupados por los temas fiscales, laborales, el intervencionismo estatal, así como la apertura democrática. Uno de los momentos más álgidos del enfrentamiento entre el Estado y el sector privado fue la *integración de la alianza popular*, de la que estaban excluidos los empresarios, después del asesinato de Eugenio Garza Zada en septiembre de 1973 (inclusive la ultraderecha de Monterrey y Guadalajara amenazó con armarse para

---

<sup>95</sup> París Pombo María Dolores, "La agonía del nacionalismo revolucionario y el despertar del regionalismo entre las élites políticas mexicanas", en Labastida Martín del Campo Juan, Antonio Camou y Noemí Luján Ponce (Coor.), *Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina*, IIS, FLACSO y Plaza y Valdes, México, 2000.p. 117.

defenderse de la guerrilla), el mismo día que se firmaría un acuerdo general de salarios y que posteriormente fue olvidado.

Sin embargo la burguesía no tenía en realidad muchas razones serias de que preocuparse, ante la investida de los empresarios el Estado tuvo que replegarse y dar continuidad a políticas económicas:

retiró el apoyo a algunos sectores universitarios progresistas, ha rectificado la política obrera acercándose a la vieja burocracia sindical; (...) ha disciplinado a los líderes agrarios oficiales más radicalizados y reprimido a los independientes y ha presionado a los campesinos mediante negociación o amenazas . En el terreno económico el gobierno siguió la línea de aplicar reformas, siempre que no afectaran a la burguesía, o negociándolas de tal manera que perdieran eficacia.<sup>96</sup>

Aun así el sector empresarial seguiría intentando disputarle la hegemonía al Estado, el año de 1975 ante la víspera de la elección del candidato presidencial para 1976, surgiría el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que respondió a la necesidad del gran capital asociado de centralizar el control político de los empresarios, así como poder influir en la designación del candidato.

El sexenio echeverrista arrojó una devaluación, inflación, y una imagen de desprestigio producto de un populismo anárquico. En diciembre de 1976 José López Portillo recibiría una presidencia disminuida<sup>97</sup>. Sin embargo, el anuncio de nuevas reservas petroleras justo en el momento del alza de precios del crudo a nivel mundial, permitiría que se pensara que era momento de “administrar la abundancia”. Su traducción fue la petrolización de la economía recurriendo cada vez más a préstamos externos sin atacar de fondo debilidades estructurales, la abundancia de dólares permitió aumentar los subsidios en todas las áreas; hasta que inesperadamente el precio del petróleo cayó en 1982, con la consecuente devaluación del peso, que no frenaría la fuga de capitales sino que la acrecentaría, haciendo que el gobierno tomara la decisión de nacionalizar la banca.

---

<sup>96</sup> Labastida Martín del Campo, *Op.cit.*, p. 635.

<sup>97</sup> Meyer Lorenzo, “El presidencialismo. Del populismo al neoliberalismo”, en *Revista mexicana de Sociología*, UNAM, vol. 55, núm. 2, abril-junio 1993. pp. 66-67.

Con esto el Estado se fortaleció, pero al mismo tiempo vino acompañado de una inflación de casi el 100% anual, un crecimiento cercano a cero, una deuda externa de 85 mil millones de dólares y la necesidad de reiniciar otro proceso de reconciliación con el sector privado, ya que la imagen proyectada con la nacionalización fue la de que México de la noche a la mañana se había convertido en un país socialista. Se había atentado contra los derechos de propiedad, sin consulta ni consenso público, se afectó directamente a los banqueros *cúpula de facto*, que era el interlocutor del sector privado por excelencia, y a partir de entonces se rompería uno de los pactos que sustentaba el Estado corporativo: el que los empresarios no hacían política<sup>98</sup>.

De aquí en adelante se habría de imponer las realidades externas implícitas en la globalización de la economía internacional, así como el surgimiento del neoliberalismo y el culto a la economía del mercado.

## **2.3 La nueva configuración del Estado mexicano**

### **2.3.1 El cambio de régimen económico.**

La nacionalización de la banca en el contexto internacional fue vista como una medida anacrónica. Desde la década de los setenta —cómo se describió en el capítulo anterior— en los países industrializados se había planteado la necesidad de reestructurar al Estado, la aguda recesión económica provocó un renacimiento intelectual del neo *Laissez faire*, para el cual el Estado benefactor era el único culpable, con su excesivo gasto, que generaba déficit e inflación. En este tenor podemos observar como en 1978 en China se dieron los primeros pasos a la liberalización económica; en 1979 llegó Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña, emprendiendo una agresiva política de desregulación económica y finalmente, en 1980 llega Reagan a la presidencia de Estados Unidos implementando las mismas políticas.

---

<sup>98</sup> Cárdenas Sánchez Enrique, “La reestructuración económica de 1982-1994”, en Servín Elisa, *Op.cit.*, p. 200.

En 1982, México era el país más endeudado del Tercer mundo y en consecuencia, anunció que no podía seguir pagando la deuda externa. Debido a la interdependencia del sistema financiero se temió un colapso internacional, así que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y diversos bancos centrales de los países industrializados realizaron en préstamo de varios miles de millones de dólares, que resolvieron momentáneamente el problema pero incrementaron aún más la deuda. Ahora bien, la incapacidad para pagar la deuda y los intereses en los tiempos previstos, no obedecía a un simple “problema de caja” como lo decía López Portillo, era más bien un problema estructural, era una crisis del patrón de acumulación de sustitución de importaciones, ya no existía acumulación de capital en México; pero también crisis del modelo de desarrollo que había creado una burguesía nacional en extremo protegida y por tanto, poco preparada para competir en los mercados internacionales.

El 1 de diciembre de 1982 llegaría Miguel de la Madrid a la presidencia, proponiendo como parte de su política económica dos años de ajuste severo, otros dos de consolidación de la estabilidad macroeconómica, para concluir con dos años de crecimiento acelerado, lo cual no ocurriría ya que el ajuste se extendería a lo largo de todo el sexenio<sup>99</sup>. Para intentar llevar a cabo esta propuesta en 1982, se daría a conocer el PIRE (Programa Inmediato de Recuperación Inmediata) con el que se iniciaría la aplicación de las estrategias elaboradas por el FMI para el país<sup>100</sup> y que habían sido concertadas en una Carta

---

<sup>99</sup> Cordera Campos Rolando y Leonardo Lomelí Vanegas, “El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural (1982-2004)”, en Rolando Cordera Campos y Carlos Javier Cabrera Adame (Coord.), *El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural (1982-2004)*, UNAM-FCE Trimestre Económico, México, 2008., p. 86.

<sup>100</sup> Las estrategias giraban en torno a tres grandes ejes: a) la política fiscal (para incrementar los ingresos fiscales); b) la desreglamentación interna y externa, que tenía como objetivo eliminar las distorsiones que el intervencionismo había provocado; para ello se propuso la disminución o supresión del control de precios, de las barreras aduanales, de monopolios, de las subvenciones, de la rigidez en el mercado de trabajo; la medida más radical fue la apertura comercial, que expuso brutalmente la industria nacional (antes protegida y con un mercado cautivo) a la competencia externa; c) las privatizaciones, que permitirían la reducción del peso del Estado y, de manera transitoria, un reequilibrio de las finanzas pública. en Revueltas Peralta Andrea, *Las transformaciones del Estado en México: un neoliberalismo a la “mexicana”*, UAM- Xochimilco, México, 1996, p. 68.

de Intención, donde se plasmaban todos los objetivos y al mismo tiempo el gobierno mexicano se comprometía a informar y consultar con el FMI de manera regular para hacer los ajustes necesarios.

Siguiendo estos lineamientos se reestructuro el adeudo y se impusieron severas medidas de ajuste macroeconómico llevando a cabo una mesurada gestión de la economía monetaria y gran austeridad en el gasto público, todo esto con miras a reducir la inflación, lograr la estabilidad financiera, pero sobre todo a producir el excedente necesario para pagar la deuda.

En los primeros tres años del sexenio el cambio fue lento y gradual, el 4 de diciembre de 1982, se envió la propuesta al Congreso de reforma de los artículos 25, 26, 27, 28 y 73 de la Constitución, con lo cual se pretendía definir la economía mixta como un régimen de coparticipación entre el Estado, el sector privado y los sectores sociales en las actividades económicas y se precisaron ámbitos estratégicos reservados exclusivamente al Estado.

La privatización de empresas públicas estuvo centrado en fusiones, quiebras y venta de las mismas, entre 1983 y 1985 se redujo el número de entidades paraestatales de 1155, que había al inicio del gobierno a 700, y sería en la segunda mitad del sexenio cuando realmente se afectaría a las grandes empresas paraestatales, con la liquidación de la Fundidora de Monterrey y la privatización de Aeroméxico.

Lo grave fue que a partir del ajuste para pagar la deuda, la economía empezó a trazar una ruta de crecimiento distinta a la histórica, con menos dinamismo y promedio y en consecuencia con menor capacidad para crear empleos formales, justo en el momento en el que el país experimentaba una transición demográfica que conllevaría a una sociedad de adultos con necesidad de incorporarse al mercado laboral. Después del PIRE se realizó un segundo intento de ajuste a través del PERE (Programa Extendido de Reordenación Económica) que duraría hasta 1986.

La persistencia de la crisis, la caída del precio del petróleo, la devaluación de la moneda y el aumento de la inflación, hicieron que desde 1984, se comenzará a plantear un “cambio estructural”; el viraje fundamental se produjo con la apertura comercial a mediados de 1985 (se canceló la mayor parte de los requerimientos de permisos previos de importación y se redujeron los aranceles) y, más tarde, con el ingreso al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en 1986. Entre 1985 y los primeros meses de 1988, la economía mexicana pasó a ser una economía de las más cerradas a una de las más abiertas en el mundo (solamente 3% de las importaciones quedaron sujetas a permiso previo y el arancel promedio bajo de más de 50% a menos de 10%)<sup>101</sup>.

Cabe señalar que esta liberalización se dio de manera simultánea a la caída de los precios del petróleo, que tendió a depreciar aún más el peso, inhibiendo las importaciones y haciendo irrelevante la apertura comercial en el corto plazo. El déficit público se elevó para llegar al mismo nivel que en 1982. La economía dejó de crecer y con ello se detuvo la reducción de la desigualdad y la pobreza; el crecimiento de la clase media también se contrajo y la expansión del gasto social prácticamente se detuvo. En 1987 se derrumbó la Bolsa provocando una fuga masiva de capitales y la devaluación del peso.

En el último año del sexenio ante la crisis, de la Madrid optó por un plan heterodoxo, que echaba mano del viejo corporativismo, organizado por el equipo económico del candidato del PRI a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, el gobierno reunió a representantes del sector privado, de los obreros y los campesinos, y convocó al Pacto de Solidaridad Económica<sup>102</sup>, para tratar de reducir la inflación pero sin los costos sociales que conllevan las medidas de ajuste tradicional. Se mezcló por un lado la reducción del gasto social y la disminución de subsidios con el uso de un ancla nominal (el tipo de cambio) y el control concertado de precios y salarios. El éxito del programa fue tal que la inflación disminuyó de 153.5% en 1988 a 23.8% en 1989. Sin embargo:

---

<sup>101</sup> Cordera Rolando, *Op.cit.*, p. 90.

<sup>102</sup> Cárdenas Sánchez Enrique, *Op.cit.*, pp. 212-213.



En el periodo, el PIB real apenas si pudo aumentar un modestísimo 0.2%, en contraste con la deuda externa que aumentó hasta sobrepasar los cien mil millones de dólares. (...) Para la sociedad mexicana el costo de la nueva política fue muy alto, y lo pagaron todos los sectores sociales con una excepción: la elite mexicana -el 10% con los ingresos más altos- que no vio disminuida su riqueza sino, incluso, la aumento. En contraste, entre 1982 y 1988, la participación de los salarios en el PIB disminuyó: de representar el 35% bajo al 26%, y el salario real cayó en un 40%. Al finalizar el decenio, un estudio oficial declaró que el 41.3% de los mexicanos vivía en la pobreza o la pobreza extrema<sup>103</sup>.

Salinas de Gortari era el sucesor natural, con él en la presidencia se aseguraba la continuidad del tránsito al neoliberalismo. Teniendo como contexto la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, la globalización irrumpiría como un fenómeno avasallador; el gobierno mexicano haría suyo el nuevo decálogo de los organismos internacionales expresado en el Consenso de Washington<sup>104</sup>.

El PND 1989-94 tenía como metas 2.9% de crecimiento del PIB para 1989 hasta llegar al 6% en 1993; para ello era prioritario sanear las finanzas, controlar la inflación y renegociar la deuda, sin abandonar la reforma fiscal, desreglamentación, privatizaciones, ni tampoco la lucha contra la pobreza extrema.

En el verano de 1989 México llegó a un acuerdo con sus principales acreedores de tal manera que la relación de deuda externa pública paso de representar el 95% del PIB en 1987 a un promedio de 29% durante el salinismo. En lo que concierne a la reforma fiscal, se puso énfasis en: a) la ampliación de la base gravable, b) la baja de la tasa del impuesto sobre la renta y c) la reducción del IVA; sin embargo la ampliación de la primera recayó principalmente sobre los sectores

---

<sup>103</sup> Meyer Lorenzo (1993), *Op.cit.*, p.70.

<sup>104</sup> En este documento se amplió y confirmó el sentido general de las reformas estructurales de los años ochenta para América Latina, proponiendo diez medidas para corregir los efectos no previstos de las políticas de ajuste: Asegurar la disciplina fiscal, priorizar el gasto público en educación y salud, realizar reformas tributarias, mantener tasas de interés positivas determinadas por el mercado, tener tipos de cambio competitivos, promover políticas comerciales liberales, apertura a la inversión extranjera, privatizaciones, desregulación, protección a la propiedad privada.

medios; la segunda solo favoreció a ingresos mayores y la tercera disminuyó del 10% al 15%, para volver a subir en 1995. Además de que el impuesto del 2% al activo fue una carga muy pesada para pequeñas y medianas empresas.

En cuanto al crecimiento este se daría de forma indudable entre 1989-90, pero a partir de 1991, habría un decrecimiento, hasta que en 1994, después del aumento del gasto público en el contexto de las próximas elecciones volvería a haber un modesto crecimiento.

En 1990 la privatización de la banca que había sido nacionalizada en 1982, fue una especie de garantía que el Estado entregó al sector privado y a los organismos financieros internacionales de que la época populista había quedado atrás. Si bien de la Madrid había iniciado el proceso de privatización fue con Carlos Salinas con quién realmente se transformó una parte importante del sector paraestatal. En 1989 el gobierno decretó la privatización de Aeronaves de México y de Mexicana de Aviación, así como de algunos ingenieros azucareros y el grupo Dina. En 1990, se privatizó Teléfonos de México, la Minera Cananea, con otros ingenios y algunas plantas de Conasupo. Otra reforma muy importante fue la concesión de 4000km de autopistas al sector privado.

La reforma al artículo 27 constitucional en 1992 se propuso la conversión de la tierra en mercancía y la posibilidad de establecer asociaciones mercantiles en el campo, con esto se buscaba finiquitar el predominio histórico del Ejecutivo en las relaciones sociales básicas. Sin embargo la política pública que más marco el reformismo de Carlos Salinas, fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En el contexto de la globalización se observaba la tendencia a la regionalización, después de la caída del bloque soviético se reprodujo un reacomodo de las potencias así como de su zona de influencia, de tal manera que se vislumbraban tres grandes zonas económicas: la Comunidad de Estados Europeos (CEE- que actualmente conocemos como la Unión Europea UE), América del Norte, y Japón con los países asiáticos. Ante la perspectiva de la conformación de estos bloques y el peligro de que México quedara aislado en un contexto económico hostil, cambio la relación entre la seguridad nacional y el

comercio exterior. Así después de dos años y medio de complicadas negociaciones el 17 de noviembre de 1993 el TLC fue aprobado por el Congreso estadounidense y sería puesto en vigor en enero de 1994. Con este tratado México buscaba asegurar el mercado norteamericano a sus exportaciones, mejorar la conducción de controversias comerciales y, sobre todo, institucionalizar la apertura comercial que daría certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros.

En cuanto a la rigidez del mercado de trabajo, podría decirse que mediante la colaboración de la burocracia sindical y la Secretaria de Trabajo se fue imponiendo la “flexibilización”<sup>105</sup> con el objetivo de aumentar la productividad ante movimientos de resistencia que tuvieron poco éxito.

Al finalizar el sexenio hubo tanto saldos favorables como negativos. En términos de crecimiento económico el resultado estuvo por debajo de lo esperado, entre 1988-94, el PIB creció solo un 3.5%, a pesar del aumento de inversión extranjera el crecimiento no logró darse a un ritmo aceptable. La inversión total creció un 28%, de lo que la pública represento solo el 4.8% y la privada aumentó a un ritmo de 8.4% al año. Sin embargo este aumento de inversión no se tradujo en creación de mayores fuentes de empleo y los que lo estaban no ganaron mucho más que antes. La productividad de los empleados aumento un 1.3% entre 1988-94 y sus remuneraciones reales crecieron más de un 1% en promedio al año<sup>106</sup>.

El gobierno saliente le heredaría a su sucesor, un sustancial déficit en la cuenta corriente y el programa de vencimientos a corto plazo de Tesobonos, expedidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para pagar con pesos la deuda nominada en dólares. Aunado al deterioro macroeconómico, la situación se

---

<sup>105</sup> La flexibilización laboral, se refiere a la capacidad de adaptación del mercado laboral a los cambios; el proceso de adaptación implica la movilidad geográfica de los trabajadores, la recalificación, la polivalencia, la diferenciación entre pagos fijos y bonos de productividad, modificando los tiempos de trabajo a través de banco de horas, deshomologación salarial, eliminación de contratos colectivos, etc. Este proceso tiende a provocar la precarización de las condiciones de trabajo, al reducir salarios, tasas de sindicalización, pérdida de prestaciones, etc.

<sup>106</sup> Cárdenas Sánchez Enrique, *Op.cit.*,p. 226.

agravo cuando la Reserva Federal de Estado Unidos decidió aumentar las tasas de interés, además del clima de inseguridad política que provocó el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu secretario ejecutivo del PRI.

El gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994- 2000) quedaría marcado por el “error de diciembre”, la mayor devaluación del peso en la época contemporánea. Quizá por una mala decisión la devaluación fue lo doble de lo que hubiera sido necesario. La solución no sería el cambio de rumbo sino, por el contrario, la profundización del cambio estructural.

El gobierno implementó varias medidas para resarcir el daño ocasionado por la crisis: el 3 de enero de 1995 se firmó un nuevo pacto concertado por el gobierno con los sectores sindicales y empresariales (Acuerdo de Unidad para superar la Emergencia), en el que se esbozó el programa de ajuste económico, y se hicieron compromisos en precios y salarios para evitar el impacto de la inflación. Lo más novedoso del acuerdo fue que se sustituyeron los incrementos generalizados al salario, por bonos de productividad. Por otro lado se implementó el rescate bancario, que consistió en que el Estado absorbiera la cartera vencida de los bancos, considerada impagable convirtiéndola en deuda interna a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Se anunció también una nueva ola de privatizaciones de carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos. En el mismo sentido que en el sexenio anterior de modificar la intervención del Estado en las relaciones sociales básicas, se realizó una reforma al régimen de seguridad social de los trabajadores del sector privado, que consistiría en eliminar el mecanismo de solidaridad intergeneracional del enfoque clásico de seguridad social y sustituirlo por la capitalización individual, propiciando el ahorro de los trabajadores, que será administrado por las Afores y las Siefores.

A pesar de las medidas implementadas la crisis de 1994, sería devastadora para la clase media, así como para la hipoteca de ingresos fiscales, el costo del rescate bancario para los contribuyentes sería alrededor del 20% del PIB.

En resumidas cuentas la recomposición del capital en México, anunciado desde los ochentas y profundizado en los noventa se desarrolló en torno a cuatro grandes ejes: incremento de la productividad laboral, mercantilización de la tierra, despojo de bienes naturales comunes, apropiación privada de bienes públicos e integración de la economía con Estados Unidos. Operados desde un cambio de régimen económico, entendiendo a este como una forma específica de relación entre la economía y la política, y entre el Estado y el mercado, tiene como propósito transformar la naturaleza del Estado de seguridad, para convertirlo en “Estado nacional de competencia”.

### **2.3.2. Los conflictos políticos y el intento de socialización del proyecto neoliberal.**

Desde que finalizó el gobierno de Echeverría el discurso del populismo y el nacionalismo, presentaba señales de agotamiento. La crisis se agravaría con la caída de precios de petróleo en 1981 hasta culminar con la nacionalización de la banca en el 82.

En 1982, año en que Miguel de la Madrid llegará a la presidencia, casi al unísono, entrarían en crisis todas las relaciones y pactos, que conformaban la base social que apoyaban al proyecto estatista. La primera ruptura evidente era con el sector privado, durante muchos años el sector más beneficiado con el modelo ISI, en el que encontró acomodo con las políticas proteccionistas que crearon un mercado cautivo, subsidios fiscales y límites a la inversión extranjera.

La burocracia era otro grupo de interés creado por el gobierno en su papel promotor del empleo, que vio amenazados sus intereses desde que López Portillo implementó una política de modernización y racionalización del aparato público, que implicó, la desaparición y fusión de diversas secretarías, y que ponía en peligro sus intereses.

La cooptación y represión de los diversos movimientos sociales con tendencias democráticas durante el gobierno de Echeverría, no destruyeron el engranaje

corporativo, pero si lo debilitaron, además la profundización de la crisis fue deteriorando los niveles de bienestar social. El tutelaje estatal del campo, también se debilitó ya que las obligaciones financieras que se tenían con este sector se cumplían a medias.

Los años ochenta, pasarían a la historia como la década perdida, para el Tercer Mundo incluyendo a México. La llegada de la “tecnocracia”<sup>107</sup> al poder era simplemente una expresión de las tendencias mundiales que comenzaron a operar desde la crisis de los años setenta, con la reorganización del capital y la forma de acumulación potenciada en el contexto de la globalización. En este contexto el país y el gobierno se presenta con una gran fragilidad ante el capital, con la consecuente necesidad de buscar sus apoyos para lograr consolidar el cambio estructural, así como frenar las tendencias neopopulistas.

Al llegar a la presidencia de la Madrid tendría que afrontar la crisis, las primeras decisiones tomadas solo empeorarían la situación tanto con la izquierda como con el sector privado. En realidad la nacionalización de la banca solo había durado tres meses, al reformar los artículos 25 y 28 constitucionales no sólo se delimitaba la participación del Estado en sectores estratégicos, sino que a la par se comenzó a revertir la nacionalización de la banca al permitir que 33% del capital de los bancos fuera del sector privado, sin que ninguna persona en particular pudiera tener más del 1%. Estas medidas fueron vistas por la izquierda como una traición

---

<sup>107</sup> Desde el sexenio de Echeverría había surgido una nueva forma de legitimidad gubernamental que sustituía el saber cómo en la política, por la eficiencia de la administración pública. Durante su sexenio se desplegó una lucha entre monetaristas y neokeynesianos, que ocupaban puestos en diversas secretarías. En el contexto de la Reforma Administrativa, López Portillo creó la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), misma que entregaría a los monetaristas en 1976 a cargo de Miguel de la Madrid, quien posteriormente sería candidato a la presidencia; una vez en el poder la secretaría seguiría operando en manos de Carlos Salinas de Gortari. Este grupo de monetaristas neoliberales, tenían en común su identidad generacional, representando la juventud dispuesta a romper con el pasado y obviamente con la generación precedente; también compartían la misma formación educativa en licenciaturas en economía y posgrados en el extranjero (especialmente en E.U.), además de ser un equipo dotado de *expertise* (experiencia). Sería este grupo quién propondría el “cambio estructural” y se identificaría con la modernización y la implementación del neoliberalismo, en Rousseau Isabelle, “Las nuevas élites y su proyecto modernizador, en Elisa Servín, *Op.cit.*, pp. 247-258.

al permitir la participación privada en sectores claves de la economía. En cambio para los empresarios estas medidas lejos de representarles garantías, significaron más bien la reafirmación de la injerencia del Estado en la economía, a partir de entonces el sector privado tendería a aliarse de manera progresiva con el PAN con quien tenía mayores afinidades ideológicas.

Miguel de la Madrid al inició de su gobierno se comprometió a llevar adelante la democratización del país. Un punto central era la reforma electoral. Ya en 1976 la ausencia del candidato panista en las elecciones había mostrado que las reformas echeverristas se habían quedado muy cortas. En ese sentido la reforma electoral de Portillo en 1977 la LFOPPE (Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales), había representado un avance ya que se enfocó en ampliar el sistema de partidos, permitiendo que varias organizaciones obtuvieran su registro mayoritariamente del sector de la izquierda como: el Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista de los Trabajadores, pero, también de la derecha con el Partido Demócrata Mexicano, que recogía los restos del sinarquismo.

Sin embargo a pesar del compromiso de democratización, la reforma electoral de 1986, resultó ser una contrareforma de la LOPPE, puesto que si en ésta se había definido por primera vez a las elecciones como una tarea compartida entre Estado, partidos y ciudadanos; con la reforma se regresaba a la antigua formula en donde las elecciones eran solo tarea de las autoridades, y lo que más crispó los ánimos fue la reforma al artículo 54 constitucional que impedía la posibilidad de que los partidos de oposición pudieran llegar a ser mayoría en el Congreso. Por su parte el PAN iría avanzado electoralmente en estados del norte como Chihuahua y Nuevo León, aunque en realidad el PRI no perdió ninguna gubernatura durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Paradójicamente se operaba la transformación de la naturaleza de la dominación, de la *forma* de Estado, pero echando mano de la maltrecha pero todavía eficiente estructura antigua de dominación: corporativismo, partido del aparato estatal y por supuesto presidencialismo.

Las severas políticas de ajuste a las que se vio sometido el aparato productivo y la sociedad en este sexenio tendrían un alto impacto social y político.

La reconversión industrial<sup>108</sup> necesaria para llevar a cabo el cambio estructural, estuvo basada por un lado en la transformación del aparato productivo por medio de la innovación tecnológica, y por otro lado en la reestructuración de las relaciones laborales, de la implementación de la “flexibilización laboral”, que opera tanto al interior como al exterior de las fábricas o empresas; en medio de privatizaciones, despido de trabajadores, desmantelamiento de contratos colectivos, etc., es decir la nueva forma de organización del trabajo consistió en revertir conquistas laborales y derechos sociales. Muestra de ellos son las siguientes cifras:

Anunciado en la inflexión de la curva salarial de 1977 y desatado durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-88), el derrumbe salarial estaba entre sus primeros saldos. Tomando como base 1976, en que había alcanzado su punto más alto (40.3 por ciento del PIB), el índice descendente del salario real llegaba en 1988 a 45.2: una pérdida acumulada de más de 50 por ciento. (...) Al llegar al año de 1988, el 68% de la Población Económicamente Activa (PEA), se encontraba desempleada o subempleada.<sup>109</sup>

La pobreza y las desigualdades crecieron enormemente, de acuerdo a los criterios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 1990, 40 millones de mexicanos eran pobres de esa cifra 17 millones podían ser catalogados como pobreza extrema. La ausencia de violencia en el sexenio delamadridista solo puede ser explicado por:

La ampliación sin precedentes de la economía informal, el recurso masivo al trabajo temporal con remuneraciones por debajo de las indicadas por la ley, la tradicional solidaridad familiar y, finalmente el inevitable aumento de la delincuencia. (...) Son también los años en que no sólo aparecen y se consolidan los grandes cárteles de la droga que la importan de Sudamérica y la exportan a Estados Unidos, sino también proliferan las bandas que la distribuyen al menudeo en los ámbitos urbanos de México.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Alfie Miriam C y Luis H. Méndez B., “Orden y centro oculto del poder en México”, en *Poder, Ideología y Respuesta Social en México*, UAM- Azcapotzalco- EÓN, México, 1997. p. 135.

<sup>109</sup> Roux Rhina, “El Estado mexicano: Una mutación épocal”, en *Después del 2 de julio ¿Dónde quedo la transición? Una visión desde la izquierda*, UAM- Xochimilco, México, 2001. p. 58.

<sup>110</sup> Medina Peña Luis, *Op.cit.*, p. 259.



Salvo en sectores como las fuerzas armadas, la seguridad pública, y la educación, el esfuerzo para reducir el gasto público implicó la continuación de la tendencia al recorte de personal en todas las dependencias federales, a la par de la reducción del gasto público, que deterioraba el pacto con la burocracia federal pero también con la gremial. Un caso ejemplar de la resistencia de la burocracia gremial corporativa a perder sus privilegios sería el de Joaquín Hernández Galicia, líder petrolero, quien sería el primero en oponerse a las medidas de austeridad ya que le cancelaron contratos de construcción que el sindicato tenía con Pemex.

Las modalidades adoptadas por de la Madrid y los consecuentes fracasos expresados en el plano económico, vulneraban el mecanismo regulador del régimen, por que impedían el reparto de cuotas de poder y riqueza. A medida que la “tecnocracia” avanzaba y se posicionaba al interior del PRI, se iba relegando a los grupos tradicionales del partido. En 1986 se daría la fractura al interior del PRI con la creación del Movimiento de Renovación Democrática encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo González Guevara. Esta corriente representaba la defensa del proyecto estatista del nacionalismo revolucionario que estaba en crisis ante el proyecto neoliberal; en 1987 ante la imposición de Salinas de Gortari como candidato a la presidencia este movimiento se separaría del partido.

En este mismo año se produce un suceso de gran peso en términos simbólicos: la confirmación de la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI al aceptar su postulación como precandidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), lo novedoso fue que se trataba de la salida de un representante de la corriente ideológica del Estado mexicano, que implicó un trastocamiento del proceso interno de sucesión presidencial; el henriquismo de 1952, había sido el último movimiento disidente y había sido superado sin alteraciones de este mecanismo. Esta disputa real por el mando estatal, surgía desde el interior del PRI, haciendo pública la fractura elitista de la familia revolucionaria –dividida entre neopopulistas reformistas y tecnócratas neoliberales– pero además evidenciando que los mecanismos tradicionales de reproducción estatal se habían trastocado.

Junto a la candidatura de Cárdenas estaba la de Manuel J. Clouthier postulado por el PAN, este personaje era un modesto empresario que ideológicamente hablando era ajeno para el partido, pero, que a la vez era muy conveniente para Coparmex.

Así las cosas las elecciones de 1988 tenían como preludeo un contexto efervescente con la crisis social y la devaluación del peso en 1987, en el que el discurso cardenista de la traición a los ideales de la revolución por un lado y la denuncia de la corrupción por parte de Clouthier encendían los ánimos. Las encuestas que recuperaban la intención de voto, poco favorecían al candidato priísta, por lo demás las elecciones de 1988, estarían marcadas por la sospecha del fraude en la ya célebre “caída del sistema”.

Salinas llegaría a la presidencia con tres objetivos básicos: recobrar la legitimidad, darle continuidad al proyecto neoliberal y al mismo tiempo socializarlo. Varias fueron las medidas tomadas para cumplir estos objetivos, pero si algo resalta es la exacerbación del presidencialismo autoritario y como contraparte la reiteración de una sociedad civil débil.

Salinas golpearía a algunos sectores conservadores de las fracciones patrimonialistas y clientelares de la clase política priísta; la más espectacular fue la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia “la Quina”, el mismo líder petrolero que en el sexenio anterior se había opuesto a las políticas de ajuste económico y que era opositor de la candidatura de Salinas.

Por otro lado se obligó a Carlos Jongitud, “líder moral” y hombre fuerte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a dejar ese liderazgo. Salinas también detuvo al famoso banquero Eduardo Legorreta sospechoso de haber propiciado el crack bursátil de 1987. También destituyó a varios gobernadores que habían fallado en el control del proceso electoral.

Estas acciones restituyeron la disciplina en las estructuras corporativas tradicionales, y al mismo tiempo dispararon los índices de popularidad del

presidente, al proyectar la imagen de que su gobierno emprendía acciones para combatir la corrupción.

El sexenio salinista fue el primero en el que la oposición logró ocupar más puestos en el Congreso, haciendo peligrar la aceptación de iniciativas. Después de las elecciones tan sospechosas de 1988, Salinas tomaría la decisión de pactar con el PAN- más afín a su proyecto-, quienes le ofrecerían al presidente un apoyo condicionado, y serían recompensados con enormes ganancias: las llamadas “concertaciones”. En 1989 se reconoció el triunfo del PAN en Baja California, después seguiría Chihuahua y, mediante una negociación después también llegaría a Guanajuato.

El trato con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) –creado en 1989 por Cárdenas y Muñoz Ledo, entre otros personajes de la izquierda-, fue completamente distinto, a éste se le castigó no sólo por la diferencia ideológica, sino porque seguían siendo los culpables de la fractura en el PRI.

El entendimiento del PRI con el PAN, se explica en gran medida por la nueva actitud de los panistas, el “pragmatismo” que había triunfado sobre la vieja militancia cerrada y testimonial, las nuevas fracciones renovadoras se organizaron en torno a Luis H. Álvarez y, al reconocer que habían dejado de ser la única fuerza opositora<sup>111</sup>, entendieron que el avance político solo podía darse dialogando, negociando y aceptando fórmulas parciales o provisorias de transición. Esta actitud les valió severas críticas del PRD, quienes se negaban a aceptar la validez de las elecciones.

El proyecto salinista enmarcado en el discurso de la modernización, el progreso y la democracia, implicaban una reforma del Estado que debía implementarse a una doble velocidad: rapidez para la apertura económica, lentitud para la

---

<sup>111</sup> El PAN había obtenido 101 curules en la Cámara de Diputados, frente a 260 del PRI y 139 del FDN., en *Ibíd.*, p. 296.

transformación política<sup>112</sup>, por lo que las reformas electorales se desplegarían en distintas etapas a través de un proceso controlado<sup>113</sup>.

El proyecto neoliberal de Salinas implicaba simbólicamente la “reforma de la Revolución”, desde que se creó la SPP en la que se concretó la nueva tendencia mundial de reorganización del capitalismo en la figura de los “tecnócratas”, ésta apareció como un enclave moderno, en un contexto antiguo que para lograr concretarse debía modificar el poder infraestructural del Estado, los órdenes simbólicos que lo soportaban y las condiciones materiales en las que se reproducía la vida de los dominados. Implico por tanto una nueva manera de entender y de hacer política.

Salinas trato de construir un “nuevo mito social”, para ello sus discursos y acciones se desplegaron en diversos planos: por un lado en las ciudades trato de mostrarse como un presidente moderno y dinámico, mientras que en el campo - diría Rousseau- cultivaba la figura del *tlatoani* sobre todo en las regiones indígenas. Cuidaba especialmente sus discursos y los adecuaba dependiendo el contexto y los lugares, consciente de la coexistencia de los dos mundos y de la importancia que tenía el pasado y el mito nacionalista revolucionario, en su primer informe declaraba: “Al transformarnos, no vamos a destruir nuestro pasado: al

---

<sup>112</sup> Rousseau Isabelle, *Op.cit.*, p. 275

<sup>113</sup> De las primera etapa 1989- 1990, lo más relevante fue la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), integrado por consejeros magistrados designados por el Legislativo y el Ejecutivo y por representantes de los partidos políticos bajo la presidencia del Secretario de Gobernación, se constituía como organismo público con patrimonio propio. También se creó el Tribunal Federal Electoral (TFE), con facultad para emitir resoluciones de pleno derecho. Y por último la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en el que se incluía de acuerdo al Código Penal, la sanción de delitos electorales.

Posteriormente en 1993 se harían modificaciones a diversos artículos constitucionales de lo que destaca la eliminación de la cláusula de gobernabilidad introducida en 1986, que garantizaba la mayoría absoluta de la misma, al partido con mayor número de votos; se establecieron nuevos requisitos para la designación del director general del IFE, para garantizar su imparcialidad; también por primera vez se reglamentó la contratación de los tiempos comerciales en los medios de comunicación; y por último uno de los más importantes que derivó de un acuerdo entre PRI-PRD fue la creación de un sistema caso parlamentario para la elección indirecta del Jefe de Departamento del Distrito Federal, que se haría vigente hasta 1997.

contrario, lo vamos a preservar con mucho orgullo como símbolo de nuestra identidad nacional”<sup>114</sup>.

En consecuencia con esta lógica que pretendía sustituir el mito del “nacionalismo revolucionario”, el 4 de marzo de 1992 en la celebración de la LXIII aniversario del PRI, Salinas daría un discurso en el que introduciría la nueva doctrina del “liberalismo social”, una especie de camino intermedio entre el estatismo y el neoliberalismo, se desplego aplicando el neopopulismo como política social, y el neoliberalismo como política económica. La elección de pronunciar el discurso en ese momento no obedecía al azar, era la oportunidad de desligar la nueva ideología del gobierno, heredándola al partido y posibilitando así que traspasará el sexenio.

El proyecto neoliberal pretende transformar la naturaleza de la dominación y todas las relaciones que se entretienen en ellas, el proyecto de Salinista pasaba, por reorganizar a las élites en el poder, por lo que opto por regresar a las viejas reglas incluyendo en el juego político a todos los sectores del partido, reacomodando a la vieja generación de políticos y creando espacios para la nueva generación. Entre los años 1989-1991 concentro el sector modernizador en distintas Secretarías como la de la Contraloría General de la Federación (Secogef), la SPP (conservaron instancias privilegiadas de negociación con los líderes sindicales como el Infonavit, la Conasupo y el ISSSTE, las cuales eran), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue); al mismo tiempo dejaba a los viejos políticos en puestos importantes como la Secretaría de Gobernación a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios.

La SPP se desintegraría en 1992, sin embargo muchos de sus integrantes serían traspasados a otras instancias de poder como la SEP a cargo de Ernesto Zedillo, con lo que se clausuraba la tradición de esta instancia como señorío de los “políticos”, con esto se aseguraba que la educación como transmisora privilegiada

---

<sup>114</sup> Primer Informe de Gobierno, citado por Isabelle Rousseau, *Op.cit.*, p. 265.

de valores, se renovará y adecuara difundiendo los nuevos valores del neoliberalismo. Otros integrantes de la SPP se fusionaron con la Sedue para crear la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) impulsora del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) a cargo de Luis Donaldo Colosio, ex presidente del PRI.

Desde el sexenio de Miguel de la Madrid la política social se transformó al estar dirigida al combate a la pobreza, esto fue resultado de las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, que ante la crisis económica en América Latina y las consecuentes políticas de ajuste en los años ochenta, promovía políticas basadas en la “compensación social”, que sustentadas en la eficiencia técnica, desarrollaran mecanismos de identificación basados en estadísticas (muchas veces arbitrarias) de poblaciones en condiciones de pobreza o pobreza extrema, a las cuales se les brindaría protección mientras durara el ajuste, con el objetivo de evitar posibles estallidos sociales.

En este sentido el Pronasol fue una continuación de éste tipo de políticas que no consideran el combate a la pobreza desde una perspectiva de obstáculo al desarrollo nacional, con la consecuente necesidad de políticas estructurales para combatirlo, sino que lo reducen a la implementación de medidas paliativas:

Durante la administración de Carlos Salinas es claro cómo el discurso gubernamental, alejado de consideraciones de seguridad nacional amplia, hizo un uso ideológico del tema de la pobreza, no tomó medidas para la disminución o al menos para el freno de la miseria del país, y delineó su combate a partir de consideraciones estrictamente de seguridad del gobierno y de seguridad nacional restringida o preventiva, entendida como las acciones tendientes a evitar explosiones sociales que requiriesen intervenciones policiacas y militares<sup>115</sup>.

Al mismo tiempo el Pronasol, pretendió ser una nueva forma de pacto social que eliminara lo corporativo y lo dejara netamente como clientelista, como lo indica Zermeño, lo que intento hacer el programa Solidaridad fue establecer una relación directa entre los individuos atomizados (organizados con base en criterios no

---

<sup>115</sup> Piñeyro José Luis y Gabriela Barajas, “Seguridad Nacional y Pobreza en México: Notas sobre el Pronasol”, *El Cotidiano*, UAM- Azcapotzalco, núm. 71, septiembre 1995, p. 2.

identitarios como una habitantes de un poblado o colonia, como usuarios e un camino, etc) y el agente que concentra los recursos. Una muestra del alcance de este proyecto es que a lo largo del sexenio se establecieron 344 mil comités Solidaridad, su potencial político se midió en las elecciones intermedias de 1991, donde se probaría la eficacia en la movilización de las masas. Fue tan exitoso que se pensó en agregar los comités de Solidaridad al PRI, emprendiendo así una reorganización del mismo que diera prioridad a la organización territorial en vez de la sectorial.

La búsqueda de legitimidad del gobierno Salinista transitaba también por la reconciliación con el sector privado, misma que fue facilitada por la segunda ola de privatizaciones. Los apoyos se buscaron en lugares antes no imaginados en ese sentido se reformo se comprende la Reforma al artículo 130 de la Constitución, que transformaría la relación del Estado con la Iglesia, lo más relevante de esta reforma fue el reconocimiento de la personalidad jurídica de las instituciones de culto religioso, pero el puente se tendió especialmente con la Iglesia Católica, como muestra de ello en 1993, Salinas se convertiría en el primer presidente que recibía al Papa reconociéndole su condición de Jefe del Estado Vaticano.

Las elecciones intermedias de 1991, representaron el triunfo del proyecto modernizador, ya que el PRI había recuperado en 3 años más de 4 millones de votos, resulto ser una especie de plebiscito para el gobierno de Salinas, que le permitió continuar con su proyecto y acelerarlo.

Un duro golpe al nacionalismo revolucionario fue la reforma al artículo 27 constitucional, ante la declaración de que el Estado ya no podía seguir repartiendo tierras porque simplemente ya no existían, se clausuraba la tradición que durante más de 70 años significo que reforma agraria era sinónimo de Revolución mexicana, con la gracia política de que los campesinos representaron un apoyo de masas para el Estado. La reforma del artículo permitía además emprender un proyecto modernizador que enarbolaría la libertad del productor para intentar diversas formas de organización y asociación de acuerdo a sus necesidades, la reforma también permitiría transformar las dependencias gubernamentales

destinadas al campo en agencias del desarrollo, que a partir de este momento formularía políticas y programas diferenciados por producto, tipo de productor y región<sup>116</sup>.

En lo que respecta al sector obrero, no se realizaron reformas a la Ley Federal del Trabajo, debido a que el gobierno necesitaba del apoyo de este sector para concluir sus reformas; sin embargo una vez que el presidente logro someter a su voluntad al sindicato petrolero y de maestros, así como a algunas industrias que utilizaban tecnología de punta –como las automotrices- la presidencia logro hacer prevalecer su política de topes salariales, para disminuir la inflación. A la par de esta medida el gobierno promovió nuevos sindicatos como la Federación de Bienes y Servicios (Fesbes), que no sustituiría a la CTM -ya que esta seguía asegurando la disciplina y la unidad de la clase obrera- sino que se encargaría de ir introduciendo a los trabajadores a los nuevos códigos de la vida económica, por lo tanto lo que se quería era agrupar a diversos sindicatos que tuvieran una actitud positiva ante la flexibilización laboral<sup>117</sup>.

Una de las decisiones políticas más importantes fue la firma del TLC, ya que se aseguraba la continuidad de la política económica al escapar a la discrecionalidad de los futuros gobiernos.

El año de 1993 parecía que el triunfo de la modernización se consolidaba con una inflación anual del 7%, la menor en los últimos 25 años y un crecimiento de 4%. El nuevo gobierno estadounidense de Clinton había aceptado la propuesta del TLC. A la par de esto se cumplía el viejo ritual priista de postulación del candidato a la presidencia la Luis Donaldo Colosio<sup>118</sup>, que tenía gran carisma y altos niveles de

---

<sup>116</sup> Medina Peña Luis, *Op.cit.*, p. 320.

<sup>117</sup> Rousseau Isabelle, *Op.cit.*, p. 273, y Meyer Lorenzo (1993), *Op.cit.*, p. 76.

<sup>118</sup> Entre los posibles elegidos a candidatos estaban, además de Colosio, Pedro Aspe el Secretario de Hacienda, y por otro lado Manuel Camacho Solís quien ocupaba el puesto de regente de la Ciudad de México, este último se creía el sucesor natural, puesto que además de ser amigo del presidente, había realizado un muy buen papel negociando con agrupaciones del D.F. que habían caído en manos del PRD.



popularidad, además de haber llevado exitosamente el Pronasol, uno de los proyectos más importantes de la presidencia.

El 1 de enero de 1994 aparecería una coyuntura que parecía podría ser de largo alcance, y que estuvieron marcados por cuatro sucesos importantes: la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la negativa de Camacho Solís a reconocer a Colosio como candidato, negándose a felicitarlo públicamente como era el ritual, y por último los asesinatos de Colosio el 23 de marzo de 1992 y el de José Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre de 1994.

Salinas se vería presionado para elegir a un nuevo sucesor, y finalmente se decidiría por Zedillo quién a pesar de tener un historial complicado, (no tenía experiencia política porque los cargos que había desempeñado eran financieros y el único puesto que lo acercaba más a esa experiencia había sido en la SEP, donde había tenido varios conflictos derivados de los nuevos contenidos históricos de los libros de texto) representaba la opción más viable para continuar con el proyecto modernizador neoliberal.

Después del levantamiento zapatista Salinas se vio presionado a hacer una reforma electoral de último momento para abrir aún más el sistema electoral, el 27 de enero de 1994 se suscribió el Acuerdo para la Paz, la Democracia y la Justicia firmado por ocho partidos; en dónde se incluían las reformas, en mayo se aprobaría así el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), dónde se otorgaba la autonomía a los organismos electorales.

Ernesto Zedillo resultó electo presidente en una contienda electoral excepcional:

“fue muy concurrida (78% de los electores registrados); en contra de lo que se esperaba el candidato del partido oficial ganó con bastante holgura (50.2%) en las elecciones más vigiladas y creíbles del país”.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Rousseau Isabelle, *Op.cit.*, p. 285.

Su gobierno en gran medida era continuador del anterior (siguieron las privatizaciones, el TLC, así como el acercamiento con el PAN) sobre todo en cuanto a políticas económicas, pero donde más divergencias hubo fue en el plano político la relación del presidente con su partido la cual al ser ambivalente fracasó, y por otro lado las políticas sociales que llevarían a diversos autores a afirmar que con Zedillo lo que hubo fue un “liberalismo sin adjetivos”.

Desde antes de ser electo presidente, en un acto de campaña Zedillo pronunciaría su discurso conocido como la “sana distancia”, su defensa de la democracia lo llevaba a afirmar que su deber era gobernar todos y no sólo para su partido, en este mismo sentido, le ofrecía entera libertad al PRI, sin embargo a lo largo de su mandato se encargaría de jugar esta carta a su favor, por momentos gobernaba sin su partido y en otros los obligaba a apoyarlo: en el transcurso de su gobierno impuso a seis presidentes nacionales del PRI, en 1994 obligó a que los legisladores priistas de ambas cámaras aprobaran el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 50%; por otro lado afirmaba la sana distancia alejándose de las presiones corporativas para ejercer su versión del arbitraje democrático.

Al ser declarado electo, afirmaría que las elecciones en las que participó habían sido legales, pero no “equitativas”, dando paso a la permanente inestabilidad electoral, porque de ahora en adelante todos los partidos declararían que participaron en condiciones inequitativas.

Para 1995 el principal objetivo de su gobierno fue sacar adelante la reforma electoral, misma que decidió se discutiera en Gobernación y no dentro del Congreso conformado por mayoría priista. Era tan importante esta reforma que Zedillo accedió a negociar y hacer concesiones al PRD, para que aceptaran firmar el acuerdo para la reforma política.

Las condiciones puestas por el PRD fueron que se destituyera a los gobernadores de Chiapas y Tabasco, sin haber demostrado la supuesta ilegalidad en la elección de los mismos, su enfrentamiento con Roberto Madrazo, le traería varios costos políticos, el presidente se tropezó con la negativa del Congreso del estado para

darle licencia al gobernador, luego de una movilización local en apoyo al gobernador. El fracaso fue doble, no sólo no logro quitarlo de la gubernatura sino que Madrazo logro consolidarse como el hombre fuerte del PRI.

La Asamblea XVII del PRI, se marcaría como el regreso triunfal de los priístas tradicionales históricos en el que se le asestaría un golpe a Zedillo: se aprobaron nuevas reformas estatutarias, entre ellas nuevos requisitos para ser candidato electo a la presidencia o gubernaturas, como llevar 10 años de militancia como mínimo, haber tenido un cargo de dirigencia y otro por elección popular (requisito que ningún “tecnócrata” priísta podía cumplir); por lo que Zedillo no podría designar libremente a su sucesor. Es en esta misma Asamblea que el PRI decidirá desechar el la ideología del liberalismo social y regresar al nacionalismo revolucionario.

A pesar de ello Zedillo logro sacar adelante la Reforma electoral, en 1996 se establecería la figura de consejero electoral como verdadera autoridad, pues se determinó la salida del Secretario de Gobernación que hasta entonces había fungido como presidente del Consejo. En este contexto es que se darían las elecciones intermedias de 1997, donde por primera vez en la historia el PRI perdería la mayoría en la Cámara de diputados, lo que permitiría que la oposición tuviera la posibilidad de no aprobar el presupuesto de egresos, revisar la cuenta pública y aprobar o no, las iniciativas presidenciales.

Otro suceso que marcó la diferencia con Salinas fueron las políticas sociales, Zedillo desecharía sustituiría al Pronasol con el programa “Progresas”, lo que paradójicamente permitía avanzar en el proyecto neoliberal, ya que además de eliminarse el mecanismo de comités, el programa se dirigió específicamente a los sectores de pobreza extrema, con mecanismos más tecnificados en la selección de candidatos, así como para la asignación de recursos y de evaluaciones sobre los proyectos. La centralización de recursos desapareció y se distribuyó a nivel federal entre los estados y los municipios, lo que provocaría a la larga nuevos clientelismos ya que estas instancias utilizarían los recursos para obtener

beneficios políticos. A la par de estos programas se desmanteló la Conasupo así como al IMSS instancias básicas del antiguo modelo nacional popular.

Otro problema que enfrentó Zedillo, fue la aparición de la ingobernabilidad en los primeros años. El contexto político y económico era tan problemático que hacía aparecer vacíos de poder: el “error de diciembre” había devastado a las clases medias, el conflicto del EZLN no había sido resuelto, había nuevos actores en la escena política, como los empresarios militantes, organizaciones como el Barzón, los vacíos se llenaban con la delincuencia y el narcotráfico, la violencia aparecía en actos como el asesinato masivo de civiles en Guerrero y Chiapas, al interior de PRI se rebelaba la *nomenklatura*, etc.

Sin embargo el sexenio llegaría a su fin sin sucesos de gran disrupción, y al llegar al año 2000 se daría la alternancia en la presidencia, con el triunfo de Vicente Fox, que daría por confirmada la transición democrática, pero no su consolidación en el sistema político, ni en la transformación de la *forma* de Estado.

## **2.4 ¿Transformación, crisis, desintegración o renovación? A manera de conclusión.**

Los años ochenta representan una inflexión en la historia del Estado mexicano, lo que ocurriría a partir de esos años no puede, únicamente ser reducido un solo término, es decir, el proceso que presenciamos sigue abierto, el desenlace es incierto y en el centro de los conflictos, observamos transformaciones, contradicciones, crisis, inercias y procesos de disolución.

Durante muchos años el Estado mexicano funcionó mediante tres ejes fundamentales el corporativismo, el presidencialismo y el partido del aparato estatal. Se constituye como un entramado material y simbólico que garantizó la unidad de la comunidad política. Estuvo cimentado en el mito del nacionalismo revolucionario y en el pacto con las masas. El corporativismo se constituyó como una *forma de Estado* que garantizaba la lealtad de las masas a cambio del reconocimiento de los derechos de todos los subalternos, a pesar del carácter

mítico que esto representaba en la realidad limitaba el actuar tanto de los gobernantes como de los gobernados.

Lo que se construyó en palabras de Ilán Bizberg, fue un poder concretado en las instituciones que ejercía la violencia de manera estructural y que no se manifiesta como fuerza sino que más bien bloquea la comunicación y los espacios en los que se construyen las convicciones que luego otorgaran la legitimidad, este poder estructural el “poder de la ideología” se transforma a partir de los ochenta.

Pero no es sólo una ideología es el terreno de la hegemonía, es ese campo de contención (William Roseberry) en el que se desarrollan los conflictos y la correlación de fuerzas, es la manera en la que se organiza la dominación que a través de instituciones, rituales e imaginarios que dotan a todas las fuerzas del lenguaje para actuar dentro de ella. Este entramado material y simbólico es el que comienza a transformarse de manera sustantiva a partir de los años ochenta y que se expresa en una nueva manera distinta de entender y hacer la política.

Después de la nacionalización de la banca en el 82, ante el contexto de la reorganización mundial del capital impulsado por la globalización el país muestra su fragilidad del Estado ante el gran capital. Y que conlleva a asumir la necesidad de implementar el proyecto neoliberal: Desregular, privatizar, modernizar, racionalizar y achicar al Estado.

Este proyecto dividiría a la élite política al interior del aparato estatal: entre “tecnócratas liberales”, “los sectores burocráticos”, y los “neopopulistas”. El punto culminante es el año de 1988, cuando esta división se hace pública y trastoca las reglas de circulación del mando político, la sucesión presidencial, que fue un ritual esencial del régimen posrevolucionario.

Este conflicto real evidenciaba la existencia contrapuesta de dos proyectos que parecía incompatibles. Así lo expusieron Carlos Tello y Rolando Cordera en el libro *La disputa por la nación*, publicado desde 1981, se planteaba que el país enfrentaba una disyuntiva entre la Remodelación económica neoliberal o la

afirmación nacionalista. Esta disputa seguirá existiendo hasta la actualidad y la fractura de las élites permeará a la sociedad.

El triunfo de la implementación del proyecto neoliberal implicó la destrucción del andamiaje construido por el Estado posrevolucionario y al mismo tiempo se desplegó estratégicamente en la difusión de una nueva ideología, de nuevos valores y prácticas, es decir de un nuevo *ethos*, centrado en el culto al individualismo y el progreso y en donde la justicia social se deja en manos del Estado.

La recomposición del capital iniciada en los ochenta y profundizada en los noventa se ha desplegado en México en torno a cinco ejes<sup>120</sup>:

1. Reorganización de los procesos productivos y reorganización de las relaciones laborales, barriendo con cláusulas de los contratos colectivos, ampliando la capacidad de disposición patronal sobre el uso de la fuerza de trabajo (flexibilidad) y debilitando la contratación colectiva.
2. Modificación constitucional del régimen de propiedad agraria (art. 27), desaparición del ejido e incorporación de la tierra en la lógica del intercambio mercantil privado.
3. Transferencia de bienes y servicios de propiedad pública a manos privadas: tierras, recursos naturales, bosques, medios de comunicación y de transporte, banca y servicios financieros, petroquímica, minas, complejos siderúrgicos, sistema de seguridad social y fondos de pensión y de retiro de los trabajadores.
4. Restructuración del sistema educativo en todos sus niveles, socavando su carácter de patrimonio público y redefiniendo el sentido y los fines del trabajo intelectual y de la generación y transmisión del conocimiento.
5. Integración subordinada al proyecto hemisférico norteamericano.

Esto implicó la ruptura de no pocos mitos a veces materializados, que aparecen en la Constitución: artículos 27 y 123, así como un ataque al mito de la soberanía.

Implica la ruptura del pacto corporativista, de la transfiguración autoritaria clientelista de éste así como los mundos de la vida construidos alrededor de estos. El andamiaje construido en la posrevolución que llevo Huntington a mostrarlo como ejemplo de institucionalización tan exitosa, sobrevivió aún cancelado el ciclo

---

<sup>120</sup> Rousseau Isabelle, *Op.cit.*, p. 285.

de reformas sociales, y múltiples formas de resistencia expresadas en los movimientos de los cincuenta, en el 68, etc.

A pesar de que el Estado mexicano era en esencia contradictorio, las crisis seguían la lógica de desplazamiento de la racionalidad administrativa, a la legitimidad o viceversa, pero nunca contradiciendo o alterando las motivaciones identitarias que hicieran peligrar la integración sistémica.

La modificación de este entramado necesito de la aplicación de la violencia sobre la sociedad y además mostro la paradoja del neoliberalismo: se ocupa el “estado fuerte” y el “autoritarismo”, es decir se ocupa todo el poder despótico y el infraestructural para imponer el proyecto neoliberal, que consiste en sí mismo en dismantelar al Estado:

“Las reformas neoliberales necesitaban de una enorme aplicación de poder y violencia del Estado contra la sociedad; de un intervencionismo descomunal en la economía, a cargo de los que sostenían la defensa de una mínima regulación en los proceso económicos y de la corporativización de la clase burguesa con la tecnocracia, como en los mejores instantes del populismo de antaño. La impostura de enfrentar al estatismo les devolvía la paradoja de ser los más proestatistas, a fin de socavar a la sociedad y sus demandas desde el anfiteatro de la defensa permanente de esa contradicción en los “hechos neoliberales”: la defensa del Estado de derecho.”<sup>121</sup>

Después de lo antes expuesto podría pensarse que el proyecto neoliberal se construyó sobre la base de una serie de agravios a un orden social, y a pesar de signos de exasperación social, no se han presentado movimientos disruptivos que pongan en peligro a la integración sistémica. El único momento en el que esto pudo ocurrir fue en la coyuntura de 1994, después de la irrupción de la rebelión zapatista y los asesinatos políticos, sin embargo, la respuesta fue más conservadora, se optó por darle una oportunidad al proyecto neoliberal y asegurar la paz y la estabilidad.

---

<sup>121</sup> Fernández Reyes Otto, “Transición contextos y perfiles del cambio político mexicano”, *Polis: Investigación y análisis político y psicosocial*, UAM- Iztapalapa, año/vol. 00, número extraordinario, 2003, p. 189.

La tarea en el siguiente capítulo será indagar como la transformación del Estado, sus crisis rupturas y ambivalencias, se conjugan en los gobiernos de la alternancia, pero centrándonos en los cuatro pactos básicos primordiales: pacto con las élites, pacto corporativo y pacto social. Los cuáles no han desaparecido, pero si se han transformado, en medio de un proceso abierto, pero en el que se pueden observar tendencias, que den cuenta del funcionamiento del Estado.



## **CAPÍTULO III**

### **CRISIS ESTATAL Y FRACTURA INSTITUCIONAL**

#### **Introducción**

Ciertamente todas las sociedades o Estados se encuentra inmersos en continuos procesos de cambio, en distintas transiciones, algunos de esos procesos se dan en los tiempos largos de la historia, y en algunos casos los desenlaces se dan en los tiempos cortos precipitados por una aceleración de los procesos, lo que llamamos coyunturas. El caso del Estado en México no es la excepción, como mostramos en el capítulo anterior su formación estuvo atravesada por distintos momentos de conflicto, sin embargo la posrevolución implicó un proceso paulatino de estabilización que permitió caracterizarlo, ubicando una forma estatal y reproducción de la misma, muy específica.

A partir de los años ochenta encontramos una serie de cambios que de igual manera comienzan a perfilarse con un conjunto de características que apuntan a la construcción de una nueva forma estatal, con todo lo que implica entenderlo como una relación social eminente política (por política entendemos de manera generalizada la organización de la vida en común con otros, en todos sus niveles). Ya sea visto como resultado de un nuevo proyecto de las élites políticas, o como precipitado por un cambio cualitativo de la sociedad en su conjunto, en un contexto mundial, también cambiante; la prioridad de este capítulo es describir la singularidad de la crisis estatal, en comparación con épocas pasadas y en segundo lugar, esbozar la magnitud de la misma.

Antes de comenzar con el análisis empírico de diversos procesos, parece pertinente y necesario recordar el manejo que en la presente investigación se le da a conceptos como Estado, instituciones y crisis, lo cuál permitirá argumentar la justificación en la elección de los diversos procesos que se discuten para evidenciar la hipótesis central del capítulo: crisis estatal y fractura institucional.

En primer lugar entendemos por Estado una relación social, lo cual tiene diversas implicaciones y niveles de análisis:

- Retomando la terminología weberiana se comprende al Estado como una forma de dominación entre individuos dentro de un territorio establecido, sostenido mediante el legítimo monopolio de la violencia física. La legitimidad (fundada en motivos tradicionales, carismáticos o racionales) es lo que dota de autoridad los diversos mandatos haciendo posible la obediencia de los mismos. Como lo expone el mismo Weber “obediencia significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido del mandato se hubiera convertido, por sí mismo, en máxima de su conducta... sin tener en cuenta la propia opinión sobre el valor o desvalor del mandato como tal”.<sup>122</sup> Sin embargo Weber también advertirá que la legitimidad solo debe ser considerada como una probabilidad, será en el conflicto que se ponga a prueba; tanto dominadores como subordinados descubren los límites y los ponen a prueba en la experiencia cotidiana.
- El Estado es entonces un proceso conflictivo puesto que la dominación implica un control que es a la vez jurídico, político, moral y cultural. Este tipo de control presupone dos procesos simultáneos: uno totalizante y otro individualizante<sup>123</sup>. El primero refiere a la unificación de lo que en la realidad aparece como experiencias históricas particulares, de una sociedad que es desigual en términos de clase, género, etnicidad, ocupación, religión, etc. Mientras que el proceso de individualización supone el registro del individuo dentro de la comunidad política como ciudadano, contribuyente, votante, propietario, etc.
- Lo que construye el Estado es la hegemonía<sup>124</sup> entendida no como una ideología, sino como un marco común de referencia material y simbólico desde el cual se desarrollaran los conflictos; siendo también el referente

---

<sup>122</sup> Weber Max, *Op.cit*, p. 172.

<sup>123</sup> Philip Corrigan y Derek Sayer, *Op. cit.* 38-116.

<sup>124</sup> Vid. Roseberry William, *Op.cit*, pp. 218.

para actuar en el proceso relacional entre dominadores y; entre dominadores y subordinados.

- El Estado se configura también como un ente autónomo respecto a los poderes de la sociedad civil como pueden ser el ideológico, el político o el económico (se detenta como soberano tanto al interior como al exterior de un territorio delimitado); esta autonomía depende de la capacidad de centralización de recursos de todo tipo como el financiero, informativo (estadísticas y registros sobre la población), lingüístico, etc; lo cual conlleva a la centralización en la toma de decisiones.
- El poder autónomo del estado se expresa materialmente de dos maneras: despótica e infraestructural<sup>125</sup>. La primera remite a la capacidad de las élites para tomar decisiones sin someterlo a discusión de la sociedad civil; mientras que el poder infraestructural se refiere a la capacidad de los estados para penetrar en la vida cotidiana de la sociedad civil y poner en ejecución las decisiones políticas por todo el país a través de sus instituciones, aparatos y estructuras burocráticas.
- Una de las formas más visibles de la contrastación del entramado material estatal son las instituciones, en la presente investigación se concibe la “institución” como pautas de conducta reiteradas y estables. Como afirmaba Huntington siguiendo a algunos clásicos “la institucionalización es el proceso por el cual adquieren estabilidad las organizaciones y procedimientos”<sup>126</sup>. En este sentido las instituciones se construyen socialmente a través de procesos intersubjetivos, sin embargo no son reductibles a fenómenos individuales puesto que trascienden la vida física de los que participaron en su construcción, así como sus intereses individuales. En este sentido el Estado mismo es una institución por antonomasia que lo que busca es preservarse como comunidad política, trascendiendo la vida de los individuos que la conforman. Para poder

---

<sup>125</sup> Vid. Mann Michael, *Op.cit.* pp. 3-32.

<sup>126</sup> Huntington Samuel P. *Op. cit.*, p. 23.

observar a las instituciones en el presente capítulo se consideran diversos estudios que se inscriben dentro de las propuestas del neoinstitucionalismo<sup>127</sup>, aunque la presente investigación no se inscribe en esta corriente; esto debido a que el interés primordial es la contrastación de datos que dan cuenta de procesos económicos, políticos y sociales, que en su interrelación causal caracterizan el Estado como un todo, el cual no es reductible a la simple suma de las partes.

- Parece pertinente aclarar también lo que se entenderá en el presente capítulo al mencionar el concepto “sociedad civil”; tomamos el concepto operativo desarrollado por Cohen y Arato:

“Entendemos a la ‘sociedad civil’ como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por medio de formas de autoconstitución y automovilización. Se institucionaliza y generaliza mediante las leyes, y especialmente los derechos objetivos, que estabilizan la diferenciación social. Si bien las

---

<sup>127</sup> El neoinstitucionalismo sociológico surge como una respuesta crítica al “determinismo racionalista” por un lado, y al holismo determinista. El primero argumentaba que el curso de las acciones estaba prescrita por la lógica de lograr la mayor utilidad (utilitarismo), mientras que el holismo en contraparte postulaba que la elección racional era aplastada por la determinación cultural sobre el individuo a través de los procesos de socialización. Es por eso que el neoinstitucionalismo es un enfoque que busca conciliar ambas perspectivas dando como resultado la comprensión de la *institución* como “sistema de reglas que limitan o impulsan la acción del individuo. Es decir, (...) el actor sigue siendo considerado con intencionalidad de optimización, sin lograrlo plenamente ahora debido sobre todo a su información incompleta y a las limitaciones institucionales que aportan reglas de comportamiento que pueden no conducir a óptimos. La racionalidad es limitada principalmente por el contexto.”, en Enrique de la Garza Toledo, “Neoinstitucionalismo, ¿opción ante la elección racional? Una discusión entre la Economía y la Sociología”, en *Revista Mexicana de Sociología*, UNAM- Instituto de Investigaciones Sociales, México, núm. 1, enero-marzo 2005, p. 171-172.

En cuanto al estudio de los procesos políticos el neoinstitucionalismo pone atención en el Estado como productor de leyes, estabilidad e integración política pero deja de ubicarlo como el centro estructurador, paralelo a esto da mucho peso al desarrollo y cambio (presencia de nuevos entramados, nuevos actores, nuevos costos de transacción, nuevas reglas del juego, etc) en las instituciones como las ONG’s, los partidos políticos, los parlamentos, la cultura política. De acuerdo a éste enfoque la política es desplegada a partir de las instituciones que se clasifican primordialmente en torno a dos funciones: agregativa e integrativa. Desde la primera la política es equivalente al mercado en cuanto a espacio de intercambios, las instituciones tienen el papel de facilitarlos en medio del conflicto de intereses y las posibles negociaciones a partir de los recursos con los que cuentan los ciudadanos. La segunda función hace referencia en cambio a la creación de valores y aspiraciones colectivas que posibilitan la cohesión social. Vid. March James G. y Johan P. Olsen, *El redescubrimiento de las instituciones: La base Organizativa de la política*, FCE, México, 1997, p. 31.

dimensiones autocreativa e institucionalizada pueden existir por separado, a largo plazo se requiere tanto de la acción independiente como de la institucionalización para la reproducción de la sociedad”<sup>128</sup>

La sociedad civil queda definida así dentro del campo de la cultura con autonomía respecto de la esfera económica y la política; aparece como un espacio múltiple y contradictorio, eminentemente conflictivo a través del cual se deciden, resguardan o transforman, posicionamientos respecto a las otras esferas (el Estado propiamente y el mercado). La intención del presente capítulo no es un estudio sistemático de grupos específicos de la sociedad civil en México, reitero que lo que se observan son procesos que dan cuenta de el funcionamiento estatal en su conjunto, es decir ahí donde se dan desenlaces sistémicos, que por supuesto incluyen a la sociedad civil, por lo que en la argumentación aparecerán como un fenómeno constante.

Entender los distintos procesos que se conjugan en una crisis a nivel de Estado, implicaría entonces no reducir este concepto identificándolo únicamente con el gobierno, el aparato administrativo, o determinadas instituciones; es por eso que se retoman a los clásicos para comprenderlo como en la relación de mando y obediencia, como un marco jurídico, territorial y político, como una forma de organización de los “mundos de la vida”, una forma de cohesión social, y al mismo tiempo para decirlo con Roseberry “una campo de contención” en el que se desarrollan los conflictos, de tal manera que posibilita los cambios, pero que al mismo tiempo evita la ruptura de la vida social.

La construcción de una “nueva forma de estado”, entonces, tampoco puede remitir únicamente a una nueva organización económica, a una nueva juridicidad, a una nueva forma de régimen o a una nueva cultura política, es más bien la manera en la que todos estos factores se reestructuran, e interrelacionan. El análisis de estos procesos da para hacerse desde un enfoque micro, es decir, a nivel de individuos, familias, instituciones, territorios o lugares particulares en los que se observan nuevas socialidades y politicidades, o bien, desde una perspectiva más general a

---

<sup>128</sup> Cohen Jean y Arato Andrew, *Op.cit.*, pp. 8 y 9.

través de procesos económicos, políticos y sociales a gran escala, como es el interés del presente trabajo.

Evidentemente la construcción de una forma de dominación pertenece a los tiempos largos de la historia, que se consolidada en la medida en la que logra sobrepasar las diferentes coyunturas, en el caso de México a partir del año 2000 y hasta la actualidad lo que está en juego no es solo la “consolidación democrática” sino la posibilidad de reproducción de la comunidad estatal con una nueva naturaleza, evidentemente es un proceso que está abierto, sin embargo, es posible observar las contradicciones en las conjugaciones ideológicas, así como en las practicas que aparecen como limites a nivel económico, político y social que ponen en peligro la integración sistémica, que en el caso mexicano remiten a procesos y datos muy precisos que darán cuenta de la magnitud de la crisis estatal:

- 1) Límites al modelo neoliberal. Si entendemos el neoliberalismo como una forma de régimen económico, es decir, una forma de relación entre el Estado, la economía y la sociedad, en la que estas categorías se conjugan para aparecer como una entidad estructurada para competir a nivel mundial, los límites están dados por la incapacidad estatal como administrador eficiente, la incapacidad productiva (como satisfactor en la redistribución de bienes) y la ausencia de una estructuración competitiva del mercado ( a fin de evitar disparidades incontrolables).
- 2) Límites a ejercicio del mando político: El ejercicio de éste se entiende como la capacidad política para generar legitimidad y encuentra sus límites en el funcionamiento de las instituciones de intermediación de intereses.
- 3) Límites a la Cohesión Social: Los límites en este sentido aparecen cuando no hay procesos eficientes de socialización, que permitan desarrollar vínculos de solidaridad, así como identidades colectivas e individuales, que por un lado motivan las acciones de los sujetos y que por otro, permiten construir la percepción de confianza en la estructura social en general (es

decir en la manera en la que se organiza la vida social en cuanto a formas políticas, económicas, culturales, etc).

Es evidente que estas son tipificaciones para fines prácticos del análisis, sin embargo se complejizan en la medida en la que comprendemos que no existen de manera diferenciada en la realidad social y se afectan mutuamente.

### **3.1 Las tensiones entre la vieja y nueva forma estatal en México**

La coyunturas de los años 1988, 1994, 1997 y 2000, lo que evidenciaron fue que el “orden normativo” del sistema político mexicano había colapsado, entró en una crisis de reproducción en cuanto a la capacidad de convocatoria de masas y de clases. Dicho colapso se hizo evidente ante la disminución de las mediaciones corporativas populistas cual mecanismo de reproducción de legitimidad que fueron sustituidas por el exclusivo procedimiento de la cooptación autoritaria y de lealtades centradas principalmente en los aparatos y no en sectores subalternos<sup>129</sup>.

El problema que enfrenta la alternancia a nivel de régimen es que está no empata con la *forma de Estado*. Es útil recuperar la idea de que la “democracia” siempre fue parte de la parafernalia republicana de los gobiernos posrevolucionarios, sin embargo en la realidad operaba como una estado corporativo, que al llegar el año 2000 evidenciaba un proceso de descomposición, pero que aún no desaparecía por el simple hecho de que su lugar no era ocupado por una nueva forma de dominación coherente, regular y estable.

En términos meramente técnicos la transición se explicó como resultado en gran medida a un conjunto de reformas electorales que le siguieron a la de 1977, las de 1987, 1990, 1994, y 1996. Algunos de los cambio propiciados por estas reformas

---

<sup>129</sup> La eficacia en la implementación del modelo neoliberal necesitaba de un nuevo pacto entre las élites burguesas, la sociedad y el Estado, la estrategia estuvo focalizada al posible respaldo de las clases medias a partir del proceso de liberalización política y del discurso democrático; el corporativismo por supuesto no había desaparecido y se utilizó en forma de cooptación bajo la salvedad de que a diferencia de otras ocasiones no existía un compromiso ni siquiera discursivo (populista) con las clases, por lo que se soslayaba la posibilidad de dotar de legitimidad al corporativismo.

fueron: La creación del servicio profesional electoral para reemplazar la vieja estructura para lo cual se creó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del (Cofipe); la llamada ciudadanización del Instituto Federal Electoral a través del cambio en los criterios de la integración del Consejo General, la eliminación proporcional en la Comisión, el posterior remplazo de los consejeros magistrados por los consejeros ciudadanos y finalmente la salida definitiva del Secretario de Gobernación como autoridad electoral. Así mismo también entre 1990 y 1994 se creó un nuevo padrón electoral que contara en su diseño con gran cantidad de controles operativos y tecnológicos. Fue esto lo que permitió que en el año 2000 se diera la alternancia en el poder con plena legitimidad electoral<sup>130</sup>.

Por otro lado el cambio de partido en el poder también fue interpretado como la manifestación de tendencias de descontento social, algunas con tintes democratizadoras surgidas entre la clase media especialmente a partir del movimiento estudiantil del 68, y continuadas aunque de manera desarticulada o espontánea por diversos actores.

Sin embargo al profundizar el análisis en cuanto a la alternancia, este proceso puede tener otras lecturas que lo complejizan. A partir de los años ochenta se comenzaron a modificar los pactos sociales (políticas económicas, subsidios, política social, alianzas entre clases y estratos), el pacto corporativo (sindicatos, movimiento obrero y empresarios) el pacto con la élites (clase política y empresarios) y por supuesto el pacto intraélites, sobre todo en lo que respecta a la forma de reproducción del mando político.

En ese sentido las reformas electorales pretendían básicamente como en la terminología de la transición, establecer nuevas reglas para la competencia política, y para la obtención de los diversos puestos en el gobierno, es decir, una nueva forma de reproducción del mando político, que implicaría que la parafernalia democrática operara ahora como una realidad, al menos en términos electorales.

---

<sup>130</sup> Crf. Luján Ponce Noemí, "El papel de lo electoral en el proceso de cambio político en México 1988-2006", en Ávalos Tenorio Gerardo (Coor.), *El Estado mexicano. Historia estructura y actualidad de una forma política en transformación*, UAM- Xochimilco, México, 2009, p. 263-276.



Sin embargo las implicaciones de lo ocurrido en el 2000 van más allá de las transformaciones electorales y de cambios a nivel de régimen. Desde la politología es comprensible la necesidad de aislar, o delimitar los fenómenos para poder estudiarlos a profundidad, sin embargo el tema que aquí nos ocupa es la transformación del Estado y su capacidad o incapacidad de estabilización durante el mismo proceso del cambio.

Los cambios a nivel de régimen forzosamente están relacionados con las transformaciones del Estado en general, es decir, con la transformación en la forma de dominación, por lo que debemos considerar expandir el enfoque para interpretar la alternancia en el año 2000 en el caso de México.

Las llamadas transiciones democráticas coincidieron temporalmente con la crisis de un modelo de sociedad. (...) En rigor, esos procesos supusieron varios desafíos simultáneos: una transformación económica, una transformación política y una transformación social.<sup>131</sup>

Al igual que muchos otros países de América Latina (como Chile y Argentina) en México la lógica de las transformaciones siguieron un curso bien definido, primero el desmantelamiento de la versión particular del *Welfare State*, y posteriormente la “transición política” enmarcada en la democracia de tipo liberal que se centra en lo político electoral procedimental y postula que no pueden ser modificadas al mismo tiempo las estructuras políticas y, las económicas y sociales.

Estas transformaciones implicaron desmantelar toda una forma de dominación y como ya lo habíamos mencionado destruir algunos pactos y reconstruir otros. Al llegar al año 2000 lo que hacía falta era una estrategia de vinculación del Estado con las clases medias, así como la difusión de nuevos valores políticos que permitieran una nueva fuente de legitimidad, que pudiera estar desligada de la antigua forma corporativa; este objetivo podía ser logrado a partir de la difusión de la modernización y la racionalización por un lado y en términos políticos por la democracia electoral, que retoma la tesis contractualista del individuo y sus

---

<sup>131</sup> Portantiero Juan Carlos, “Estado y sociedad en el contexto de la transición democrática”, en *La construcción de las Instituciones para la Democracia en América Latina*, IFE, 1999, p. 14.

libertades como ciudadano, teniendo como correlato la privatización de lo político al reducirlo a “un voto, un ciudadano”.<sup>132</sup>

A nivel de régimen el análisis del primer gobierno de la alternancia, así como el gobierno sucesor panista, estuvo marcado en el contexto de los avances y retrocesos en cuanto a la consolidación democrática:

El presidencialismo que antes dominaba los poderes Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos estatales poco a poco ha perdido fuerza. Esto se hizo evidente en el periodo de Ernesto Zedillo, pues en las elecciones intermedias de 1997 el PRI perdió la mayoría parlamentaria. Las limitaciones al poder en el gobierno de Fox aumentaron al no contar tampoco con mayoría parlamentaria y verse rodeado de gobernadores que pertenecían a la oposición, lo que ocurre de igual manera en la presidencia de Felipe Calderón, imposibilitando el avance en las reformas constitucional, administrativa y política<sup>133</sup>, que englobaría las reformas fiscales<sup>134</sup>, laborales<sup>135</sup>, judiciales<sup>136</sup>, educativa, entre otras; estas

---

<sup>132</sup> Vid. Roux Rhina, (2001) *Op.cit*; Fernández Reyes Otto (2003), *Op.cit*; Durand Ponte Víctor Manuel, “La cultura política de los mexicanos en el régimen neoliberal”, en Rodríguez Araujo Octavio (Coor.), *México ¿un nuevo régimen político?*, Siglo XXI, México, 2009, pp. 121-149.

<sup>133</sup> Vid. Valencia Escamilla Laura, “Reforma del Estado para la gobernabilidad democrática en México”, en *Política y Cultura*, primavera 2008, núm 29, pp. 11-39

<sup>134</sup> Después de varios años de ingresos tributarios en declive, causados por bajo crecimiento, alta inflación y esfuerzos de recaudación inefectivos, en los años ochenta surge como imperativa la necesidad de adaptar los sistemas impositivos de los países de América Latina. Este imperativo es motivado para revertir dos tendencias: La primera restablecer el equilibrio macroeconómico evitando que los déficits fiscales fueran financiados monetariamente; segundo recuperar la capacidad de recaudación que se perdió al liberalizar el comercio, lo que había implicado el perder la capacidad de gravar el movimiento a través de fronteras de todo tipo de capital a la par de éstos propósitos esta pro supuesto la necesidad de mejorar la neutralidad y el tratamiento equitativo de los sectores, limitando incentivos y exenciones tributarias. En el caso de México los resultados son poco alentadores puesto que los ingresos tributarios han disminuido considerablemente: el promedio de recaudación respecto al porcentaje del PIB, sin considerar la seguridad social, entre los periodos 1985-89 y 2000- 2003 era de -2.5. Los “gastos tributarios” producto de exenciones supera por mucho al promedio de recaudación respecto del PIB, siendo de 6.3% en el 2005. Vid. Eduardo Lora “Tendencias y resultados en las Reformas Tributarias”, en Eduardo Lora (Ed.) *El Estado de las Reformas del Estado en América Latina*, BM-BID-Mayol, Colombia, 2007, p. 238-225.

<sup>135</sup> Sobre este punto Alejandro Álvarez explica que lo que ha existido es una “transición laboral inconclusa” puesto que no se han dado las modificaciones constitucionales que esperaban los empresarios (como en la fallida propuesta de la llamada “Ley Abascal” del 2003), pero al mismo tiempo las modificaciones que se han hecho han desembocado en devastación social y control sindical estratégico. Para los empresarios y el gobierno “la necesidad de una fuerza laboral flexible” es una construcción ideológica ante la competitividad a nivel internacional, por lo que se persigue a nivel de fábrica la reducción de costos, eliminación de tiempos inactivos, aumentos de

reformas contemplan la economía pero van más allá puesto que lo que persiguen es la gobernabilidad del país.

Si bien se pensaba que se había dejado atrás el presidencialismo exacerbado, quienes han adquirido mayor fuerza e independencia han sido los gobernadores, que además cuentan con una mayor fuerza económica, así como conquistas de espacios de poder al interior de sus partidos sin embargo:

Nada asegura, por desgracia, que vaya a implicar forzosamente una descentralización federativa que anunciara mejores prácticas democráticas, sino que ciertas tendencias caciquiles hacen temer que pudiera producirse en un momento dado una fragmentación de poderes regionales. En efecto en varios estados, estos poderes parecen reorientarse a una regresión de carácter autoritario, porque en ellos se observa los mismos poderes discrecionales, que antes tuvieron los presidentes priístas a nivel federal.<sup>137</sup>

Un claro ejemplo de lo anterior es la crisis en el estado de Oaxaca entre junio y noviembre de 2006 y la actitud del gobernador Ulises Ruiz.

Un aspecto que parecía positivo posterior a la alternancia es la desaparición del Partido de Estado, es decir, que dejó de existir una simbiosis entre el presidente y su partido, inclusive se podría afirmar que durante los gobiernos de Fox y

---

productividad, facilidad para la movilidad de trabajadores, para despido de los mismos, etc., lo que implicaría reformas importantes al artículo 123º Constitucional, las cuales no se han llevado a cabo por completo. Sin embargo los primeros resultados de las modificaciones realizadas han sido el déficit creciente en la creación de empleos (calificados o no), creciente informalización, precarización, desmantelamiento de contratos colectivos (PEMEX o Ferrocarrileros), caída de los salarios reales rezago en la seguridad social y una debilidad general de los sindicatos. Vid. Alejandro Álvarez Béjar, "La Transición Laboral Inconclusa de México", en Santos Ruesga Benito (Comp.), *Economía Política de las transiciones democráticas: México y España*, UNAM-Universidad Autónoma de Madrid, México, 2006, pp. 205- 222. Más tarde en el presente capítulo volveremos sobre este punto.

<sup>136</sup> De acuerdo a un estudio comparativo sobre varios países latinoamericanos, se detectó que los principales obstáculos en materia judicial en México son : el uso de sobornos para cualquier acción oficial; los jueces rara vez cambian las decisiones de los presidentes que los nombraron, la incorporación de la doctrina de "no justicialidad", es decir cuando las cortes se rehúsan a atender un caso porque se cree que es de naturaleza política y debería ser resuelto por el presidente y de manera general la falta de confianza pública en el sistema judicial. En el 2005 dentro de un rango de 2 puntos como promedio de los países desarrollados en cuanto a Imperio de la ley y control de la corrupción, México obtuvo un promedio de -0.25, al mismo tiempo los resultados del Latinobarómetro reportaron que el 81% de los encuestados tenían "baja confianza" en el sistema judicial. Vid. Sousa Mariana "Breve panorama de la reforma judicial en América Latina: objetivos, desafíos y resultados" en Eduardo Lora, *Op. cit.*, pp. 110-113.

<sup>137</sup> Revueltas Andrea, "Antecedentes históricos de la crisis política actual", en Gerardo Aválos Tenorio *Op.cit.*, p. 226.

Calderón han existido momentos de tensión en las relaciones de éstos con sus partidos.

En cuanto a la clase política los saldos parecen más negativos, después de las elecciones del 2006 marcadas por la sospecha, el gobierno de Felipe Calderón tenía como principal reto convertir la legalidad de su cargo en legitimidad facilitando la gobernabilidad; para algunos autores la estrategia para lograrlo implicó evidenciar la continuidad en las prácticas políticas heredadas del priísmo:

Pero si ha logrado eso, qué es lo que Calderón ha ofrecido a cambio: ¿Impunidad para Ulises Ruiz, pacífica convivencia con Mario Marín, complacencia ante los manejos discrecionales de Elba Esther, tolerancia a los escándalos del ex presidente Fox y su familia política, permanencia del statu quo que privilegia a los grandes monopolios? En otras palabras, ¿dejar de lado su historia personal de panista contra ese sistema que era representado, precisamente, por muchos de los que hoy son sus aliados?<sup>138</sup>

Lo que evidencian este tipo de análisis y diagnósticos no es que existan dos regímenes sobrepuestos, o que exista un régimen con tendencia democrática con un sistema político con inercia autoritaria; lo que estaría mostrando más bien es que las transformaciones políticas, sociales y económicas inevitablemente terminan encontrándose, y afectándose, por lo que los cambios de gran alcance remiten al nivel de la conformación de todo un modelo de dominación, de una forma estatal, y no solo a nivel de régimen, provocando que aparezcan, conflictos, resistencias, inercias, imposiciones, etc.

La construcción social de una nueva formación estatal, se da en medio de la conjugación de procesos conflictivos que conllevan la institucionalización de nuevas formas de hacer política, de ejercer el mando, de crear consenso, legitimación, de organizar la reproducción material y simbólica de la comunidad política. Más allá de las posibilidades o no, de la consolidación democrática, es importante discutir la capacidad del Estado para mantener la integración sistémica durante este proceso de cambio.

---

<sup>138</sup> Camarena Salvador, "Calderón un año de gobierno" Varios Autores, en *Letras Libres*, México, 2007. p. 2.

Las transformaciones operadas en América Latina a partir de los años ochenta, conducían a modelos para crear “Estados mínimos” o “Estados nacionales de competencia” con regímenes democráticos liberales. Cuatro son los componentes básicos de las reformas del Estado bajo estas condiciones:

En primer lugar la delimitación de sus funciones, a través de la privatización, de la terciarización y de la transferencia de servicios hacia el sector público no estatal. En segundo lugar, una redefinición de sus funciones para que pase de ser un instrumento de protección a un instrumento de promoción de la capacidad de competencia del país. En tercer lugar un aumento de gobernancia a través del equilibrio fiscal (para darle autonomía financiera) y de una reforma administrativa gerencial para optimizar su capacidad de gestión y regulación. Y por último, el aumento de gobernabilidad, a través de instituciones políticas que favorezcan una mejor intermediación de intereses.<sup>139</sup>

Es evidente la pérdida de autonomía de los Estados- nación en el proceso de inserción a la globalización de tipo neoliberal, como lo afirma Norbert Lechner.<sup>140</sup>

Ya que lo que está en juego es la concepción misma del orden entendido como auto regulado y auto organizado, sin embargo, el mercado por sí solo no puede crear la normatividad vinculante que de sentido a la vida en sociedad. Aunque parezca paradójico el Estado sigue siendo uno de los pilares esenciales para esta forma de funcionamiento del capitalismo, al constituirse en un sistema total con capacidad para ser el garante de la reproducción capitalista, efectuar la mediación política y, al mismo tiempo, agente activo en la construcción de los mercados que son siempre creados política e institucionalmente.

En los siguientes apartados lo que pretendo es mostrar como a partir de ciertos procesos se observa la magnitud y naturaleza de la actual crisis estatal mexicana, así como los límites que enfrenta la transformación y reproducción de la nueva forma estatal.

---

<sup>139</sup> Portantiero Juan Carlos, *Op.cit*, p. 21.

<sup>140</sup> Lechner Norbert, “La reforma del Estado entre modernización y democratización” en Massimo L. Salvadori, Norbert Lechner, Marcelo Cavarozzi (et. al.), *Un Estado para la Democracia*, Friederich Ebert Stiftung- Miguel Ángel Porrúa, 1988. pp. 32-33.

### 3.2 Límites del nuevo régimen económico

Tomamos la definición de régimen económico propuesta por Rolando Cordera, en la que se entiende que:

“Se alude sobre todo a una forma de hacer las cosas”. (...) Se pretende resumir el vocablo no tanto la noción de “modelo”, sino una forma más o menos específica de relación entre la economía y la política y entre el Estado y el mercado, que se reproduce en el tiempo gracias a la política y el derecho pero que puede sucumbir ante los cambios del mundo, o del entorno internacional en que se da dicha reproducción, o ante cambios más o menos profundos o radicales en la propia política y las relaciones de fuerza que marcan los límites y modulan férreamente las decisiones del poder y del Estado en una determinada coyuntura.<sup>141</sup>

Precisamente de lo que se trata es de mostrar cómo esta nueva relación entre la economía y la política en la arena estatal, presenta una singular crisis y por lo tanto se presenta como un límite para la consolidación de este nuevo régimen económico.

Desde los años setenta el modelo de Desarrollo estabilizador mostraba signos de fragilidad que se agudizarían en los años ochenta, el estado aparecía como una “máquina prebendalista”<sup>142</sup> colonizado por diversos intereses privados, se precipitaron crisis fiscales dando como resultado estancamiento, inflación o hiperinflación; en el caso de México se evidenciaba además que la reproducción ampliada del aparato productivo dependía en exceso de las ventas de petróleo y el endeudamiento lo que lo hacía aún más frágil. Por lo que en consonancia con el Consenso de Washington se iniciaron las políticas de ajuste estructural y el intento de consolidar un Estado mínimo.

La centralización de recursos financieros (entre otros) es una cualidad indispensable de cualquier Estado (como lo mencionan diversos autores entre ellos Mann, Norbert Elias, Bourdieu) que le brindarán autonomía y capacidad de maniobra. En el caso de México la crisis del Estado interventor-corporativo-

---

<sup>141</sup> Cordera Campos Rolando y Camilo Flores Ángeles, “De crisis a crisis: del cambio de régimen económico al derrumbe global (trayectoria y contexto), en Octavio Rodríguez Araujo, *Op.cit.*, p. 63.

<sup>142</sup> Portantiero Juan Carlos, *Op.cit.*, p. 19.

autoritario entrará en un proceso de descomposición de la racionalidad ante el no crecimiento económico, esto debido a que utilizando el esquema de análisis habermasiano sobre la crisis, comprendemos que el proceso normal de funcionamiento del Estado social implicaba que a nivel de la racionalidad económica la administración realice tareas específicas en cuanto al proceso de acumulación y valorización y al mismo tiempo de distribución (política social, seguridad, infraestructura, etc). La efectividad de la administración se convierte así en un insumo para la legitimidad, que se traduce en la lealtad de masas. De acuerdo a la nueva visión del Estado mínimo, se opta por realizar únicamente la primera de las tareas, es decir, la del proceso de acumulación, dejando en manos del mercado la posible distribución, por lo que la capacidad de legitimación se transferirá a nuevos mecanismos (mismos que trataremos más adelante).

Los logros o límites de este nuevo régimen económico van a estar dados por la eficiencia en los rendimientos de la administración, y la capacidad para eliminar la adiposidad del Estado, y su intervención en el mercado, de tal manera que se recupere el crecimiento, y la productividad.

### **3.2.1. El régimen económico en los gobiernos de la alternancia (2000-2011)**

A partir de 1982 y hasta la actualidad los ciclos de la economía mexicana han presentado con mayor frecuencia recesiones o depresiones que como tendencia a largo plazo dan como resultado un menor ritmo de crecimiento: entre 1940-1981 la tasa del crecimiento del PIB fue de 6% anual, en cambio entre 1982-2006 la tasa de crecimiento anual promedio fue de tan solo 3.3%.

El primer momento de transformación crítico de la racionalidad económica estatal ante el no crecimiento fue la instauración del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) creado en 1990 ante posibles crisis financieras que propiciarán la insolvencia de los Bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos; el Fobaproa serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. En 1999 se crearía el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) que sería la continuación del Fobaproa. A partir del rescate bancario se modificaría la correlación de fuerzas y

la hegemonía del Estado favoreciendo a la burguesía, al desplazar como eje financiero la salvación de “el gran capital”. Esto se ve claramente en los últimos gobiernos panistas, al revisar el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público<sup>143</sup>:

**Figura 20. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP)**  
*Metodología pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento*  
**(Millones de pesos)**

	2002		2010 p/	
	Saldo	% del PIB	Saldo	% del PIB
<b>TOTAL SHRFSP</b>	<b>2,473,944.3</b>	<b>34.6</b>	<b>4,813,362.2</b>	<b>34.7</b>
<b>Internos</b>	<b>1,581,218.4</b>	<b>22.1</b>	<b>3,572,105.2</b>	<b>25.7</b>
Presupuestario	759,513.3	10.6	2,742,641.6	19.8
No Presupuestario	821,705.1	11.5	829,463.6	6.0
Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento <sup>1/</sup>	-80,335.4	-1.1	-173,306.7	-1.2
FARAC	139,948.4	2.0	140,295.5	1.0
Pasivos del IPAB	709,336.0	9.9	773,615.2	5.6
PIDIREGAS	0.0	0.0	39,703.9	0.3
Programa de Apoyo a Deudores	52,756.1	0.7	49,155.7	0.4
<b>Externos</b>	<b>892,726.0</b>	<b>12.5</b>	<b>1,241,257.0</b>	<b>8.9</b>
Presupuestario	662,101.2	9.3	1,198,004.7	8.6
No Presupuestario	230,624.7	3.2	43,252.3	0.3
Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento <sup>1/</sup>	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	230,624.7	3.2	43,252.3	0.3

<sup>1/</sup> Corresponde al patrimonio neto de los bancos de desarrollo y fondos de fomento con signo negativo por tratarse de un activo.

Lo relevante aquí, es que, las "partidas presupuestales" aparecen como porcentaje del PIB. Siendo lo sustantivo la comparación entre el período-Fox y el período-Calderón en los rubros centrales: a) Deuda neta total; b) pasivos del IPAB; c) PIDIREGAS (Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto); d) Programa de apoyos a deudores (banqueros) y, e) saldo histórico de los requerimientos financieros del Sector Público internos y externos. El involucramiento presupuestal orientado hacia el Sector Privado-Empresarial-Bancario es evidente, así como la fractura de la autonomía financiera del Estado.

Lo que aparece ahora es un nuevo modelo de acumulación: maquilador-exportador petrolero y de terciarización del mercado laboral.

<sup>143</sup> Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), *Balance Fiscal en México*, abril 2011, p. 26.



Durante el sexenio foxista podemos hablar de dos períodos estancamiento con inflación (2001-2003) y una recuperación (2004-2006):

Esto revela dos aspectos importantes, primero es la convergencia con el ciclo norteamericano, ya que la recesión norteamericana afecta sensiblemente a la economía mexicana induciéndola a la par de la recesión, el segundo aspecto es la pérdida de capacidad de crecimiento interna por los efectos de la desintegración económica que el nuevo modelo ha generado (el desplazamiento de la inversión pública, la conversión de la inversión privada de productiva a rentista y la concentración de la Inversión Extranjera Directa (IED) en las manufacturas de exportación). [...] En el caso del sexenio actual parece perfilarse una depresión un tanto prolongada que se inicia en 2007, se continúa en 2008 y se profundiza en 2009, para proyectarse a 2010.<sup>144</sup>

A partir de 1994 en todos los Programas Nacionales de Desarrollo subsiguientes la industria ha pasado a un segundo plano, ya que entre la nueva élite política parece prevalecer la convicción de que el país debe crecer, a partir del sector servicios, de ahí la apertura financiera y comercial. Así lo demuestra el crecimiento de la economía basado en aumentos de productividad (sin aumentar el empleo) y en las exportaciones de muy pocas empresas de alta tecnología y reducida mano de obra. Esta tendencia se conforma al evaluar el crecimiento del PIB por sectores en los últimos años: en términos de millones de pesos corrientes las actividades terciarias representan 7, 965, 561, mientras que el sector secundario muestra una participación en el PIB de 4, 306, 283; mientras que el sector primario sólo tiene una participación del 490, 892<sup>145</sup>.

Igualmente la composición de la Población Económicamente Activa (PEA), se ha modificado, siendo el sector terciario el que agrupa la mayor cantidad: En el año 1990 el sector primario tenía el 22.64% de la PEA, el secundario el 27.8% y el terciario 46.13%; en cambio hasta el primer trimestre del 2011, en el sector primario solo está el 13.2% de la PEA, en el secundario el 24.0 y en el terciario

---

<sup>144</sup> García Castro Beatriz, Edmar Salinas Callejas, Leticia Velázquez García, Zorayda Carranco Gallardo, Andrés Godínez Enciso, "Lo Cotidiano del sector industrial en México: 25 años de cambio estructural", en *El Cotidiano*, México, UAM-A, julio- agosto 2009, año 24, p. 79.

<sup>145</sup> Datos obtenidos en la página oficial del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

aumentó al 62.2%. Si analizamos en conjunto el PIB y la PEA, notamos que efectivamente ha existido un cambio en el área de acumulación en su conjunto.

La PEA ha sufrido también una creciente subordinación al capital financiero y las tasas de interés allí localizadas: el costo de servicios de intermediación de los 13 Bancos que concentran el 90% del mercado de tarjetas de crédito cobraron en 2007 un promedio de 57.3%, mientras que en 2008 las cifras del Costo Anual Total (CAT) oscilaron entre 47 y 113%<sup>146</sup>.

El problema aquí es por un lado que el cambio de modelo no se traduce en crecimiento, pero sobre todo que este nuevo modelo que parece meramente económico tiene su correlato político y social que implica el desplazamiento de la sociedad civil, su alejamiento de las toma importante de decisiones y, por otro lado, un desinterés por parte de la élite política y financiera para hacer pactos que permitan reconocer derechos subalternos -sobre esta cuestión regresaremos más adelante.

En términos de la efectividad del nuevo régimen económico se puede hablar de un incremento y diversificación del comercio de exportaciones no petroleras, que fueron predominantemente industriales pero que sin embargo, se originaron en gran medida en la industria maquiladora pero sin integración a nivel nacional (concentrada especialmente en el norte del país).

A esto se agrega el problema de la hiperconcentración en el mercado norteamericano con predominio de la maquila, que en 2006 representó 44.7% de las exportaciones totales; siendo que para 2008 el 80% de las exportaciones fueron vendidas a Estados Unidos.<sup>147</sup> Esta hiperconcentración de exportaciones es un problema en la medida en la que la economía norteamericana está impactada por el ciclo de crisis global, lo que la ha llevado a la recesión y a una posible depresión al menos hasta el año 2013, haciendo que la economía mexicana

---

<sup>146</sup> Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, *Evolución de las tasas de interés activas, pasivas y su entorno internacional*, México, marzo 2009. p. 4 y 5.

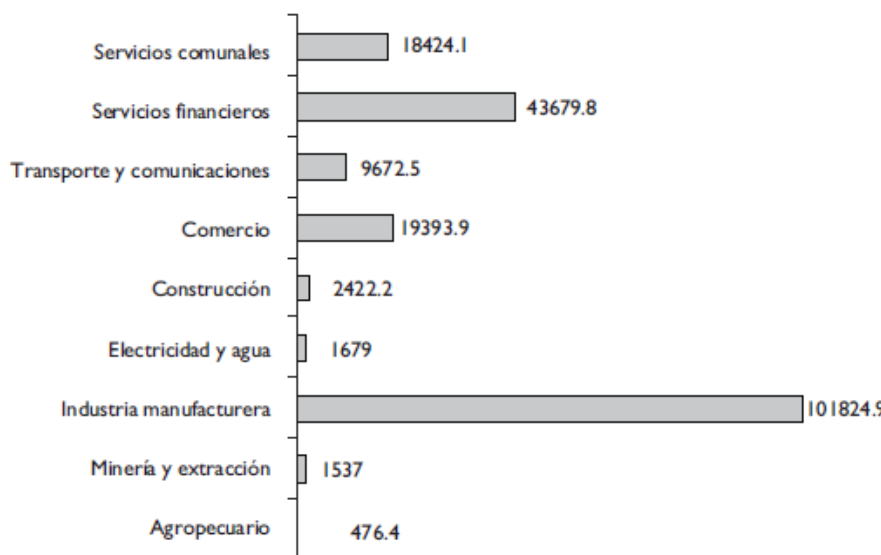
<sup>147</sup> Rolando Cordera, en Octavio Rodríguez Araujo, *Op.cit.*, pp. 79 y 83.

subordinada al mercado de E.U a partir del TLCAN, sea impactada adversamente<sup>148</sup>.

La vulnerabilidad macroeconómica de México se evidencia en tanto que las políticas fiscales de México han reducido la inflación, pero también han frenado el crecimiento económico nacional. La política monetaria restrictiva ha llevado también a una moneda que está persistentemente sobrevaluada, a largo plazo, lo vuelve vulnerable ante las crisis financieras. La dependencia del petróleo sigue siendo una constante y lo que es preocupante es que el precio de éste en los últimos años ha ayudado a ocultar un déficit comercial que sin contar los ingresos del petróleo solo sería del 1% del PIB entre los años 1997-2007<sup>149</sup>.

De la misma manera la apertura a la inversión privada del exterior reporta más costos que beneficios:

**Gráfica I**  
**IED por sector 1994-2006 (millones de dólares)**

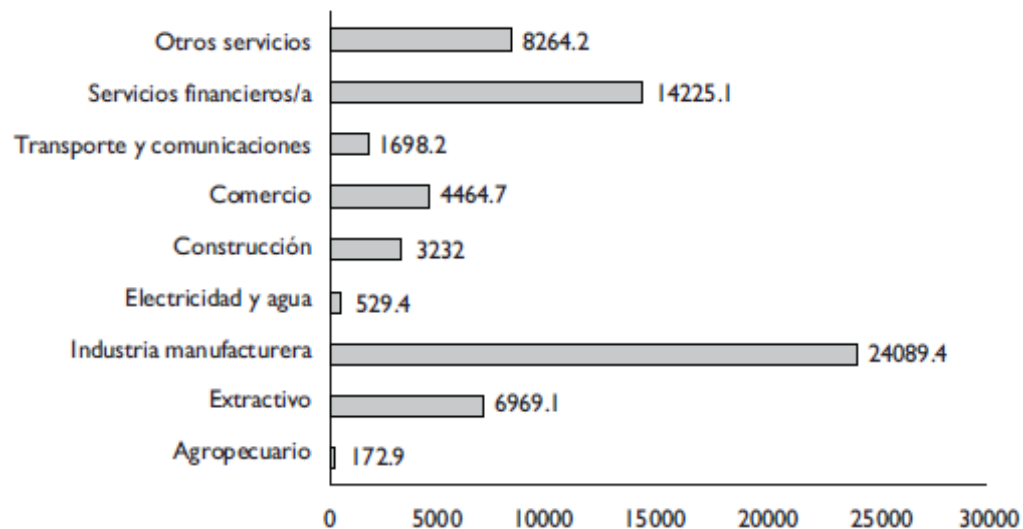


Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera, varios años. Elaboración propia.

<sup>148</sup> Vid. Zepeda Eduardo, Timothy A. Wise, and Kevin P. Gallagher, *Rethinking Trade Policy for Development: Lessons From Mexico Under NAFTA*, Carnegie Endowment for International Peace-Policy Outlook, diciembre 2009.

<sup>149</sup> *Ibidem*, p. 9.

**Gráfica 2**  
**IED por sector 2007-2009 (millones de dólares)**



Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Reporteador de los flujos de inversión extranjera directa en México.

Como apreciamos en la Gráfica 1 y 2<sup>150</sup>, la mayoría de la IED se encuentra en el sector manufacturero y en el de servicios, muy por encima por ejemplo del sector agropecuario; también observamos un incremento de la inversión en el sector minero; si pensamos en que la manera en que el origen y destino de las inversiones y capitales no es un acto ingenuo desprovisto de sentido, podríamos inferir -sin hacer el afán por reconstruir la escena laboral- que “políticas de Estado está detrás del repunte en la IED en minería y extracción, al tiempo del desaliento a la acción sindical<sup>151</sup>: mineros enterrados, no responsabilidad de los dueños frente al accidente, conflicto en Cananea, resoluciones de jueces que favorecen los intereses corporativos empresariales y afectan el interés colectivo obrero, etc.

Además la IED se destina en las regiones más fuertes económicamente hablando, provocando una profundización de las diferencias entre entidades. Además si se analiza la IED en términos de vínculos asociativos con el capital local, tenemos

<sup>150</sup> Gráficas tomadas de: Espinosa Yáñez Alejandro, “La globalización y las alianzas estratégicas. Notas sobre la acción empresarial y del Estado”, en *El Cotidiano*, México, UAM-A, marzo- abril 2011, núm. 166, p. 7.

<sup>151</sup> *Ibid*, p. 7 y 8.

como resultado que en la mayoría de los casos se tratan de alianzas para la comercialización en nuevos mercados, dejando muy por debajo la inversión en tecnología. Esta tendencia continúa durante el presente sexenio<sup>152</sup>

### **Inversión Extranjera Directa Realizada por Sector Económico,<sup>1</sup>**

**2009 - 2010**

(millones de dólares)

Concepto	2009	Participación %	2010	Participación %
<b>Total</b>	<b>11,417.5</b>	<b>100.0</b>	<b>17,725.9</b>	<b>100.0</b>
Industria Manufacturera	4,831.1	42.3	10,585.4	59.7
Comercio	1,186.3	10.4	2,513.8	14.2
Servicios Financieros <sup>2/</sup>	2,584.9	22.6	2,451.6	13.8
Otros Servicios <sup>3/</sup>	1,839.7	16.1	1,346.7	7.6
Extractivo	456.6	4.0	587.0	3.3
Construcción	455.1	4.0	143.4	0.8
Transporte y Comunicaciones	50.8	0.4	88.6	0.5
Agropecuario	7.4	0.1	7.4	0.0
Electricidad y Agua	5.6	0.0	2.0	0.0

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las partes debido al redondeo de cifras.

1/ Incluye la IED realizada y notificada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras al 31 de diciembre de cada año. No incluye estimaciones.

2/ Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles.

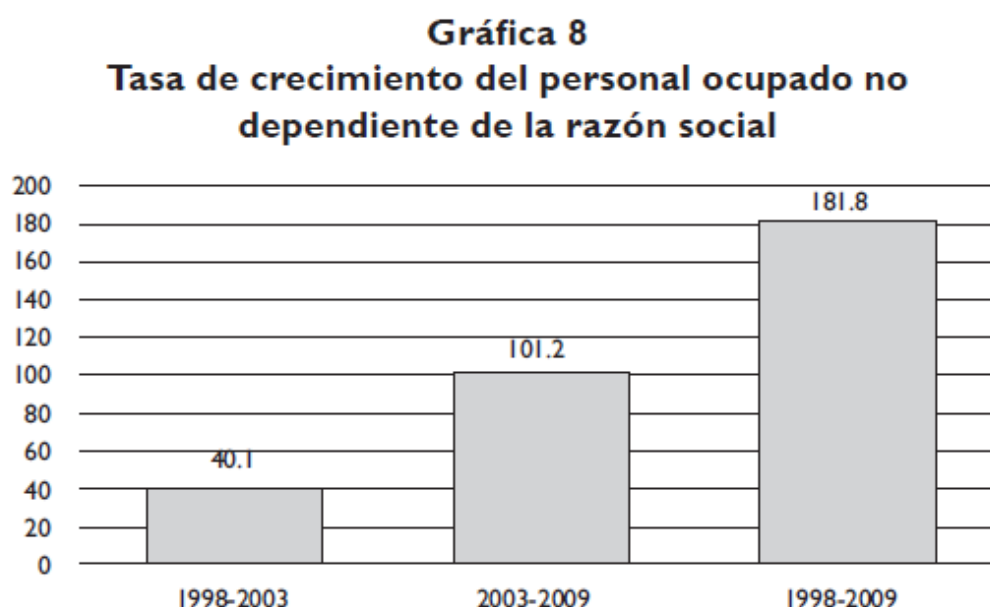
3/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales.

Fuente: Elaborado por el CEFPE con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.

Y concluye la confirmación de esta tendencia de la IED por sector con los datos presentados por la Secretaría de Economía respecto del año 2011 en el que el 44.1% correspondió a manufactura, 18.0% en servicios financieros y seguros, 9.5% en comercio, 6.4% en construcción, 5.7% en medios masivos, 4.3% en minería y el 12% restante se canalizó a múltiples sectores de la economía nacional.

<sup>152</sup> Gráfica tomada de: "Comentarios al informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, enero-diciembre 2010" Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, p. 7.

Como fenómeno paralelo está el crecimiento de la subcontratación (gráfica)<sup>153</sup>, es decir, en búsqueda de una mayor capacidad para competir a nivel mundial aumentando la productividad y de esa manera encauzar la acumulación de los grandes capitales, de lo que no hay evidencia es, de que esa mayor productividad se traduzca en mejores salarios. Entre los años 2003 y 2009 de acuerdo a las cifras presentadas por el INEGI se calcula que el fenómeno de la subcontratación creció en un 95.2 % en promedio.



En resumen este nuevo modelo de acumulación no ha resultado del todo exitoso, al menos no en términos de estabilidad económica y crecimiento. Existe una incapacidad en los mecanismos que permitan reincorporar a los trabajadores despedidos, o distribuir beneficios derivados del incremento en la productividad; existe también una ausencia de inversión y promoción en el desarrollo tecnológico, así como una incapacidad para permear y vincular a todos los sectores.

Efectivamente se consolidó la reducción del papel estatal en la economía pero la inversión privada no logró sustituir a la pública de manera adecuada, ya que se dirigió a la compra de activos existentes y a la consolidación de mercados

<sup>153</sup> Gráfica obtenida en *Ibid*, p. 12.

oligopólicos, dando como resultado déficits de infraestructura física y social. Las privatizaciones se llevaron a cabo pero la banca se sigue nutriendo de la deuda pública, del crédito al consumo, y de las altas comisiones y tasas de interés que son fuente de nuevos desequilibrios.<sup>154</sup>

Son muchos los nuevos límites que enfrenta este nuevo modelo económico, especialmente si es comprendido un nuevo “régimen económico” por las repercusiones a nivel político y social que trataremos más adelante:

La fuente de estos nuevos problemas debe buscarse en parte en la menor intervención del Estado, en campos tales como la inversión pública en infraestructura. Sin embargo, debido al cambio ideológico, se está prestando muy poca atención a estos problemas y a lo que podría hacer la política del gobierno al respecto, mientras que a la vez se espera demasiado de la mayor eficiencia que traerían consigo las reformas del mercado.<sup>155</sup>

### **3.3. Los límites de la legitimidad**

Como mencionamos en un principio las transformaciones políticas, sociales y económicas si no pueden considerarse como parte de un mismo proyecto, o no se les puede colocar a una como efecto directo de la otra, al menos si podemos afirmar que inevitablemente tendieron a encontrarse, especialmente en los últimos diez años con cambios tan profundos en todos los niveles que nos hacen constatar que asistimos a la conformación de una nueva naturaleza estatal, en su conjunto.

El año 2000 quedó grabado como un suceso de gran trascendencia en cuanto a las transformaciones políticas, ya que con la alternancia en el gobierno, se ponía en juego la capacidad para crear legitimidad a través de “elecciones limpias” de manera real y no como simple simulación. Sin duda la cuestión electoral no es la única forma de construir legitimidad, sin embargo, pretendía ser un elemento nuevo en cuanto a la forma de dominación, que por demás ya no se encontraba

---

<sup>154</sup> Vid. Cordera Rolando, *Op.cit.*, pp. 79-81.

<sup>155</sup> Ros Jaime y Juan Carlos Moreno- Brid, “México las reformas del mercado desde una perspectiva histórica, *Revista de la CEPAL*, núm. 84, diciembre de 2004, CEPAL, Chile, p. 56, en Rolando Cordera Campos, *Op.cit.*, p. 85.

funcionando de manera estable y que comenzó a ser modificada drásticamente desde los años ochenta.

Recordemos que el Estado posrevolucionario estuvo organizado corporativamente, en un principio como una forma estatal incluyente que reconocía los derechos de los subalternos, haciéndolo parte del “bien común” público (Cardenismo); posteriormente con Avila Camacho, el corporativismo perdió su carácter incluyente y se volvió una forma de control autoritaria del partido, pero no se reducía a esto únicamente. Permitió -como lo dice Enrique de la Garza- la conversión de relaciones industriales en relaciones político estatales, que hacían aparecer al Estado como una arena de negociación y conflicto, no entre individuos, sino entre grupos históricamente específicos como son la clase obrera, los empresarios, la burocracia y la élite política, que permitía la estabilidad de una forma de dominación y la participación (no igualitaria) de los sectores en las tomas de decisión. La lealtad de masas estaba mediada sí por procesos de cooptación, sin embargo existía un componente de reproducción de legitimidad otorgado por una derrama de beneficios para los trabajadores, aunque escalonada en al mayoría de los casos; fortalecida además por el gasto social del Estado, que hacía pensar que la redistribución era un compromiso por parte del Estado.

El desmantelamiento del corporativismo entendido entonces como una relación política, tiende a fragmentarse con la tendencia del neocorporativismo:

“al transformarse el funcionamiento del Estado y de la economía con el neoliberalismo la influencia sindical en la política económica es mínima. La neoliberalización del Estado implicó la deslegitimación de la articulación entre políticas estatales de crecimiento y de bienestar social. La reorientación del gasto social hacia la extrema pobreza ha limitado también la capacidad y la legitimidad sindical de buscar mejoras en la seguridad social tradicional o en su gestión. El corporativismo en los procesos de trabajo ha sido cuestionado por empresarios modernizantes al verlo como contradictorio con el incremento en la productividad. En tal contexto ha surgido una nueva corriente corporativa -la de la FESEBES- que pretende combinar corporativismo de Estado con interés por la productividad. Finalmente, la discrecionalidad con la que el Estado ha manejado el sistema de relaciones industriales se ha vuelto en contra de los sindicatos; la Secretaría del Trabajo



ha favorecido al capital en los conflictos, al propiciar flexibilizaciones en los contratos colectivos de trabajo o recortes de personal.”<sup>156</sup>

En resumen el corporativismo sigue siendo efectivo como maquinaria electoral, pero basada únicamente en la cooptación, y lo que ha perdido es la capacidad por esta vía de lograr la legitimación, puesto que ya no existe un compromiso con las clases subalternas en conjunto. Como un fenómeno paralelo a este proceso observamos la autonomización de las antiguas burocracias – como la magisterial y la petrolera- quienes negocian y condicionan su apoyo ofertándolo a diferentes partidos políticos durante los procesos electorales.

La nueva fuente de legitimidad de tipo democrático, al menos electoralmente hablando tuvo como uno de los actores centrales al IFE. Este si en 1990 surgió como respuesta al fraude electoral de 1988, que buscaba construir un espacio que fuera al mismo tiempo legal y eficiente para organizar los procesos electorales, prefigurándose hacia 1996 se reveló la necesidad de convertirlo en un órgano autónomo del Estado mexicano, dirigido por ciudadanos independientes, que al mismo tiempo pudiera ensanchar la educación y la cultura cívica, lo que venía a redundar en la consolidación de éste mismo tipo de legitimidad. Los límites en cuanto a la capacidad de reproducción de este tipo de legitimidad se encuentran pues en la actuación de éste instituto y en la percepción que los individuos tengan de éste, así como en el desempeño de los partidos políticos y la manera en la que se regula el juego político que pretende ser de tipo democrático. Insisto, no es el único tipo de legitimidad, pero ante los procesos de cambio que acontecen este puede ser un factor que permita morigerar su impacto y ayudar a mantener la cohesión de la comunidad política.

---

<sup>156</sup> De la Garza Toledo Enrique (1994), *Op.cit.*, p. 25.

### 3.3.1 Crisis de los espacios de legitimidad

Después de los primeros años del proceso de ciudadanización del IFE este se convirtió en la institución pública que mayor confianza generaba entre los mexicanos. En el 2002, 8 de cada 10 mexicanos declaraban su confianza en el IFE, al que veían de verdad como un espacio de ciudadanos; en una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, en donde se le tenía que otorgar una calificación a diversas instituciones políticas el IFE obtuvo un promedio de 8, mientras que la Presidencia de La República obtuvo un 7.4 y la Cámara de Diputados 5.6<sup>157</sup>.

Sin embargo el modelo de un IFE independiente y autónomo comenzó a ponerse en tela de juicio a partir del 2003, ante la renovación de su Consejo General, el cual se convertiría en una disputa entre los partidos, con la consiguiente ruptura en las negociaciones, por lo que la designación de Consejeros la realizaron PRI y PAN en contra de las opiniones del PRD, que parecía anticipar el conflicto político de 2006.

En el 2007 tendría que llegar la tercera generación de reformas electorales, pero qué tenía como antecedentes: Excesivos gastos en las campañas políticas electorales, una inversión de más de mil millones de pesos en las campañas electorales de la última década, de los cuales el 60% fue destinado a la compra de espacios en radio y televisión. En el 2006, se ocuparon 2 mil millones para el mismo propósito, aunado esto en ese mismo año hubo un aproximado de 281 mil spots publicados con dinero cuyo origen no fue aclarado. Y por último, desde la legislación electoral de 1996 existían restricciones respecto a la propaganda política que pudiera incurrir en difamaciones o que denigrara a las instituciones, sin embargo en el 2006 tal restricción se vio vulnerada por primera vez ante la utilización de medios masivos por parte del entonces presidente Vicente Fox, el CCE, así como algunas organizaciones para favorecer al candidato panista y en

---

<sup>157</sup> Vid. "EL IFE en la opinión pública", en *Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (CESOP)*, octubre 2003, p. 21.

contra del candidato perredista en lo que fueron consideradas “campañas de miedo” y difamación<sup>158</sup>.

En resumen, la reforma electoral aprobada entre 2007-2008 fue una respuesta a los errores, excesos y omisiones cometidos en los procesos electorales de la última década, de ahí que en esta se haya reducido el tiempo de las campañas, el dinero público destinado a las mismas, la transparencia, la prohibición de campañas sucias y el refuerzo para fiscalizar, el uso del dinero, lo que hasta aquí las podría significar buenas noticias respecto a la reforma.

Sin embargo, la condición para la aprobación de la reforma electoral, era la renovación del Consejo General del IFE, que volvería a mostrar una disputa entre los partidos. Se decidió que tal renovación se diera de manera escalonada, primero la elección del Consejero General, junto a otros dos, de un conjunto total de nueve; en el 2008 se nombrarían otros 3 y posteriormente en 2010, los restantes. La elección del primer grupo se complicaría tanto que se decidiría que ese grupo fuera elegido a más tardar el 13 de diciembre de 2007 por una mayoría calificada de la Cámara de Diputados, lo cual no se logró en vista de los desacuerdos partidarios, por lo que se aplazó hasta el 2008.

Lo que estaba en disputa era la confrontación de dos modelos opuestos: el regreso a la ciudadanización, o privilegiar el equilibrio mediante cuotas partidarias. Al principio parecía que se había optado por lo primero, así que en octubre del 2007 se lanzó una convocatoria para someterlo a una consulta pública, sin embargo, resultaría un procesos viciado, confirmado esto cuando el 13 de diciembre de 2007, los dirigentes de los partidos anunciaron que no se había llegado a un acuerdo.

A la fecha sigue existiendo un retraso en la designación de él último<sup>159</sup> grupo lo que es urgente, ya que de lo contrario, advirtió el IFE, se afectarán los pasos

---

<sup>158</sup> Merino Mauricio, “La Reforma Electoral y el nuevo régimen político en México”, en Octavio Rodríguez Araujo, *Op.cit.*, pp. 232-234.

previos al arranque del proceso electoral 2011-2012. Cualquier tipo de enmienda que se pretenda aplicar para la elección presidencial y renovación de diputados y senadores tendrá que aprobarse a más tardar en junio próximo, para que por lo menos proceda la reforma para los recuentos en los distritos electorales de la elecciones federales del próximo año<sup>160</sup>.

Los saldos de la reforma electoral del IFE en 2007-2008 dejan como conclusión que este órgano está llamado a convertirse en una agencia de administración:

Sin falsas expectativas, el IFE ya no será una agencia autónoma de regulación electoral, ni tampoco una institución organizada por los ciudadanos para vigilar y sancionar la conducta de los partidos o abrir espacios a la educación, el debate y la participación política de los mexicanos, sino que será una institución profesional, de gestión y administración de los procesos y las reglas electorales recién modificadas<sup>161</sup>.

Para el IFE es imperioso recuperar su credibilidad y confianza, ya que aunque aún es una institución aceptable, diversas encuestas de opinión indican que va a la baja. En 2008 una encuesta nacional en vivienda realizada por el periódico *Reforma*, reportó que entre marzo del 2007 y agosto del 2008 el IFE paso de 55 a 43 por ciento de aceptación<sup>162</sup>. Estos datos podrían ponerse en duda si se comparan los resultados de la ENCUP realizada en el 2001 en la cual el IFE contaba con el 62% de la confianza de los ciudadanos mientras que en la encuesta realizada en el 2008 ese número se elevo ligeramente al alcanzar el 66%. Sin embargo lo desconcertante es que al mismo tiempo al preguntar sobre la confianza en la realización de elecciones limpias en la ENCUP 2008 el 66% dijo no estar de acuerdo.

---

<sup>159</sup> La elección de los consejeros electorales, no es una cuestión menor, si se analiza que la victoria de Vicente Fox en 2000 fue posible precisamente porque el PRI no controló el nombramiento de todos los consejeros en 1996. Si no hubiera sido por la inclusión de un bloque mayoritario de cinco consejeros totalmente independientes del PRI, muy probablemente no hubiéramos sido testigos de la alternancia en el año 2000. En Ackerman John M, "El secuestro del IFE", *La Jornada*, 29 de noviembre 2010.

<sup>160</sup> Martínez Fabiola, *La Jornada*, 23 de marzo 2011.

<sup>161</sup> Merino Mauricio, *Op.cit.*, p. 245.

<sup>162</sup> Moreno Alejandro, "Encuesta/ Baja apoyo ciudadano", *Reforma*, agosto 2008.

En la más reciente encuesta de junio de 2011, realizada por Consulta Mitofsky, El IFE se encuentra junto con la Suprema Corte de Justicia, entre las instituciones con menor confianza promedio con una calificación de 6.7, teniendo por debajo en el último peldaño a los partidos políticos con un promedio de 5.8<sup>163</sup>.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha tenido también un sin número de cuestionamientos debido a diversos fallos emitidos u omisiones, entre los más significativos se encuentran<sup>164</sup>:

- En diciembre de 2007, el IFE ordeno revisar a la baja la sanción impuesta a Televisión Azteca por negarse a recibir y difundir los mensajes de los partidos políticos entre el 12 de marzo y 29 de abril del 2008, argumentando que no fue una violación recurrente.
- El 22 de diciembre de 2008, se desahogó en una sola sesión prácticamente todas las quejas relacionadas con el proceso electoral del 2006, se exculpo al ex presidente Vicente Fox por su intervención en las mismas y se hizo caso omiso de las quejas por la violación al artículo 134 constitucional que prohíbe a los servidores públicos por personalizar la propaganda institucional.
- Igualmente en el año 2008, ante las irregularidades en la elección interna del PRD, el TFEJF declaró como ganador a Jesús Ortega, al exponer que a pesar de existir una notoria presencia de casillas irregulares por sí mismas no afectaban la elección.

Aunado a las problemáticas antes expuestas, se encuentran también las estadísticas sobre cultura cívica y participación política, que tampoco resultan muy alentadoras, y que dan cuenta de las posibles limitaciones para darle legitimidad, al menos en términos democráticos al Estado y al gobierno.

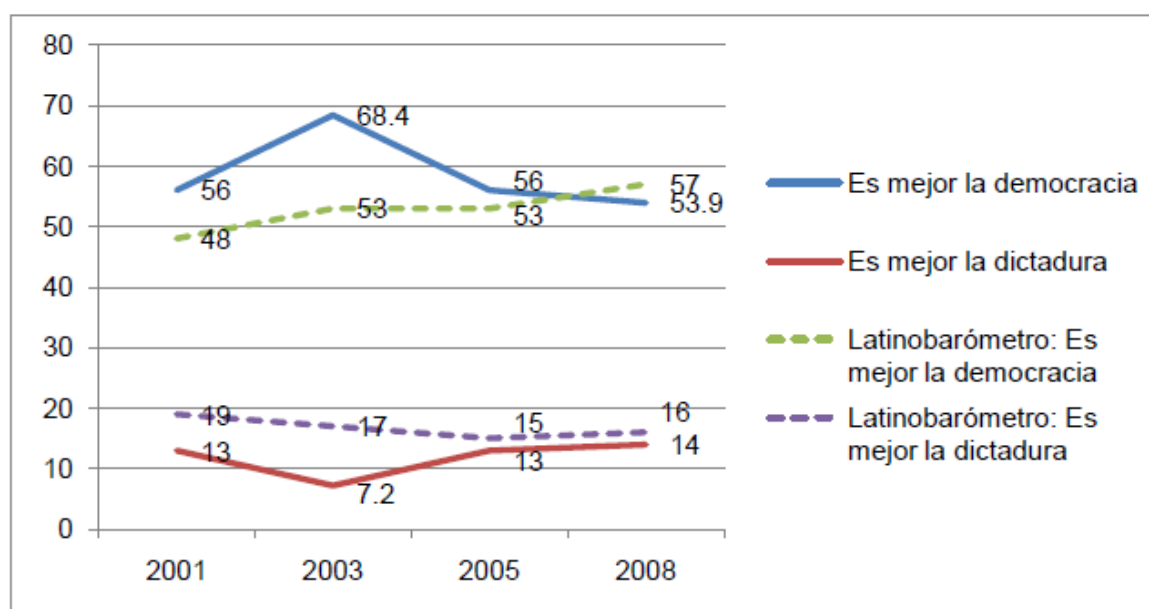
---

<sup>163</sup> "Economía, Gobierno y Política", *Monitor Mitofsky*, junio 2011, disponible en: <http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=monitor-mitofsky>, p.13-15.

<sup>164</sup> Vid. Huchim R. Eduardo, "Elecciones Avances, fallas y simulación", en Octavio Rodríguez Araujo, *Op.cit.* pp. 173-184.

En los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas (Encup) 2008, el 54% de la población dijo estar poco o nada satisfecha con la actual democracia en México, lo cual es paradójico puesto que al mismo tiempo la mayoría de la población piensa que la democracia es la mejor forma de gobierno. De acuerdo a los datos del Latinobarometro 2010 se confirma esta tendencia, ya que los resultados arrojan que en México el 49% de la población apoya la democracia, sin embargo sólo el 27% se siente satisfecho con ella. Solo el 21% de los mexicanos piensan que se gobierna para el bienestar de todo el pueblo. Podemos observar como se desarrolla esta contradicción comparando las siguientes gráficas<sup>165</sup>.

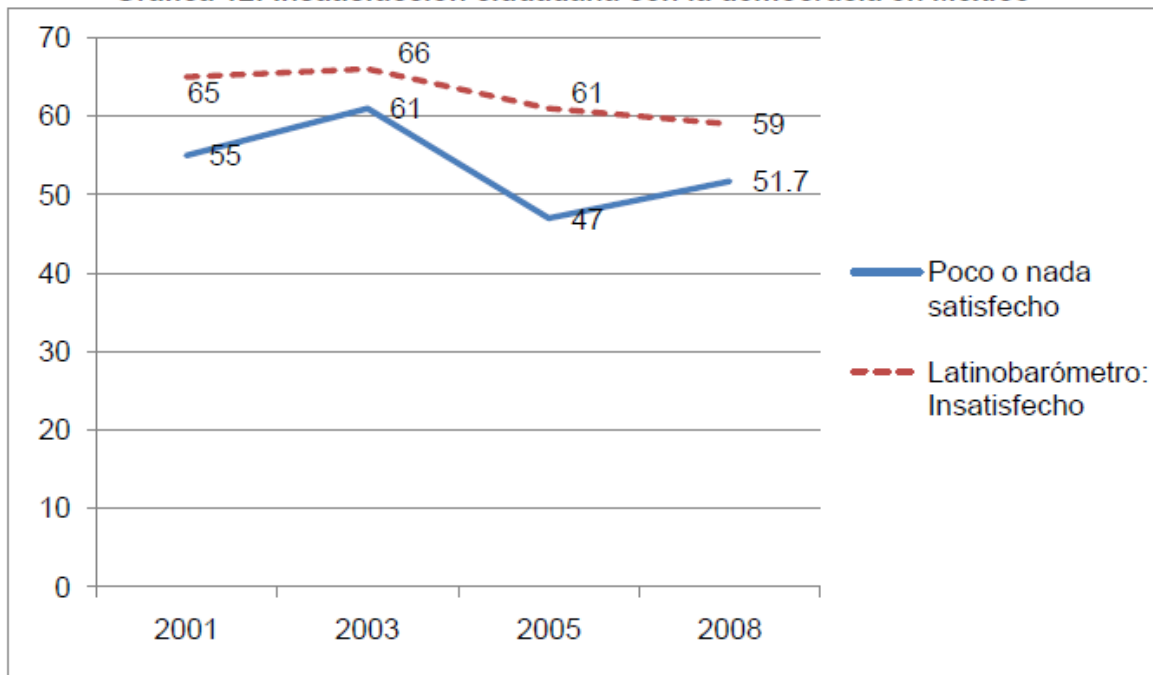
**Gráfica 11: Preferencia de la ciudadanía por la democracia como forma de gobierno**



Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008 y Latinobarómetro 2010.

<sup>165</sup> Gráficas obtenidas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación, *Cultura democrática y cultura de justicia electoral*, México, febrero del 2011, p. 31 y 32.

**Gráfica 12: Insatisfacción ciudadana con la democracia en México**



Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008 y Latinobarómetro 2010.

Ya se han dado a conocer los resultados del Latinobarómetro del 2011 donde la cifras anteriores disminuyeron aún más: estamos en el nivel más bajo de apoyo a la democracia: únicamente un 40% de la población considera que es la mejor forma de gobierno, también el nivel de satisfacción con la democracia disminuyó quedando únicamente un 23% que se dice satisfecho con ella<sup>166</sup>. Para la sociedad la consolidación democrática va dejando de ser una cuestión primordial como lo demuestran los resultados de la ENVUD 2010 (Encuesta Nacional de Valores sobre lo que nos Une y nos Divide a los mexicanos)<sup>167</sup> con los siguientes porcentajes:

<sup>166</sup> Cantú Jesús, "Democracia a la baja" en *Proceso.com.mx*, 8 de noviembre 2001.

<sup>167</sup> Moreno Alejandro, "Las metas y valores de los mexicanos: ¿qué nos une y qué nos divide", *Este PAÍS*, abril 2011. p. 98.

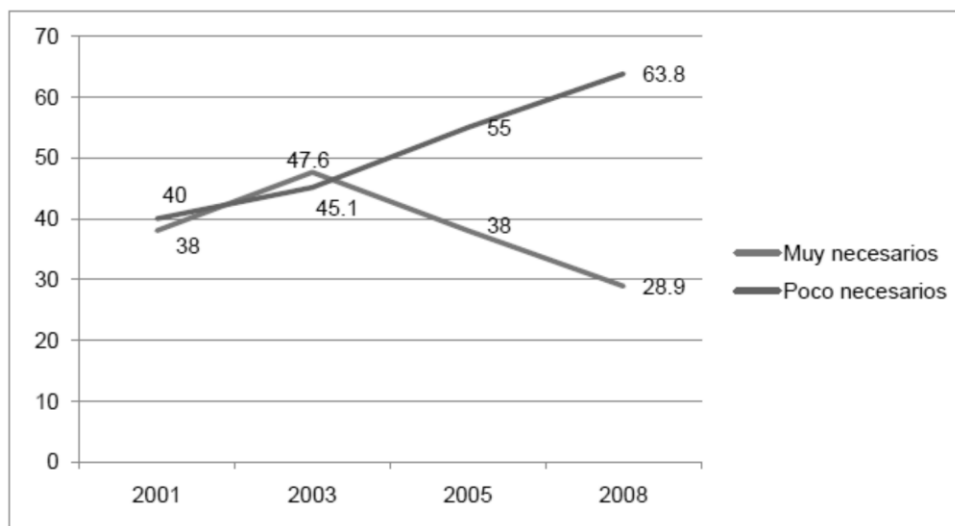
**CUADRO A** Objetivo del país para los próximos diez años

De los siguientes, ¿cuál le gustaría que fuera el principal objetivo de México como país en los próximos diez años?

38%	Una economía fuerte que ofrezca empleos y buenos salarios
23%	Un sistema de seguridad social que garantice servicios de salud y bienestar a la gente
20%	Una democracia en la que los ciudadanos participen, ejerzan sus derechos y libertades, y los gobernantes rindan cuentas
19%	Un Estado de derecho en el que prevalezca la legalidad y se castigue a quienes rompan las leyes

El grado de confianza y la percepción acerca de los partidos políticos siempre ha sido desfavorable sin embargo esta tendencia ha aumentado, lo cual es un indicador importante ya que los partidos son actores centrales en la reproducción del juego democrático.

**Gráfica 7: Percepción de los ciudadanos sobre la necesidad de los partidos políticos para la mejoría del país**



Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008.

La anterior gráfica<sup>168</sup> se complementa con la comparación de resultados respecto a la confianza en los partidos que de acuerdo a la Encup del 2001 era del 6% mientras que en el 2008 era del 4%. Esto lo que estaría indicando es que sí los partidos tienen una valoración negativa ante la opinión pública, entonces las

<sup>168</sup> Tribunal Judicial Electoral, *Op.cit.*, p. 28.



votaciones en los procesos electorales siguen siendo explicados por procesos de cooptación y clientelismo, no por lógicas de representación propias de las transiciones democráticas.

En cuanto a la participación en las elecciones a partir del año 2000, se registra un permanente avance del abstencionismo, tanto en comicios locales como federales que será frenado hasta 2009: Respecto de la participación ciudadana, en 1991 se registró asistencia a la urnas de 64 por ciento de los inscritos en la lista nominal; para 1997 –siguiente contienda intermedia– la participación fue de 56 por ciento, y para 2003 este indicador se desplomó a 41.1 por ciento. Así en el año 2009 el abstencionismo detuvo su caída al totalizar un 43.71% en las elecciones intermedias<sup>169</sup>. Este dato resulta paradójico si se compara con el presupuesto destinado a los procesos electorales que va en aumento, es decir a mayor presupuesto mayor abstencionismo.

El gasto total del IFE ha “evolucionado progresivamente” desde 1996 hasta el 2010, mientras que las prerrogativas de los partidos políticos para su financiamiento ha aumentado de un piso de poco más de 600 millones de pesos en 1996 hasta llegar a 3,000 millones en el 2010. Para ilustrar el gasto del IFE de modo comparable entre años, como parte del análisis se elaboró un cuadro comparativo a precios del 2010. Esto arrojó: “El gasto real del IFE ha aumentado 34% en el periodo 1996-2010 al pasar de 6,440 millones de pesos en 1996 a más de 8,630 millones en el 2010”.<sup>170</sup>

Todas las cifras y problemáticas antes mencionadas, dan cuenta de las limitaciones que presentan los distintos espacios de construcción de la legitimidad de tipo democrático.

### **3.4. Límites a la estabilidad social**

En los procesos tan acelerados de cambio, es muy difícil lograr mantener la estabilidad y la cohesión de una comunidad política, siendo evidente que esto dependerá de la capacidad de institucionalización a partir de procesos de

---

<sup>169</sup> Martínez Fabiola, Alonso Urrutia y Jesús Aranda, *La Jornada*, 6 de julio 2009.

<sup>170</sup> Rubí Mauricio, “Gasto electoral, de los más caros en el mundo”, *El Economista*, 9 de noviembre del 2010.

socialización eficiente; específicamente al hablar del proceso de transformación de una forma estatal (en la que se trastoca tanto el sistema en general, como los mundos de la vida particulares), los obstáculos que se presentan al mantenimiento de la estabilidad social estarán dados no en variables únicamente económicas, culturales, políticas o sociales, sino en la interrelación de las mismas.

Por tal motivo, en el presente apartado se presentan datos de procesos que están siendo atravesados por todos los ámbitos de la vida social y que por su importancia se muestran como una síntesis representativa que da cuenta de los límites a los que se enfrenta la cohesión social en el proceso de cambio.

El indicador más importante en la crisis actual que atraviesa el Estado mexicano es la violencia, pero debemos diferenciar la que aparece como violencia desnuda y lo que es propiamente violencia institucional, las cuales tienen consecuencias distintas<sup>171</sup>. La primera tiene que ver con la manera obscena en la que se presentan los actos perpetrados por el crimen organizado y al mismo tiempo por el combate del Estado en manos del Ejército o las fuerzas armadas, en este sentido la violencia desnuda se hace observable en las cifras de muertos, desaparecidos, violaciones a derechos humanos, etc. Por otro lado estaría la violencia institucionalizada que se caracterizaría por la toma de decisiones que se acercan a lo despótico ante la ausencia de mediaciones efectivas entre Estado y sociedad civil reproduciendo lógicas de explotación y exclusión social en distintos niveles. Ambos tipos de violencia se conjugan para dar paso a la actual crisis del Estado Mexicano.

Como indicadores de violencia estructural tenemos los siguientes procesos:

- Los costos sociales son inminentes como producto de las políticas seguidas en los últimos años que privilegian la precarización, flexibilización, subcontratación, informalidad, etc., donde no solo no crece la economía

---

<sup>171</sup> Jaime Osorio utiliza esta diferenciación que originalmente es formulada por Slavoj Žižek en su libro *Sobre la violencia: seis reflexiones marginales*, en la cual la violencia institucional aparece conceptualizada como sistémica, en Osorio Jaime, "Crisis estatal y violencia desnuda: la excepcionalidad mexicana" en *Violencia y crisis del estado: estudio sobre México*, UAM-Xochimilco, México, 2011, p. 25.

sino que reproduce lógicas de exclusión social cada vez más amplias. Como lo demuestran los índices pobreza, elaborada en el 2006, año en que concluye el sexenio foxista, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el INEGI, arrojó que 44.7 millones de mexicanos vivían en condiciones de pobreza de patrimonio y 14.4 millones se encontraban en situación de pobreza alimentaria.

En el 2008 ya en el sexenio calderonista, con el inicio de la crisis económica estas cifras aumentaron debido al aumento del 15% en los precios de los alimentos ocurrido entre 2007 y 2008; de acuerdo con esto el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) calculó que 7 millones de personas se sumarían a la pobreza extrema<sup>172</sup>. Desde Washington, DC, en abril de 2010, el Banco Mundial dio a conocer un informe, en el que se especificaba que uno de cada dos latinoamericanos que cayeron en la pobreza en 2009 como consecuencia de la crisis económica es mexicano<sup>173</sup>.

En el reporte trimestral sobre economía nacional del Tec de Monterrey<sup>174</sup>, se calculaba que al menos 5.5 millones de personas se sumarían a la pobreza extrema en el presente año 2011. Este cálculo se basó en la precariedad del empleo y los bajos salarios del período<sup>175</sup>. José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, afirmó que si bien en 2010 hubo un crecimiento de 5.5% en promedio, hubo sectores como el manufacturero que crecieron mucho más rápido, sin embargo la riqueza no se distribuyó equitativamente.

---

<sup>172</sup> Rea Daniela, *Reforma*, 4 de enero del 2009.

<sup>173</sup> "Mexicanos 50%, de los nuevos pobres", en *La Jornada*, 21 de abril de 2010

<sup>174</sup> Poy Solano Laura, *La Jornada*, 13 de abril, de 2011.

<sup>175</sup> Desde el sexenio 1975-1982 se inició la imposición de topes salariales por debajo de la inflación, que se mantiene hasta la fecha, como parte de la política pública. en noviembre de 2008 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que los salarios deberán aumentarse por debajo de la inflación, pues de no hacerse no sería posible mantener la operación de las empresas y tendrían que ser despedidos muchos trabajadores., en Octavio Rodríguez Araujo, "Metamorfosis del régimen político mexicano, ¿irreversible?, *Op.cit.*, p. 265.

El último informe presentado por CONEVAL presenta una cifra un poco menor a la calculada por el estudio del Tec, sin embargo, especifica que el incremento del número de personas que viven en situación de pobreza estuvo relacionado directamente con el crecimiento de la población que carece de acceso a la alimentación, la cual aumentó 4.2 millones entre 2008 y 2010 –para llegar a alrededor de 28 millones de mexicanos<sup>176</sup>. LA OCDE advirtió en su informe del 2011 que México tiene la tasa más alta de pobreza infantil entre los países que pertenecen a la organización, casi a la par de Israel y Turquía. El 28% total de población infantil en México pertenece a hogares pobres (1 de cada 4 niños).<sup>177</sup>

Las cifras del desempleo son igualmente preocupantes, entre 2000-2008, se perdieron 885 mil puestos en las industrias de la transformación del país, una caída de casi 20%<sup>178</sup>. La tasa de desocupación en el 2008 se ubicó en 4.5% de la PEA, el nivel más alto desde el 2000, de acuerdo con el INEGI<sup>179</sup>.

El informe dado a conocer por el INEGI para el mes de abril del 2011 arroja que: en el primer cuatrimestre promedió una tasa de desocupación de 5.1%, que si bien es menor a la del año anterior, básicamente es similar a la alcanzada en 2009, el año de la crisis económica. Por lo tanto las condiciones laborales que enfrentan los mexicanos no corresponden con el crecimiento económico de 4.6% conseguido por México en el primer trimestre del 2011; ya que las ganancias de la misma se concentran en un sector muy pequeño de la población<sup>180</sup>.

- Economía informal: Quizá uno de los pocos fenómenos que actúan como estabilizador social ante la crisis económica y el desempleo, es el aumento de la economía informal; en una evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la gestión del presidente Vicente Fox, se afirmó que el valor de la economía informal se expandió hasta alcanzar un tamaño

---

<sup>176</sup> Enciso L. Angélica, “El Coneval presenta el Informe de evaluación de la política social 2011” en *La Jornada*, 9 de febrero 2012.

<sup>177</sup> González Guitiérrez Susana y Avilés Karina, “Uno de cada cuatro niños mexicanos vive en hogares pobres: OCDE” en *La Jornada*, 28 de abril 2011.

<sup>178</sup> González Susana G., *La Jornada*, 18 de enero de 2009.

<sup>179</sup> Jiménez Mónica, *Reforma*, 20 de diciembre 2008.

<sup>180</sup> De la Cruz Gallegos José Luis, *El Universal*, 30 de mayo 2011.

equivalente a un tercio del producto interno bruto (PIB), lo que representa que por canales fuera de fiscalización se mueven 284 mil millones de dólares cada año. De acuerdo con otro estudio del INEGI realizado también en el 2006, el tamaño de la economía informal en México supera al de la actividad industrial (manufacturas, minería, construcción y electricidad, gas y agua) y agropecuaria, silvícola y pesquera, que aportan 26.6 y 3.9 por ciento del PIB de cada una, para un total entre los dos sectores de 30.50 por ciento<sup>181</sup>. En diciembre de 2010, la informalidad daba empleo a 27.1 por ciento de la PEA, cifra que creció a 28.5 por ciento en marzo del 2010, de acuerdo con los datos publicados por el INEGI<sup>182</sup> y que volvió a crecer en 2011 al llegar a la cifra de 13 millones 400 mil personas, es decir 75 mil personas más respecto de junio del 2010 como se observa en al gráfica<sup>183</sup>.



Como fenómeno paralelo estará la migración que al igual que la informalidad son válvulas del escape al ser receptores del desempleo, pero que al mismo tiempo evidencian la lógica de exclusión derivada de la violencia institucional.

- Migración: La migración es un fenómeno muy complejo que atraviesa muchas dimensiones (pobreza, desigualdad, crisis social rural, estrategias de sobrevivencia, redes sociales, derechos humanos, multiculturalismo etc).

<sup>181</sup> González Roberto Amador, "Equivale a un tercio del PIB la economía informal", en *La Jornada*, 13 de octubre 2006.

<sup>182</sup> González Roberto Amador, "Da más empleos a mexicanos la economía informal que la formal", *La Jornada*, 14 de mayo 2011.

<sup>183</sup> González Ixel Yutzil, "Crecen sector informal y desempleo", *El Universal*, 13 de agosto 2011.

En el caso de México es significativo el número de personas que deciden emigrar a E.U, especialmente en la última década:

Durante el sexenio 2000-2006 se calculó una migración de 400 mil trabajadores al año, como una de las mayores migraciones en el mundo; así mismo hubo un crecimiento exponencial de las remesas que superó los 20 mil millones de dólares. Sin embargo, entre 2006-2009 el número de migrantes que han abandonado México para vivir en otros países cayó 59 por ciento, para un total de 370 mil, debido a la recesión y al endurecimiento de los controles fronterizos, informó hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La crisis económica también tuvo un impacto importante en las remesas de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que cayeron casi 20 por ciento entre 2006 y 2009, cuando totalizaron 21 mil millones de dólares, lo que fue compensado por la depreciación del peso<sup>184</sup>.

En el contexto de la globalización con la implantación de la política neoliberal, México integra plenamente su economía al proceso de reestructuración productiva estadounidense. A partir de la firma del TLCAN se instrumenta una política de crecimiento basada en la exportación de manufacturas con un alto componente nacional, sin embargo, en la realidad lo que se está exportando es fuerza de trabajo barata. La migración laboral también ha sido resultado de la estrechez y precarización del mercado laboral mexicano la siguiente grafica muestra como ambas variantes han determinado este proceso<sup>185</sup>:

---

<sup>184</sup> “OCDE: por la crisis, cayó 64% el número de mexicanos que van a EU en busca de trabajo”, *La Jornada*, 13 de julio 2011.

<sup>185</sup> Delgado Raúl, Humberto Marquéz y Óscar Pérez Veyna, “EL abaratamiento de la fuerza de trabajo mexicana en la integración económica de México a Estados Unidos”, en *El Cotidiano*, núm. 143, UAM-A, mayo-junio 2007, p. 64.

**Tabla I**  
**México: Crecimiento económico, empleo y migración a Estados Unidos, 1970-2003**

<i>Periodo sexenal</i>	<i>Crecimiento promedio del PIB (%)</i>	<i>Crecimiento de la PEA por sexenio (miles de personas) (A)</i>	<i>Empleo generado por sexenio (miles de personas) (B)</i>	<i>Déficit de empleo por sexenio (miles de personas) (AB)</i>	<i>Población nacida en México residente en Estados Unidos (miles de personas)</i>
Vicente Fox (2001-2005)	1.8	5,400	124	-3,275	3,200
Ernesto Zedillo (1994-2000)	3.1	7,518	3,102	-4,416	2,310
Carlos Salinas (1988-1994)	3.9	6,990	2,337	-4,653	2,001
Miguel de la Madrid (1982-1988)	0.2	5,676	2,411	-3,265	1,387
José López Portillo (1976-1982)	6.2	4,400	1,969	-2,431	1,268
Luis Echeverría (1970-1976)	6.5	3,702	1,889	-1,813	2,284

Fuente: Elaborado con base en datos de Inegi <www.inegi.gob.mx>, Conapo <www.conapo.gob.mx> y Current Population Surve.

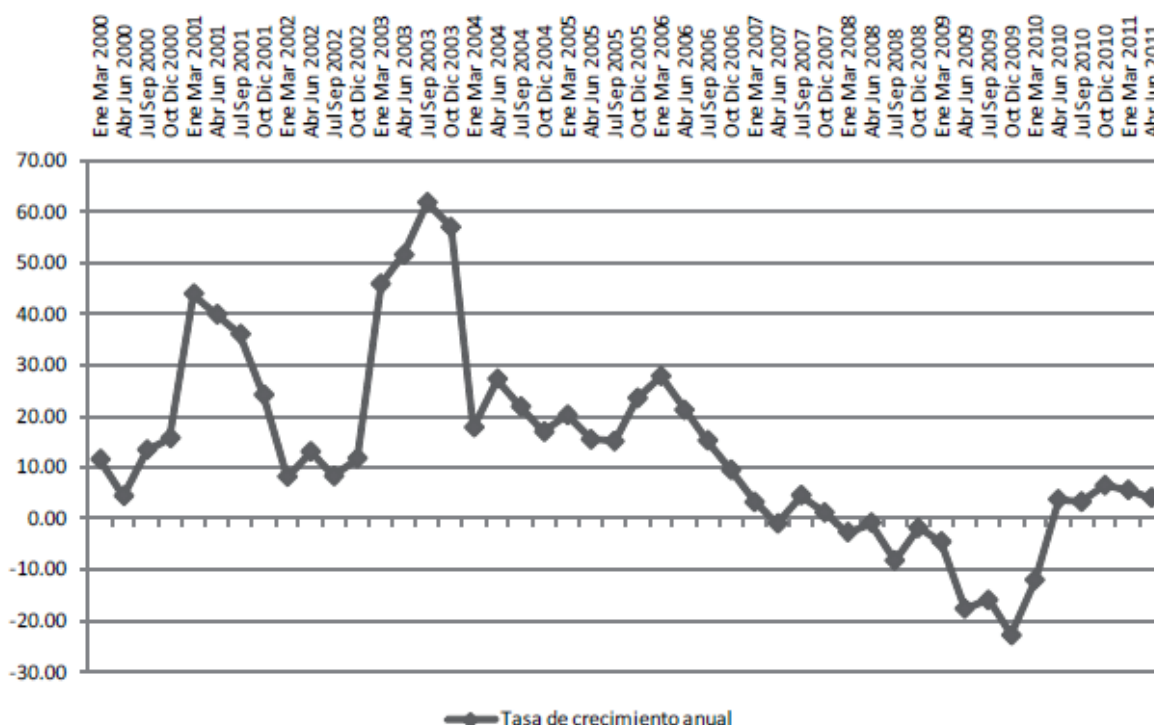
Para los fines de la presente investigación podemos obtener como saldo dos cosas: por un lado las remesas han ayudado a morigerar las crisis económicas como en el sexenio foxista, junto con la informalidad que permitió que la economía no se estacara. Pero al mismo tiempo, la migración puede representar un riesgo para el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de México, en 2007, El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que especialmente en las regiones expulsoras, donde las remesas tienen efecto de inversión en materia de educación y salud, no compensan la "pérdida de potencial de crecimiento de largo plazo". También alertó sobre la carga fiscal que a futuro provocará el regreso de mexicanos, cuando al término de su edad productiva requieran de servicios de salud y de retiro "sin haber contribuido a los sistemas de seguridad social en México"<sup>186</sup>.

Esto sin contar los efectos sociales y humanos, como el desamparo en el que quedan muchas de las familias de los migrantes; el incremento de sus niveles de pobreza, a causa de los costos de la migración, muchas veces fallida; las consecuencias que todo ello tiene en el desarrollo humano de sus integrantes; el aumento de la migración de mujeres y niños en años recientes, con la esperanza incierta de poder alcanzar a sus seres queridos, despoblamiento de municipios rurales, etc. Por lo que más que beneficios, el fenómeno migratorio representa severas limitaciones a la estabilidad y cohesión social.

<sup>186</sup> Muñoz E. Alma, *La Jornada*, 18 de junio del 2007.

En el año 2010 México se convirtió en el país con mayor migración a nivel mundial con 11 millones 400 mil personas que saldrán del territorio según cifras calculadas por el Banco Mundial en el documento *Migración y Remesas 2011*, en el que aparece que el 10. 7% de la población total migrante son mexicanos<sup>187</sup>. Además de ser el principal expulsor México también se ha convertido en el país con mayor número de remesas: en 2007 el monto fue de 25 mil 68 millones de dólares; 2008, 25 mil 137 millones; 2009, 21 mil 181 millones; y 2010, 21 mil 271 millones. Al primer trimestre de 2011 la cifra ascendía a 5 mil 98 millones<sup>188</sup>.

Gráfica 5. Remesas familiares: tasa de crecimiento anual 2000-2011



Fuente: Elaboración propia con base en Banco de México, *Balanza de pagos al segundo trimestre de 2011*, en [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx) (fecha de consulta: 11 de agosto de 2011).

<sup>187</sup> Arteaga José Manuel, "México es número uno en migración", *El Universal*, 9 de noviembre 2010.

<sup>188</sup> Garduño Roberto, "Hacia 2010 México había expulsado a EU casi 12 millones de trabajadores: BM", *La Jornada*, 7 de mayo de 2011.



Como se muestra en la gráfica<sup>189</sup> anterior la cantidad de remesas se ven afectadas por las crisis económicas sin embargo, son una constante que permite subsanar las consecuencias de la precariedad y la pobreza ya que la mayoría de remesas se gastan en satisfacción de necesidades básicas, bienes de consumo duradero y en la compra y mejora de viviendas lo que al mismo tiempo puede ser pernicioso ya que es muy poca la proporción que se destina al ahorro.

- Otro factor importante a considerar es la salud ya que opera como determinante respecto al crecimiento económico y la pobreza. A largo plazo permite el desarrollo cognitivo en los niños, la productividad laboral en el adulto, libera recursos para otros fines, etc., en el caso de México, casi un tercio del crecimiento del último cuarto del siglo XX se explica por mejoras en la salud. En ese sentido cobra especial importancia las políticas públicas encaminadas a fomentar la salud o para minimizar su desgaste cuando la enfermedad se presenta. Sin embargo el gasto público en el rubro de la salud es inadecuado:

Cerca de 50% de las personas no cuenta con cobertura de seguridad social y el gasto de bolsillo representa más de la mitad del gasto total en salud y, por lo mismo, un alto porcentaje de los hogares mexicanos corre el riesgo de incurrir en gastos catastróficos y empobrecerse para acceder a la atención médica que requieren. (...)La financiación privada de parte de los servicios de salud no es negativa per se. Pero, el peso desproporcionado del gasto de bolsillo no sólo contribuye a perpetuar la pobreza extrema sino que también exacerba la desigualdad, ya que en México el gasto de bolsillo se presenta en una mayor proporción en las familias en situación de pobreza extrema.<sup>190</sup>

Hasta el 2011 se tiene que entre el 33 y 35% de la población en México no esta afiliado a ningún servicio de salud, donde el Seguro Popular (creado en 2001 con el objetivo de dar acceso al aseguramiento médico y protección financiera a los hogares que están fuera de la seguridad social formal) no va a lograr dar cobertura “universal” al menos en los próximos años y aunque se reporta que en el 2010

---

<sup>189</sup> Moreno Pérez Salvador, “Crisis económica y la migración internacional en México”, en *Reporte CESOP*, núm 47, agosto 2011, p. 30.

<sup>190</sup> Lustig Nora Claudia, “Salud y Desarrollo Económico. El caso de México”, *El Trimestre Económico*, FCE, México, No. 296, 2007, p. 799.

hubo menos gasto de los hogares en cuanto a atención médica el 10 % más pobre, en el que se ubica 77 % de los afiliados a este seguro, incrementó su gasto médico en un 14% en 2010 respecto a 2008.<sup>191</sup>

No parece haber expectativas de cambio en un futuro cercano sobre todo si comparamos las cifras de gasto corriente contra inversión pública: El proyecto de presupuesto para 2011 vuelve a castigar el gasto de capital, con una disminución real de 1.8 por ciento, en un momento en el que con mayor fuerza se debería estimular la inversión, según enjuicio el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). De acuerdo con la propuesta presentada por Hacienda, para 2011 el gasto corriente (los recursos que se destinan tanto a la contratación de personal como a la compra de bienes y servicios necesarios para que el gobierno desarrolle sus funciones administrativas) representará 76.6 por ciento del gasto programable, mientras apenas 23.4 por ciento se irá a gasto de capital<sup>192</sup>.

- Exclusión de los jóvenes de diversos espacios de socialización.

La cada vez más restringida posibilidad de acceso a la educación, aunado al crecimiento del desempleo y la informalidad han sido factores que han propiciado la aparición de un grupo de jóvenes mexicanos que ni estudian ni trabajan. “Los llamados *ninis* son los excluidos de ayer y hoy, a quienes la educación ya no se les presenta como opción que posibilite la inserción laboral ni la movilidad social, ni es ya un espacio de referencia en el que se construyen los valores y premisas alrededor de los cuales los jóvenes tienen un conocimiento del pasado y un horizonte utópico”<sup>193</sup>. El número de “ninis” en América es de más de 22 millones de personas, en México la cifra es de 7 millones.<sup>194</sup>

En los municipios de la frontera norte de México, existen casos en los cuales hasta 80 por ciento de esa población no tiene posibilidades de continuar con la

---

<sup>191</sup> Laurell Asa Cristina “Coneval y la cobertura universal de salud”, *La Jornada*, 3 de agosto 2011.

<sup>192</sup> Miranda Juan Carlos, *La Jornada*, 13 de septiembre 2010.

<sup>193</sup> Mora Heredia Juan, Raúl Rodríguez Gillén y Lilia Anaya Montoya, “Los jóvenes ante su crisis: una integración fragmentada entre el mercado y la información”, *EL Cotidiano*, UAM-A, septiembre-octubre 2010, núm. 163. p. 31.

<sup>194</sup> *La Jornada*, 7 de julio de 2010.

educación preparatoria, y se convierten en candidatos para las filas del crimen organizado, señalaron alcaldes de ayuntamientos como Matamoros, Nuevo Laredo y Valle Hermoso, Tamaulipas; Mexicali y Tijuana, Baja California, y de San Luis Río Colorado, Sonora, entre otros<sup>195</sup>.

El problema central en cuanto a la falta de socialización eficiente de los jóvenes es que se deposita en ellos la esperanza de que a futuro reproduzcan los valores que cohesionan la sociedad (independientemente del tipo que sean) y permitan reproducción del sistema en su conjunto.

La violencia estructural lo que esta provocando es la precarización de las condiciones de vida de las personas, el aumento de la desigualdad, la exclusión de espacios básicos de socialización y mina las posibilidades de constitución de espacios públicos de deliberación que permitan una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, lo que se traduce también en un vaciamiento de la transición política que no ha implicado lógicas de representación o de mediación eficientes.

Como lo indicó el PNUD en tan solo un año –de 2010 a 2011- México perdió 23% de su nivel de desarrollo humano al retroceder 15 lugares en la distribución de la riqueza, en el IDH que mide salud, educación e ingreso, México no avanzó, pero tampoco retrocedió respecto del año pasado, ya que mantuvo el lugar 57 entre 187 países analizados, sin embargo, si al IDH se agregan los niveles de desigualdad entre la gente muy rica y la muy pobre, México queda peor de lo que estaba, porque pasa del puesto 57 al 72<sup>196</sup>.

Por otro lado está el factor de la violencia desnuda que se entrecruza con la violencia institucional en diversos momentos volviendo más compleja la crisis:

- Crisis del Orden Público y aumento de la violencia: No podemos olvidar que una de las razones básicas que justifica la existencia del Estado, es la

---

<sup>195</sup> *La Jornada*, 7 de julio de 2010.

<sup>196</sup> “Desciende México 15 lugares en desarrollo humano, según el PNUD”, *La Jornada*, 3 de noviembre de 2011.

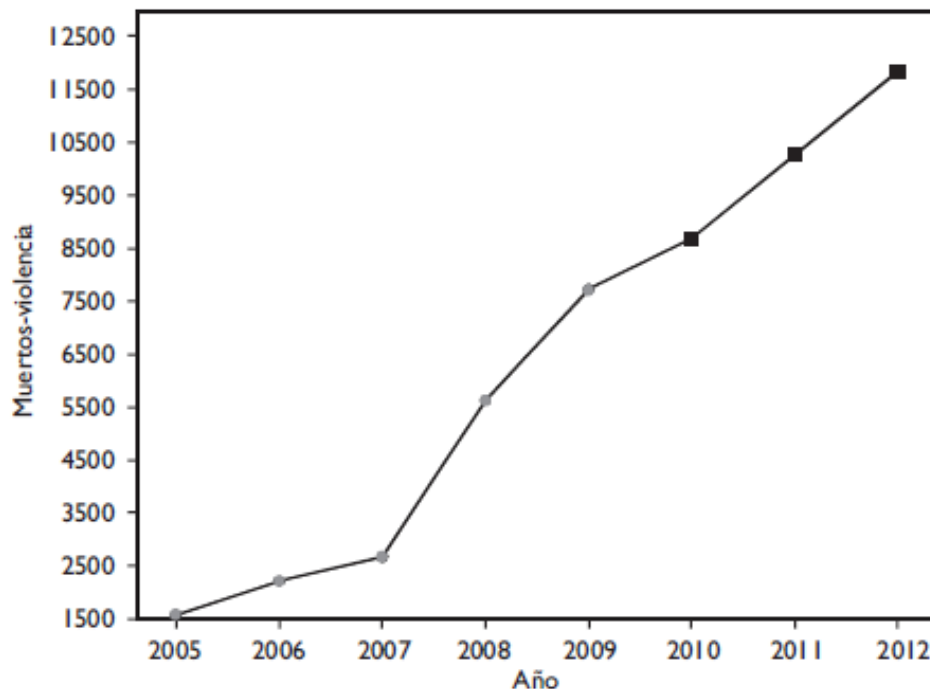
defensa de la integridad en primer término física de los individuos que lo conforman, la seguridad es uno de los “bienes públicos” puros. En ese sentido la cuestión de la seguridad, siempre ha sido un tema presente en los distintos PDN, sin embargo, desde la llegada al poder de los gobiernos panistas, se le ha dado prioridad al combate a la violencia pero a la relacionada con el crimen organizado, especialmente enfocado como una “guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo los resultados de este combate han resultado perniciosos para el Estado en diversos sentidos.

En primer lugar el crecimiento de la violencia relacionada a los crímenes organizados ha aumentado: Si con Vicente Fox el, número de ejecutados fue de 13 mil con Felipe Calderón en lo que va de gobierno la cifra asciende a más de 28 mil.

<b>Tabla 2</b> <b>Número de muertos a causa del crimen organizado y el narcotráfico. 2005-2010</b>						
<i>Entidad</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Nacional (El Universal)	1,573	2,221	2,673	5,630	7,724	2,049 <sup>22</sup>
Nacional (Informe Gobierno Federal)			2,837	6,844	9,635	3,365

Fuente: Elaboración propia con datos de *El Universal*.

**Gráfica 2**  
**Representación gráfica de la violencia (2005-2009)**  
**con pronóstico (2010-2012)**



Como se muestra en la Tabla y en la Gráfica<sup>197</sup>, la violencia relacionada con el crimen organizado ha crecido y de acuerdo a la tasa calculada, se espera que lo siga haciendo hasta concluir el sexenio calderonista.

El aumento de la violencia además de poner en riesgo la seguridad de los individuos a los que el Estado debería resguardar, tiene otras consecuencias perniciosas sobre todo en la opinión ciudadana: La Encuesta Nacional sobre la Percepción de Seguridad Ciudadana en México, realizada por Consulta Mitofsky y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en los primeros meses del 2011, reveló que en un solo año aumentó de 30 a 58% el número de personas que considera que el crimen organizado va ganando la guerra contra la inseguridad. Destaca que del total de encuestados, 82% dice que la inseguridad es peor que la

<sup>197</sup> Gutiérrez Cuellar Paola, "Violencia, Estado y crimen organizado en México", *El Cotidiano*, UAM-A, núm. 163, septiembre-octubre 2010, p. 113.

de hace dos años y uno de cada seis conoció a alguien que murió en la lucha contra el crimen organizado<sup>198</sup>.

La guerra contra el crimen organizado también ha resultado perniciosa en cuanto al deterioro del respeto a los derechos humanos: Amnistía Internacional (AI), en su informe anual *El estado de los derechos humanos en el mundo 2011*, afirma que en México el Ejército y las policías desplegadas para combatir al crimen organizado y el narcotráfico fueron responsables el año pasado de violaciones graves de derechos humanos, homicidios, desapariciones forzadas de personas, tortura y detenciones arbitrarias, sin que hasta el momento ningún militar haya sido condenado por perpetrar estos delitos<sup>199</sup>.

Ante el exterior México está a punto de convertirse en un Estado fallido principalmente por los estragos de la lucha contra el crimen organizado: De acuerdo con el informe elaborado por el Fondo por la Paz, organización con sede en Washington, D.C, y difundido por la revista *Foreign Policy*, México empeoró su clasificación en el ranking mundial de “Estados fallidos”, México se ubicó en la posición 94 con una calificación de 75.1, en contraste con el lugar 96 y la calificación de 76.1 de 2010. El aparato o “sistema de seguridad” de México fue el que más contribuyó al empeoramiento, con una calificación de 7.9, además de la “violación de derechos humanos” que registró una calificación de 7.9<sup>200</sup>.

En el territorio mexicano se observa una especie de feudalización del territorio en el que bandas armadas se adjudican facultades que solo conciernen al mando estatal como son la aplicación de violencia, cobro de impuestos infraestructura etc. En el año 2001 Edgardo Buscaglia (Presidente del Instituto de Acción ciudadana) calculó que el narcotráfico controlaba 34% de los municipios, en 2006 53%, para 2010 73% y en 2011 disminuyó ligeramente al 71.5 %, sin embargo lo que demuestra este calculo es que los cárteles tienen infraestructura física abierta y

---

<sup>198</sup> La encuesta se realizó a mil mexicanos mayores de 18 años en todo el país, entre el 29 de abril al 2 de mayo de este año en viviendas particulares y entrevistas cara a cara. en María de la Luz González, *El Universal*, 1 de junio del 2001.

<sup>199</sup> Ballinas Victor, “Narcoviolencia”, *La Jornada*, 13 de mayo 2011.

<sup>200</sup> Gomora Doris, “Se agrava el deterioro del Estado advierten”, *El Universal*, 21 de julio de 2011.

permanente y que se encuentran cometiendo constantes delitos considerados patrimoniales<sup>201</sup>.

Otro saldo negativo se relaciona con el gasto estatal en esta materia: con Calderón aumentó 44 por ciento el gasto militar, la cifra sin precedente en el último año es de 64 mil 348 millones de pesos. De acuerdo con la estadística oficial, de 2007 a 2011 el presupuesto conjunto de las secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad Pública Federal, más PGR (incluido el concepto de previsiones salariales y económicas) acumula poco más de 485 mil millones de pesos. Nominalmente, el presupuesto destinado a la Sedena prácticamente se duplicó entre 2007 y 2011; el de la Marina se incrementó 67 por ciento; el de la SSPF 162 por ciento y el de la Procuraduría General de la República 31 por ciento<sup>202</sup>.

El gasto militar es excesivo, en un contexto de aumentó constante de desigualdades, y pobreza, y sobre todo si se compara con la cantidad destinada al desarrollo social: El presidente Calderón propuso a la Cámara de Diputados un presupuesto para desarrollo social en 2011 de 79 mil 489 millones 287 mil 374 pesos, 1% inferior al aplicado en este año. Los diputados repararon ese decremento y aumentaron ese 1% exacto por 801 millones de pesos, para no incumplir con la ley ni tratados internacionales que obligan a México a no reducir el gasto en desarrollo social, educación y salud, entre otros; sin embargo esta cantidad quedo muy reducida ante los 29 mil millones otorgados al campo, los 18 mil 300 millones de pesos a más carreteras o los 4 mil millones del Fondo Metropolitano para obras urbanas<sup>203</sup>.

### **3.5 Peculiaridad de la crisis estatal mexicana.**

La crisis no es necesariamente un fenómeno anormal (entendida en términos sociológicos como causante de disrupción en cuanto a estabilidad o cohesión) en la reproducción de la comunidad estatal, especialmente en lo que históricamente

---

<sup>201</sup> Gomora Doris, *El Universal*, 2 de enero 2012.

<sup>202</sup> Fernández Vega Carlos, "México SA", *La Jornada*, 16 de abril 2011.

<sup>203</sup> *Ibídem*

se conoció como *Estado Benefactor*, como afirmaba Habermas, la crisis estaba contenida en la naturaleza misma de esa forma estatal propia de las sociedades del capitalismo tardío: una producción que es administrativamente socializada pero que tiene un modo de empleo y de apropiación de la plusvalía privado.

Esta crisis constitutiva la presentaba el Estado posrevolucionario, sin embargo, al manifestarse no ponía en serio riesgo la integración sistémica, es decir, si existía alguna falla en cuanto al proceso de acumulación y distribución (política social, seguridad, infraestructura, etc), la crisis se desplazaba a la legitimidad, pero era contenida ahí, donde los insumos del sistema político, evitaban que las identidades que motivaban acciones individuales se trastocaran.

El estado mexicano corporativo sobrevivió aún cancelado el ciclo de reformas sociales, y ante múltiples formas de resistencia expresadas en los movimientos de los cincuenta, en el 68, etc. Esto se debía a que la *forma estatal*, le daba prioridad a la “relación política” como una vía de resolución de conflictos. La forma de socialidad se conformó de manera organizacional, representando siempre intereses sectoriales que entran en competencia por la capacidad de influir; en el *estado social*, la ley pasa a ser un instrumento para la ejecución de decisiones, y su contenido deja de ser abstracto volviéndose específico para actores tanto individuales como colectivos situados en sus contextos. Lo que evidentemente implicará una nueva fuente de legitimidad (García Pelayo) que no está constituido necesariamente o solo, por el carisma, la tradición o el conjunto abstracto de leyes y reglas sino por la capacidad efectiva de satisfacer demandas.

La capacidad del Estado posrevolucionario para reproducirse se explica en gran medida por esta preeminencia de lo político y la capacidad para renovar los distintos pactos (social, corporativo, con la élite) a través de un despliegue de su poder infraestructural, que permitía por un lado la estatalización de los social, pero al mismo tiempo la socialización del estado.

Al calor de las transformaciones mundiales operadas a partir de los años setenta (anunciadas desde el 68) y profundizadas en los ochenta se evidencia no sólo una



crisis económica producto de un modelo de desarrollo (ISI), ni únicamente un modelo político (Welfare State), sino de un patrón de dominación en su conjunto:

La crisis capitalista nunca es otra cosa que esto: la ruptura de un patrón de dominación de clase relativamente estable. Aparece como una crisis económica, que se expresa en una caída de la tasa de ganancia, pero su núcleo es el fracaso de un patrón de dominación establecido. Desde el punto de vista del capitalista, la crisis solo puede ser resuelta mediante el establecimiento de nuevos patrones de dominación. Esto no significa que el capital tiene preparados nuevos patrones para imponerlos a la clase obrera. Para el capital, la crisis solo puede ser resuelta a través de la lucha, a través del restablecimiento de la autoridad y a través de una difícil búsqueda de nuevos patrones de dominación.<sup>204</sup>

La aplicación del modelo neoliberal, implica entonces no sólo un modelo económico, es el proyecto de desmantelamiento de una forma de dominación, para dar paso a la construcción del “Estado nacional de competencia”, lo que en México implicó que por medios violentos se derribara el andamiaje material y simbólico, que sustentó al Estado posrevolucionario, con sus formas de hacer política, de construir la legitimidad, de vinculación entre gobernados y gobernantes.

Si en los años ochenta, como habíamos descrito con anterioridad, los pactos habían entrado en crisis, con la aplicación de las políticas neoliberales: Desregulación, privatización, modernización, racionalización y achicamiento del Estado, se profundizaría la crisis de reproducción estatal; la fractura intra élites provocada por la existencia de dos proyectos entrecruzados (neoliberalismo-neokeynesianismo), se filtraría a la sociedad, como lo evidencia la coyuntura de 1994.

Al llegar el año 2000, era evidente que la vieja forma de dominación estaba en crisis pero que aún no desaparecía, mientras que al mismo tiempo se trataba

---

<sup>204</sup> Holloway John, (1994) “La rosa roja de Nissan” en Bonefeld, Werner y Holloway, John (comps.) *¿Un nuevo Estado? Debate sobre la restructuración del Estado y el capital* (México: Editorial Cambio XXI/Fontamara), citado en Roux Rhina, “El Príncipe Fragmentado. México: despojo, violencia y mandos”, en Arceo Enrique y Eduardo Basualdo (comp.), *Los condicionantes de la crisis en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, agosto 2009, p.11.

construir una nueva. La liberalización política a nivel de régimen en los años noventa era un componente lógico ante la liberalización económica que había comenzado a operar en los años ochenta.

Esto debido a que, la aplicación del modelo neoliberal, en la lógica del proceso de desmantelamiento de la vieja forma de dominación comenzó a mermar los pilares del corporativismo, que durante años aseguraron la lealtad de masas. Si esta forma de legitimidad se sustentaba en la obediencia a cambio del reconocimiento de derechos subalternos, y en la posibilidad de hacer efectivas ciertas demandas sociales vía las distintas organizaciones, lo más lógico era que si en el nuevo modelo económico había trasladado la tutela de la “justicia social” del Estado al mercado, se buscará una nueva forma de legitimidad, que no comprometiera las nuevas premisas, lo que implicó:

la inversión radical de las reglas estructuradoras del Estado, que significaba anteponer el derecho mercantil privado y convertir al Estado en una comunidad abstracta de los propietarios privados, le acompaña otra forma de legitimidad- la legitimidad electoral- (...) esta nueva forma de mando político expresa una imbricación de un nuevo tipo de mando fundado en la eficiencia, el ahorro, la racionalidad empresarial y la disciplina en la administración pública.<sup>205</sup>

Recordemos que al llegar el año 2000, el único pacto que se había reconstruido era el de la élite política con el sector empresarial, mientras que el pacto social era prácticamente inexistente, mientras que el corporativo estaba severamente fracturado. Por lo que la alternancia a nivel de régimen permitía la posibilidad de establecer un nuevo vínculo con las clases medias, quienes podían ser en un primer momento los depositarios de los valores de la democracia liberal, de tal manera que después pudieran ser generalizados dentro de todo el entramado social.

Sin embargo, la principal contradicción a la que se enfrentó la “transición” es la de consolidar un nuevo tipo de régimen con legitimidad electoral (democrática liberal), que no corresponde con la forma estatal (con inercia autoritaria), debido a que

---

<sup>205</sup> Roux Rhina, “El Estado mexicano. Una mutación épocal”, en Anguiano Arturo (Coor), *Después del 2 de julio dónde quedó la transición? Una visión desde la izquierda*, UAM. México. 2001. p. 68.

esta se encuentra en un proceso de cambio que manifiesta las contradicciones entre la vieja forma de dominación y la que se pretende imponer. El contenido del cambio operado con la alternancia en el año 2000 se fue vaciando en medio de los análisis sobre la transitología que obviaron el hecho de que lo fundamental en un proceso de democratización tiene que ver con la soberanía, es decir con la capacidad efectiva de que “el pueblo” pueda gobernar a través de la vía representativa, por el contrario lo que sucedió es que se eliminaron mecanismos de mediación efectivos que no estén basados únicamente en la cooptación y que permitan incidir en la toma de decisiones.

Todas las sociedades inmersas en procesos intensos de cambio experimentan cierta pérdida de “comunidad” en términos políticos ya que el proceso de expansión de las nuevas formas socava las antiguas formas de institucionalización, y al hacerlo, al mismo tiempo desactiva los canales por medio de los cuales puede reproducirse una nueva forma de dominación, para evitar la pérdida significativa de cohesión social, es necesario entonces tomar medidas que reduzcan el impacto de los cambios, pero eso a su vez entraña el recurrir a viejas prácticas.

Sobra decir, que el proceso de transformación en la dominación que comenzó a operar en los años ochenta, trajo como consecuencia la exclusión cada vez mayor de amplias franjas de la sociedad civil, lo que quedaba era intentar reintegrarlos replanteando los distintos pactos con el Estado, sin embargo esto no ocurrió, y no parece que pueda ocurrir en un futuro próximo por las tendencias que se observan.

Uno de los principales problemas que dimensionan la crisis actual del Estado mexicano es la cuestión de los pactos sociales, puesto que no existe una estrategia efectiva de vinculación del Estado con la sociedad civil, ya sea vía restitución de los pactos o una reformulación de los mismos que permita reintegrar a las amplias franjas de la sociedad civil que han sido excluidas en medio del proceso de transformación estatal.

El pacto entre las élites (clase política y fracciones burguesas) es el único que fue reformulado y fortalecido, solo que esta vez a diferencia del pacto posrevolucionario con la vieja burguesía industrial de los años cuarenta y cincuenta, los pequeños y medianos empresarios y los propietarios agrarios, el pacto se realizaría con una nueva oligarquía financiera surgida a partir de la desestatización de la banca, el rescate bancario y las privatizaciones de las empresas paraestatales permitiendo su consolidación en un reposicionamiento de capitales. Lo novedoso no es la consolidación de oligopolios, que en la economía del estado posrevolucionario ya aparecían como determinantes, sin embargo es hasta los años ochenta e intensificado en los noventa que estos grupos comienzan a independizarse del Estado y comienzan a incidir directamente en la política. Su presencia política ya era visible en 1975, cuando apareció como una entidad organizada representada en el CCE<sup>206</sup>.

Los nombres de los integrantes de esta nueva oligarquía financiera aparecen en la Revista Expansión del 2008, en las listas de las 500 empresas más importantes de México y de América Latina por volumen de ventas en 2007: Grupo Carso (de Carlos Slim, propietario entre otros, de Teléfonos de México y de América Móvil, la principal empresa de telefonía inalámbrica en América Latina); Cemex (segundo productor mundial de cemento, con plantas industriales en Estados Unidos, España, Venezuela, Panamá, Colombia, Filipinas y Egipto), FEMSA (el mayor productor de bebidas de América Latina), Grupo Alfa, Grupo Vitro, Grupo México, Grupo Salinas, Industrias Peñoles, Grupo Televisa, Grupo Maseca, Bimbo (con plantas de producción en Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela, Argentina, Colombia y Chile)<sup>207</sup>.

Esta nueva oligarquía financiera lo que pretende es incidir cada vez más en las decisiones del gobierno, eliminando en la medida de lo posible las intermediaciones, planteando una nueva forma de organización y relación entre

---

<sup>206</sup> Vid. Roux Rhina (2009), *Op.cit.*, p. 257-261, así como, Luis H Méndez y José Othón Quiroz, "Oligarquía y sindicalismo (1983-2010)", *El Cotidiano*, UAM-A, julio-agosto, 2010, núm. 162.

<sup>207</sup> "Las 500 empresas más importantes de México", en revista *Expansión*, México, junio de 2008.

gobernados y gobernantes, en la que desaparezcan los lazos de solidaridad y de organización colectiva y recreados únicamente a nivel de individuos aislados.

Es tan grande la incidencia de éstos pactos intra-élite que tienden a manifestarse como un gobierno oligárquico; si atendemos por ejemplo a la reciente discusión, sobre la reforma fiscal, y el carácter urgente que debería tener, teniendo datos como el declarado por la Secretaría de Hacienda en el 2009 dentro de un documento oficial que expresaba que de 400 grandes grupos empresariales con acumulación de ingresos por casi 5 billones de pesos en 2008, sólo se pagó el 1.7% en promedio de impuesto sobre la renta, en contra del 30% que todo causante cautivo paga en este país.

Durante los primeros años del gobierno foxista específicamente el 2002 se observó que la tasa de sindicalización descendió considerablemente (sólo en el sector industrial pasó de 22% a 11.6% en 2002), al mismo tiempo que la pobreza había aumentado y que las huelgas –como indicador de la respuesta obrera– se habían reducido (durante 2008 a tan sólo 21 huelgas): lo que obliga a reconocer:

el triunfo del fenómeno social que acompañó a la construcción del neoliberalismo en México: un largo proceso de desarticulación de la composición técnico-económico-social de los trabajadores que habían encabezado en los años setenta las batallas del sindicalismo independiente, las luchas del sindicalismo de confrontación de los ochenta e, incluso, el intento del sindicalismo corporativo tradicional de retomar su presencia en la relación sindicatos-empresarios-Estado que le daba sustento al corporativismo estatista y popular nacionalista.<sup>208</sup>

Se pensaba que con la llegada del primer gobierno panista podría avanzarse en la democratización de la vida sindical, sin embargo, con los dos gobiernos de la alternancia lo que se consolidó es un tipo de corporativismo empresarial, que es

---

<sup>208</sup> Luis H Méndez y José Othón Quiroz, “Sindicalismo, empresarios y Estado en México: umbral o nueva era” septiembre – octubre 2010, *El Cotidiano*, UAM-A, julio-agosto, 2010, núm. 163.p. 69.

en extremo pragmático, como lo demuestran las alianzas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

A pesar de la precarización del empleo, del crecimiento de la informalidad, del aumento de la pobreza, etc; parece que esta nueva oligarquía financiera, no está interesada en renovar o reformular un nuevo pacto corporativo (Estado, movimiento obrero y sindicatos), lo cual se confirma cuando analizamos como se ha modificado el sector de acumulación, que concentra tanto el PIB como la PEA, en el sector servicios, y en especial el crecimiento de la maquila multinacional, en donde los trabajadores viven con el constante temor del cierre de fuentes de trabajo, en caso de que las empresas se topen con mayores costos que beneficios. El Estado aparece así como imposibilitado para ejercer una mediación que favorezca la productividad y que al mismo tiempo reporte beneficios para los trabajadores.

Esta situación se presenta como una limitante en la reproducción estatal, en la medida en la que de continuarse estas tendencias, de precarización y exclusión laboral, pueden redundar en decremento de una de las fuentes de legitimidad que permitieron asegurar la lealtad de masas al Estado posrevolucionario, que era el reconocimiento de los derechos de los subalternos.

En cuanto al pacto social (política económica, subsidios, política social, alianzas de clase, etc), el panorama tampoco es muy alentador. La estabilidad del Estado mexicano dependió en gran medida de la mitificación de la “justicia social” y el compromiso por combatir la desigualdad, lo que se traducía en innumerables políticas dirigidas a combatir la pobreza, a brindar servicios de salud, educación, vivienda, etc. Resulta difícil pensar que un imaginario de protección social que fue construido a la largo de tantos años pueda ser sustituido de manera inmediata por uno nuevo, donde impera la lógica del mercado, de la competencia en el que la realización colectiva se deposite en el mundo privado.

Como lo mostramos en apartados anteriores, la desigualdad, la pobreza y la exclusión ha crecido enormemente desde que se implementaron las políticas

neoliberales, pero nada parece indicar que el Estado esté dispuesto a modificar esta tendencia, por eso es tan significativo comparar el gasto estatal a nivel federal, en los rubros de gasto corriente y gasto social, evidentemente este último es al que menos presupuesto se le designa, lo que parece paradójico ante las cifras de exclusión social. La estrategia por la que se ha optado es retirar a los pobres y a los excluidos de la política y recluirllos en la beneficencia (así lo mostró el Pronasol de Salinas, el Progres a con Zedillo o el *Vamos México* u *Oportunidades* con Calderón).

Si una de las críticas centrales al modelo desarrollista de la posrevolución era que no había una adecuada redistribución de la riqueza, la situación actual del Estado resulta aún más complicada. Tenemos un Estado que ha renunciado a comprometerse socialmente: en la medida en que no ha logrado recuperar el crecimiento, que invierte más en gasto corriente y gasto militar, y que evidentemente no ha logrado redistribuir la riqueza. Por lo cual la administración en ese sentido es ineficiente, y no logra ser utilizada como insumo político para crear legitimidad y a su vez para para transmitirlo en procesos de socialización eficientes que a nivel individual permitan reproducir la confianza en el sistema social en general.

El Estado y sus nuevas formas de aquiescencia política dejaron el papel primordial de creación de legitimidad a los procesos electorales, y por ende a las instituciones partícipes de los mismos, sin embargo, la percepción sobre dos instituciones tan importantes como el IFE va en deterioro, así como la de los partidos políticos. La transición resultó inconclusa con cambios políticos instaurados “desde arriba” pero sin efectos o determinaciones “desde abajo”:

“el régimen autoritario dio una respuesta muy astuta y corruptora a los impulsos democratizadores de la sociedad, porque a cada movilización social respondió con una reforma electoral que ponía en el centro de los privilegios a los partidos. (...) Entonces los partidos estaban en deuda con el régimen, con el Presidente o con el sistema, y no con la sociedad; en consecuencia, se fue dando un alejamiento que se profundiza después de 1996, cuando se quintuplica la cantidad de dinero que reciben los partidos de las arcas estatales. El régimen autoritario, de una manera muy astuta, encontró la fórmula para

neutralizar las exigencias sociales y meterlas en el ámbito electoral, monopolizado por partidos que le deben más lealtad al sistema que a la sociedad”<sup>209</sup>

Las elecciones del 2006, lo que evidenciaron fue precisamente el nivel de polarización social, de la persistencia entre dos proyectos distintos de Estado, el resultado de estas elecciones fue déficit de legitimidad para el candidato proclamado vencedor, y para el propio IFE, lo que resultó revelador por el aumento de insatisfacción respecto al régimen democrático.

El recurrir al combate al crimen organizado ha reportado más costos que beneficios, costos en términos económicos porque se ha destinado una cantidad descomunal del presupuesto estatal en este rubro, y costoso también en cuanto a la falta de legitimidad, pues la mayoría de la población considera que es una guerra en la que el Estado ha resultado el perdedor.

La guerra contra el narcotráfico ha puesto en duda el mismo monopolio de la violencia estatal, dando como resultado “una especie de “feudalización” territorial que disgrega el mando nacional remplazándolo con un mosaico de poderes locales tejido en las redes de las finanzas, el poder político, cuerpos armados mercenarios y el narcotráfico”<sup>210</sup>

El Estado mexicano, renunció al compromiso con los “derechos sociales”, y al mismo tiempo resultó ineficaz a fin de garantizar “los bienes públicos puros” como son la integridad física y seguridad de las personas.

El proceso de cambio hacia una nueva forma estatal, trastocó todo el entramado material y simbólico que era condición de su propia reproducción, allanando el camino hacia la constitución de obstrucciones institucionales evidentes en lo económico político y social. Lo que ha contribuido a que amplias franjas de la sociedad civil hayan resultado excluidas y marginadas, los clásicos espacios de

---

<sup>209</sup> Ruiz Mondragón Ariel. “La transición inconclusa. Entrevista a Sergio Aguayo Quezada”, en *Este País*, 6 de abril 2011.

<sup>210</sup> Roux Rhina (2009), *Op.cit.*, p. 26.



socialización como eran la escuela, el trabajo, el sindicato o la familia, se han fragmentado lo que trae consigo procesos de socialización deficientes, al no ser llenados esos vacíos por otros espacios o instituciones que permitan establecer vínculos y reproducir valores que cohesionen a la sociedad, y generen expectativas a futuro, que fortalezcan la integración sistémica en su conjunto. Por el contrario lo que ha ganado espacio es la fragmentación, el aumento de violencia la exasperación social y la ruptura socio-cultural a nivel ciudadano.

Los intentos por frenar la fractura social que las elites económicas y políticas imponen, los lleva a aumentar las contradicciones en diversas maneras: por un lado los nuevos valores de la democracia liberal y el neoliberalismo, ponen énfasis en el individuo, en el progreso, en la superación de las tradiciones, pero por otra parte en el caso específico de México y por la filiación de los presidentes de la alternancia, se recurre a la remoralización de la sociedad, defendiendo las tradiciones, la familia, la religión y en general el conservadurismo<sup>211</sup> sin ningún provecho para la propia estrategia de unificar a las clases medias y los sectores subalternos.

El principio de la estatalidad en su conjunto parece estar fragmentado, es por eso que algunos autores<sup>212</sup> recurren al análisis del Estado desde una perspectiva clásica como la de *El Príncipe* de Maquiavelo, para intentar explicar la magnitud de la crisis estatal: Su diagnóstico recalca la fragmentación de la República. Es decir, que sin importar la persona o personas físicas en las que se encarna el Estado, la institución del gobierno está en si misma erosionada. Donde el Estado ha perdido su poder infraestructural para por un lado penetrar en la vida social, y para, al mismo tiempo contener a los poderes económicos políticos o ideológicos, es decir los poderes fácticos, como son la Iglesia, el narcotráfico, los medios de comunicación, o la misma oligarquía financiera.

---

<sup>211</sup> Durand Ponte Víctor Manuel, *Op.cit.*, p. 144.

<sup>212</sup> Vid. Rhina Roux (2009), *Op.cit.*, Ortiz Leroux Sergio, "La crisis del Estado mexicano: una lectura desde el republicanismo de Maquiavelo", *Argumentos, Nueva Época*, UAM-X, México.

El Estado tendencialmente está perdiendo la capacidad para constituirse en una arena donde se desarrollen los conflictos, es decir, el terreno de la hegemonía que aparece como un campo contencioso en el que el Estado está por encima de todos los intereses particulares, posibilitando la existencia de un entramado material y simbólico desde el cual, se desarrolla el conflicto y se construye o reconstruye la comunidad política en su conjunto. Al mismo tiempo pierde la capacidad de afirmar la soberanía que implica la toma de decisiones vinculantes que existan a pesar de poderes fácticos contra-estatales.

La crisis actual del Estado Mexicano es inédita en la medida en la que en el proceso mismo de transformación de su naturaleza está socavando los antiguos fundamentos que permitían su reproducción, pero al mismo tiempo no logran ser sustituidos del todo por la nueva lógica, de tal manera que los límites económicos, políticos y sociales se conjugan al unísono, impidiendo que la crisis logre desplazarse de un espacio a otro, y evitando que afecte la integración sistémica.

En la medida en la que continúen estas tendencias el Estado se irá fragmentando más, abriéndole paso al predominio del poder despótico por encima del infraestructural, lo que no asegura tampoco la pervivencia de la comunidad política. Como más arriba se apuntó la construcción de una nueva forma de dominación se realiza en los tiempos largos de la historia. Es un proceso que está abierto, y donde al menos coyunturalmente y, de acuerdo con la tendencia creciente en los límites de su actual reproducción, parece existir claras obstrucciones institucionales que merman su integración a nivel sistémico.

## Conclusiones

La peculiaridad de la actual crisis del Estado mexicano es que esta obedece a una lógica que pone en riesgo su reproducción, ya que ha perdido la capacidad de mediación y estructuración para la toma de decisiones sobre los asuntos de interés general, lo que lo ha convertido en un estado débil o ausente y paradójicamente, esa debilidad no esta siendo compensada por una sociedad civil fortalecida que participe en los espacios públicos con posibilidades reales de incidir en los procesos. De manera simultánea se presenta así una crisis en lo económico, lo político y lo social, impidiendo su desplazamiento y por el contrario profundizándola en cada rubro:

- Crisis de racionalidad económica del Estado interventor- corporativo- autoritario ante la ausencia de crecimiento económico. Uno de los momentos decisivos fue la instauración del rescate bancario conocido como FOBAPROA, en el contexto de la crisis de diciembre de 1995, donde el rescate del “gran capital” modificó la correlación hegemónica del Estado sobre la élite financiera, restándole al primero un déficit de autonomía, al imponerle una carga que se traducirá en gasto público continuo para saldar el endeudamiento privado.

Desde los años noventa se iría consolidando así el modelo económico desequilibrante “maquilador- exportador de petróleo y de terciarización del mercado laboral, que ha provocado no solo una gestión coyuntural, sino una crisis estructural traducible en un aumento de la desigualdad por concentración de la riqueza, creciente subordinación de la PEA al capital financiero con sus tasas de interés, intensificación de la flexibilidad laboral, mayor expansión del gasto corriente que de inversión pública y de gasto social (favorecer a la burocracia pública en desmedro de la sociedad), privatización del Estado y sus políticas sociales estimulando la doble articulación entre “formalidad” e “informalidad”. Estos indicadores solo resumen la incapacidad para organizar un proyecto económico competitivo y eficiente entre sus clases dirigentes.

- La crisis de legitimación está dada por el bloqueo de la transición política y se expresa en la relación Estado- gobierno- sistema político.

La estructura corporativa heredada de priísmo desde el año 1938 no fue desmantelada con la transición política, únicamente se recicló como forma de cooptación, sólo anulando la idea del compromiso social, en el que ya ni siquiera existe una representación de intereses jerarquizados, salvo en contadas excepciones como es el caso del sindicato magisterial.

A nivel de implementación de políticas vemos un choque entre propuestas *neoliberales* contra propuestas *neocorporativas*, lo que desata contradicciones intraélites extensas y profundas, como en su momento lo evidenció el proceso electoral del 2006 y que en el Congreso se expresa en parálisis en cuanto a reformas como la laboral, la fiscal y educativa.

La reproducción de la legitimidad vía instituciones democráticas autónomas, se pone en tela de juicio, al observar la fracturación del IFE en medio de las fracciones políticas mayoritarias en el Congreso que imponen sus propias agendas. A la par de esto, se observa una recusación progresiva de la opinión pública hacia las instituciones que encabezaron la transición política y un déficit creciente en la participación electoral.

Recordando la definición weberiana sobre el Estado, que se centra en el monopolio de la violencia legítima es sintomático el hecho de que este poder sea utilizado únicamente sobre los sectores de amplias capas de la sociedad civil, para imponer decisiones que solo favorecen a élites políticas, empresariales o financieras. Es decir: el Estado ha perdido la capacidad de implementar la violencia legítima sobre “todos” los subalternos -recordando que esta condición no es una carencia material, sino una posición relacional- y se ejerce en una sola dirección. Estamos ante la ausencia de un proyecto que involucre un compromiso político- ciudadano entre élites y sociedad civil; en el que cada vez es más

determinante el peso de los poderes fácticos relacionado con medios masivos de comunicación, y élites que representan al gran capital.

Aunado a esto el monopolio de la violencia legítima comienza a ser fuertemente cuestionado por la presencia del narcotráfico como amenaza interna, en la que el Estado aparece como incapaz de garantizar la seguridad de los individuos en los espacios de interacción que conforman su territorio.

La gobernabilidad del Estado entra así en una crisis de largo aliento en la medida en la que no logra superar las restricciones del déficit de legitimidad política, violencia social, violencia del narcotráfico y colapso de las políticas económicas y sociales que acentúan la exclusión social.

- Crisis social: Se trata de un vacío institucional de gran extensión en el que los ciudadanos desconfían de los partidos, sindicatos, el congreso y se refugian en su vida privada. Continuamente se manifiestan insatisfechos con la democracia, aunque la consideran la mejor forma de gobierno, pero al mismo tiempo conservan una baja tasa de participación a fin de hacer efectivas sus demandas, mientras que, paralelamente se llegan a apoyar instituciones o posturas no democráticas.

Por otro lado las políticas estatales en lo social comenzaron a destruir un tipo de institucionalidad ligada al Estado corporativo (ISSSTE, IMSS, FOVISTE, etc) sin organizar su relevo más allá de una privatización parcial que hace subsistir formas heterogéneas de asistencia pública y privada, enfrentadas en la seguridad social.

Existe una crisis de motivación en doble dirección: por un lado el sistema político y económico estimulan la degradación de lo público-social, pero alternativamente requieren de dichos valores, a fin de garantizar su propia legitimidad social menoscabada por las mismas decisiones excluyentes.

Se ha argumentado que el desencantamiento de la democracia esta erróneamente fundamentado, puesto que se le exigen cosas que no le competen, como el

crecimiento económico, la equidad, empleo, etc; cuando en realidad lo único que puede asegurar es libertades y competencia política. Sin embargo debemos ser consientes académicamente que esta diferenciación es meramente analítica, las realidades sociales muestran la problemática de diferente manera.

En el contexto mundial podemos observar casos como el de España, quien durante mucho tiempo se mostro como un ejemplo de transición democrática, actualmente lo que se pone en evidencia es que a pesar de la liberalización política y la competencia a nivel de régimen, la toma de decisiones se hace alejada de la sociedad civil que comienza a percibir una forma de agravio, al repercutir éstas en sus condiciones materiales de vida, lo que ha traído el conflicto en términos de estallidos sociales, mismos que comienzan a ser una constante en diversos países no sólo en Europa sino también en América Latina.

El riesgo para el caso mexicano, es que de seguir las tendencias antes mencionadas, la crisis en todos los niveles se profundizará, y aunque actualmente la sociedad civil parezca atomizada y disuelta en medio de una especie de anomia, las condiciones aquí recuperadas sugieren que se puede desencadenar, una escala mayor de desestabilización y radicalización de signos opuestos que liberen la posibilidad hacia estallidos sociales recurrentes, o a la inversa un crecimiento de tendencias conservadoras que lleven a la perdida de integración sistémica o social, o a la preservación de la misma pero favoreciendo la implementación de medidas autoritarias en detrimento de los avances democratizadores.

Se advierte que la crisis del Estado como tal no implica la desaparición de instituciones de gobierno, ni de todo lo que representa la materialidad del Estado, por el contrario la cuestión medular tiene más que ver con el Estado entendido como proceso o relación social, en la manera en al que se socavan los fundamentos de la legitimidad, es decir, las posibilidades de hacer pasar como máximas los mandatos, de tomar decisiones que preserven la comunidad política y que permitan que la justificación del Estado se fundamente en un orden moral compartido.

La existencia de los Estados se entiende per se, desde la teoría social no es necesario justificar la idea de que el ser humano es un ser social que para desarrollar sus potencialidades necesita de la ayuda de otros, la legitimación radica entonces en darle un contenido específico a la justificación del contrato social, la política en ese sentido es sustantiva, precisamente porque a partir de ella se organiza la vida en común con los otros, no busca eliminar conflictos sino la búsqueda adecuada de mecanismos de mediación que permitan que a pesar de estos la comunidad pueda reproducirse como tal y evitando que desemboquen en caos o arbitrio.

## Bibliografía

- Alejandro Álvarez Béjar, “La Transición Laboral Inconclusa de México”, en Santos Ruesga Benito (Comp.), *Economía Política de las transiciones democráticas: México y España*, UNAM- Universidad Autónoma de Madrid, México, 2006.
- Alfie Miriam C y Luis H. Méndez B., “Orden y centro oculto del poder en México”, en *Poder, Ideología y Respuesta Social en México*, UAM-Azcapotzalco- EÓN, México, 1997.
- Basáñez Miguel, *El Pulso de los Sexenios. 20 años de crisis en México*, Siglo XXI, México, 1990.
- Bendix Reinhard, *Estado nacional y ciudadanía*, Amorrortu, Buenos Aires, 1964.
- Bobbio Norberto, *Liberalismo y Democracia*, FCE, México, 1989.
- Branchet Marquéz Viviane, “Transformación democrática en América Latina: un intento de teorización, en Viviane Marqués Brachet (Coor), *Entre Polis y Mercado: el análisis sociológico de las grandes transformaciones políticas y laborales en América Latina*, El Colegio de México, México, 2001.
- Camacho Manuel, *La clase obrera en la historia de México. El futuro inmediato*, Siglo XXI, 1981, segunda edición.
- Cárdenas Sánchez Enrique, “La reestructuración económica de 1982-1994”, en Servín Elisa (Coor.) *Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994*, FCE, México, 2010.
- Cohen Jean y Arato Andrew, *Sociedad Civil y Teoría Política*, FCE, México, 2002.
- Cordera Campos Rolando y Camilo Flores Ángeles, “De crisis a crisis: del cambio de régimen económico al derrumbe global (trayectoria y contexto), en Octavio Rodríguez Araujo (Coor.), *México ¿un nuevo régimen político?*, Siglo XXI, México, 2009.



- \_\_\_\_\_ y Leonardo Lomelí Vanegas, “El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural (1982-2004)”, en Rolando Cordera Campos y Carlos Javier Cabrera Adame (Coord.), *El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural (1982-2004)*, UNAM-FCE Trimestre Económico, México, 2008.
- Córdova Arnaldo, *La formación del poder político en México*, Era, México, 1976.
- Corrigan Philip y Derek Sayer, “El gran Arco. La formación del Estado Inglés como una Revolución Cultural”, en María L. Lagos y Pamela Calla (compiladoras), *Antropología del Estado: Dominación y prácticas contestatarias en América Latina*, Cuaderno del Futuro No. 23 agosto 2007.
- Durand Ponte Víctor Manuel, “La cultura política de los mexicanos en el régimen neoliberal”, en Rodríguez Araujo Octavio (Coor.), *México ¿un nuevo régimen político?*, Siglo XXI, México, 2009.
- Eduardo Lora “Tendencias y resultados en las Reformas Tributarias”, en Eduardo Lora (Ed.) *El Estado de las Reformas del Estado en América Latina*, BM-BID-Mayol, Colombia, 2007.
- Elías Norbet, *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, FCE, México-Madrid-Buenos Aires, 1987.
- García Pelayo Manuel, *La transformación del estado contemporáneo*, Alianza, Madrid, segunda edición, 1985.
- González Luis, *Los días del presidente Cárdenas*, en *Historia de la Revolución mexicana*, tomo 15, El Colegio de México, México, 1981.
- Habermas Jürgen (1973), *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Cátedra, España, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Teoría de la acción comunicativa, Tomo II Crítica de la razón funcionalista*, Taurus, Madrid, 1987.
- \_\_\_\_\_, *El discurso filosófico de la modernidad (Doce lecciones)*, Taurus, Buenos Aires, 1989.

- Hirsch Joachim (1995), *El Estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global*, UAM- Xochimilco, México, 2001.
- Huchim R. Eduardo, “Elecciones Avances, fallas y simulación”, en Octavio Rodríguez Araujo (Coor.), *México ¿un nuevo régimen político?*, Siglo XXI, México, 2009.
- Huntington Samuel, *El orden político en las sociedades en cambio*, Paidós, Buenos Aires, 1972.
- Kelsen Hans, *Compendio de Teoría general del Estado*, Colofón, México, 1992.
- Lechner Norbert, “La reforma del Estado entre modernización y democratización” en Massimo L. Salvadori, Norbert Lechner, Marcelo Cavarozzi (et. al.), *Un Estado para la Democracia*, Friederich Ebert Stiftung- Miguel Ángel Porrúa, 1988.
- Lipset Seymour, *EL hombre político. Las bases sociales de la política*, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
- Loyola Díaz Rafael y Antonia Martínez, “Guerra, Moderación y Desarrollismo”, en Elisa Servín (Coor.) *Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994*, FCE, México, 2010.
- Luján Ponce Noemí, “Construyendo confianza: gobernabilidad y democracia en una transición incierta”, en Labastida Martín del Campo Juan, Antonio Camou y Noemí Luján Ponce (Coor.), *Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina*, IIS, FLACSO y Plaza y Valdés, México, 2000.
- \_\_\_\_\_, “El papel de lo electoral en el proceso de cambio político en México 1988-2006”, en Ávalos Tenorio Gerardo (Coor.), *El Estado mexicano. Historia estructura y actualidad de una forma política en transformación*, UAM- Xochimilco, México, 2009.
- Lustig Nora Claudia, “Salud y Desarrollo Económico. El caso de México”, *El Trimestre Económico*, FCE, México, No. 296, 2007.

- Mann Michael, *States, War and Capitalism. Studies in Political Sociology*, Oxford & Cambridge, USA, 1988.
- March James G. y Johan P. Olsen, *El redescubrimiento de las instituciones: La base Organizativa de la política*, FCE, México, 1997.
- Mattiace Sanan y Roderic Ai Camp, "Democracia y desarrollo: un panorama general", en *La democracia en América Latina. Modelos y Ciclos*; Roderic Ai Camp (comp.), Siglo XXI, México. 1997.
- Tzvi Medin, *El sexenio alemanista: ideología y praxis política de Miguel Alemán*, Era, México, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas*, Siglo XXI, México, decimoctava edición, 2003.
- Medina Peña Luis, *Hacia el nuevo Estado. México, 1920- 2000*, FCE, México, tercera edición, 2010.
- Merino Mauricio, "La Reforma Electoral y el nuevo régimen político en México", en Octavio Rodríguez Araujo (Coor.), *México ¿un nuevo régimen político?*, Siglo XXI, México, 2009.
- Meyer Lorenzo, "El Estado mexicano contemporáneo", en *Historia Mexicana*, El Colegio de México, México, Vol. 23, No. 4, Apr. - Jun, 1974.
- Moore Barrington, *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, UNAM, México, 1989.
- O'Donnell Guillermo, "Teoría Democrática y Política comparada" en, Víctor Alarcón Olguín (Coor.), *Metodologías para el análisis político*, UAM-Iztapalapa, México, 2006.
- Ocampo Alcantár Rigoberto, *El sistema político mexicano: el agotamiento de un modelo corporativo*, Universidad Autónoma de Sinaloa- Publicaciones Cruz O, México.
- Offe Clause (1980), "Algunas contradicciones del moderno Estado Social", en *La Sociedad del trabajo. Problemas estructurales y perspectivas de futuro*, Alianza, Madrid, 1992.
- París Pombo María Dolores, "La agonía del nacionalismo revolucionario y el despertar del regionalismo entre las élites políticas mexicanas", en

Labastida Martín del Campo Juan, Antonio Camou y Noemí Luján Ponce (Coor.), *Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina*, IIS, FLACSO y Plaza y Valdes, México, 2000.

- Portantiero Juan Carlos, “Estado y sociedad en el contexto de la transición democrática”, en *La construcción de las Instituciones para la Democracia en América Latina*, IFE, 1999.
- Revueltas Andrea, “Antecedentes históricos de la crisis política actual”, en Gerardo Aválos Tenorio (Coor.), *El Estado mexicano. Historia estructura y actualidad de una forma política en transformación*, UAM- Xochimilco, México, 2009.
- Rodríguez Araujo Octavio, “Metamorfosis del régimen político mexicano, ¿irreversible?”, en Octavio Rodríguez Araujo (Coor.), *México ¿un nuevo régimen político?*, Siglo XXI, México, 2009
- \_\_\_\_\_, *La reforma política y los partidos en México*, Siglo XXI, México, 1990, onceava edición.
- Roseberry William, “Hegemonía y lenguaje contencioso”, en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (Comp.), *Aspectos cotidianos en la formación del Estado*, Era, México, 2002.
- Rousseau Isabelle, “Las nuevas élites y su proyecto modernizador, en Elisa Servín, (Coor.) *Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994*, FCE, México, 2010.
- Roux Rhina, *El Príncipe Mexicano. Subalternidad, historia y Estado*, Era México, 2005.
- Salazar Carrión Luis, *Para pensar la política. La lección de los clásicos*, UAM- Iztapalapa, México, 2004.
- Schumpeter Joseph Alois, *Capitalismo, Socialismo y Democracia*, Folio, Barcelona, 1984.
- Servín Elisa “Los “Enemigos del progreso”: crítica y resistencia al desarrollismo del medio siglo”, en Servín Elisa (Coor.) *Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994*, FCE, México, 2010.

- Solari Gioele, “La concepción liberal del Estado”, en París Pombo María Dolores (Comp), *Política y estado en el pensamiento moderno*, UAM-Xochimilco, México, 1996.
- Loaeza Soledad, “*La sociedad mexicana en el siglo XX*” en Joaquín Blanco José y José Woldenberg (Comp.), *México a finales de siglo*, FCE, México, Tomo I. 1993.
- Sousa Mariana “Breve panorama de la reforma judicial en América Latina: objetivos, desafíos y resultados” en Eduardo Lora (Ed.) *El Estado de las Reformas del Estado en América Latina*, BM-BID-Mayol, Colombia, 2007.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación, *Cultura democrática y cultura de justicia electoral*”, México, febrero del 2011.
- Waldman Peter, *El Estado anómico: derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina*, Iberoamérica, Madrid, 2006.
- Wallerstein Immanuel y Etienne Balibar, *Raza, Nación y Clase*, IEPALA, Madrid, 1991.
- Weber Max, *Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología comprensiva*, FCE, México, segunda edición, 1964.
- Weber Max, *El político y el científico*, Ediciones Coyoacán, México, 1997.
- Zepeda Eduardo, Timothy A. Wise, and Kevin P. Gallagher, *Rethinking Trade Policy for Development: Lessons From Mexico Under NAFTA*, Carnegie Endowment for International Peace- Policy Outlook, diciembre 2009.
- Zermeño Sergio, *La sociedad derrotada. El desorden mexicano de fin de siglo*, Siglo XXI, México, 1996.

### **Artículos, Revistas, Revistas y Periódicos**

- “Desciende México 15 lugares en desarrollo humano, según el PNUD”, *La Jornada*, 3 de noviembre de 2011.
- “Economía, Gobierno y Política”, *Monitor Mitofsky*, junio 2011, disponible en: <http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=monitor-mitofsky>.

- “Las 500 empresas más importantes de México”, en revista *Expansión*, México, junio de 2008.
- “Mexicanos 50%, de los nuevos pobres”, en *La Jornada*, 21 de abril de 2010.
- “OCDE: por la crisis, cayó 64% el número de mexicanos que van a EU en busca de trabajo”, *La Jornada*, 13 de julio 2011.
- Ackerman John M, “El secuestro del IFE”, *La Jornada*, 29 de noviembre 2010.
- Alexander Jeffrey, “Ensayo de revisión: la nueva teoría crítica de Habermas su promesa y problemas”, en *Sociológica*, Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, México, año 3, núm. 7, mayo-diciembre, 1988.
- Arteaga José Manuel, “México es número uno en migración”, *El Universal*, 9 de noviembre 2010.
- Ballinas Victor, “Narcoviolencia”, *La Jornada*, 13 de mayo 2011.
- Bizberg Ilán, “La transformación del poder político en México”, en *Revista Mexicana de Sociología*, UNAM, México, núm. 3, vol. 61, julio- septiembre de 1999.
- Bourdieu Pierre, “Las dos caras del Estado”, en *La Ciudad Futura*, Texto inédito extractado de los cursos sobre el Estado que dictó en el Collège de Francia entre 1989 y 1992, enero del 2012.  
<http://laciudadfutura.blogspot.com>
- Camarena Salvador, “Calderón un año de gobierno” Varios Autores, en *Letras Libres*, México, 2007.
- Cantú Jesús, “Democracia a la baja” en *Procesos.com.mx*, 8 de noviembre 2001.
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, “Comentarios al informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, enero-diciembre 2010”
- \_\_\_\_\_, *Evolución de las tasas de interés activas, pasivas y su entorno internacional*, México, marzo 2009.

- *Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (CESOP)* “EL IFE en la opinión pública”, octubre 2003.
- De la Cruz Gallegos José Luis, *El Universal*, 30 de mayo 2011.
- De la Garza Toledo Enrique, “El Corporativismo: teoría y transformación”, en *Iztapalapa 34*, julio- diciembre 1994.
- \_\_\_\_\_, “Neoinstitucionalismo, ¿opción ante la elección racional? Una discusión entre la Economía y la Sociología”, en *Revista Mexicana de Sociología*, UNAM- Instituto de Investigaciones Sociales, México, núm. 1, enero-marzo 2005.
- Delgado Raúl, Humberto Marquéz y Óscar Pérez Veyna, “EL abaratamiento de la fuerza de trabajo mexicana en la integración económica de México a Estados Unidos”, en *El Cotidiano*, núm. 143, UAM- Azcapotzalco, mayo-junio 2007.
- Enciso L. Angélica, “*El Coneval presenta el Informe de evaluación de la política social 2011*” en *La Jornada*, 9 de febrero 2012.
- Espinosa Yáñez Alejandro, “La globalización y las alianzas estratégicas. Notas sobre la acción empresarial y del Estado”, en *El Cotidiano*, México, UAM-A, marzo- abril 2011, núm. 166.
- Esquivel Solís Edgar, “Las transformaciones del Estado. Una aproximación al debate contemporáneo”, *Revista Argumentos: El Estado otras miradas*, UAM- Xochimilco, México, No. 65/año 24, 2011.
- Fernández Reyes Otto, “Política economía y subjetividad: De la transición posible a la consolidación improbable”, en *Revista sociológica*, UAM- Azcapotzalco, México, año 7, núm. 19, mayo-agosto de 1992.
- Fernández Vega Carlos,” México SA”, *La Jornada*, 16 de abril 2011.
- García Castro Beatriz, Edmar Salinas Callejas, Leticia Velázquez García, Zorayda Carranco Gallardo, Andrés Godínez Enciso, “Lo Cotidiano del sector industrial en México: 25 años de cambio estructural”, en *El Cotidiano*, México, UAM-A, julio- agosto 2009, año 24.
- Garduño Roberto, “Hacia 2010 México había expulsado a EU casi 12 millones de trabajadores: BM”, *La Jornada*, 7 de mayo de 2011.

- Gomora Doris, “Se agrava el deterioro del Estado advierten”, *El Universal*, 21 de julio de 2011.
- González Ixel Yutzil, “Crecen sector informal y desempleo”, *El Universal*, 13 de agosto 2011.
- González Roberto Amador, “Equivale a un tercio del PIB la economía informal”, en *La Jornada*, 13 de octubre 2006.
- \_\_\_\_\_, “Da más empleos a mexicanos la economía informal que la formal”, *La Jornada*, 14 de mayo 2011.
- González Susana G., *La Jornada*, 18 de enero de 2009.
- \_\_\_\_\_ y Avilés Karina, “Uno de cada cuatro niños mexicanos vive en hogares pobres: OCDE” en *La Jornada*, 28 de abril 2011.
- Gutiérrez Cuellar Paola, “Violencia, Estado y crimen organizado en México”, *El Cotidiano*, UAM-A, núm. 163, septiembre-octubre 2010.
- Holloway John, “El Estado y la lucha cotidiana”, en *Cuadernos políticos*, núm 24, México, 1980.
- Jiménez Mónica, *Reforma*, 20 de diciembre 2008.
- Labastida M. del Campo Julio, “Algunas hipótesis sobre el modelo político mexicano y sus perspectivas”, en *Revista Mexicana de Sociología*, UNAM, Vol. 36, núm. 3, julio- septiembre 1974.
- Laurell Asa Cristina “Coneval y la cobertura universal de salud”, *La Jornada*, 3 de agosto 2011.
- Lechner Norbert, “Acerca del ordenamiento de la vida social por medio del Estado”, *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 43, núm. 3. (julio- septiembre 1981).
- Luis H Méndez y José Othón Quiroz, “Oligarquía y sindicalismo (1983-2010)”, *El Cotidiano*, UAM-A, julio-agosto, 2010.
- \_\_\_\_\_, “Sindicalismo, empresarios y Estado en México: umbral o nueva era” septiembre – octubre 2010, *El Cotidiano*, UAM-A, julio-agosto, 2010, núm. 163.
- María de la Luz González, *El Universal*, 1 de junio del 2001.



- Martínez Fabiola, Alonso Urrutia y Jesús Aranda, *La Jornada*, 6 de julio 2009.
- \_\_\_\_\_, *La Jornada*, 23 de marzo 2011.
- Meyer Lorenzo, "El presidencialismo. Del populismo al neoliberalismo", en *Revista mexicana de Sociología*, UNAM, vol. 55, núm. 2, abril-junio 1993.
- Miranda Juan Carlos, *La Jornada*, 13 de septiembre 2010.
- Mora Heredia Juan, Raúl Rodríguez Gillén y Lilia Anaya Montoya, "Los jóvenes ante su crisis: una integración fragmentada entre el mercado y la información", *EL Cotidiano*, UAM-A, septiembre-octubre 2010, núm. 163.
- Moreno Alejandro, "Encuesta/ Baja apoyo ciudadano", *Reforma*, agosto 2008.
- \_\_\_\_\_, "Las metas y valores de los mexicanos: ¿qué nos une y qué nos divide", *Este PAÍS*, abril 2011.
- Moreno Pérez Salvador, "Crisis económica y la migración internacional en México", en *Reporte CESOP*, núm 47, agosto 2011.
- Muñoz E. Alma, *La Jornada*, 18 de junio del 2007.
- Offe Clause y Elke Köpen, "El renacimiento de las teorías conservadoras", en *Revista mexicana de sociología*, UNAM, México, Vol. 43. Número extraordinario, 1981.
- Ortiz Leroux Sergio, "La crisis del Estado mexicano: una lectura desde el republicanismo de Maquiavelo", *Argumentos*, Nueva Época, UAM-X, México.
- Osorio Jaime, "Crisis estatal y violencia desnuda: la excepcionalidad mexicana" en *Violencia y crisis del estado: estudio sobre México*, UAM-Xochimilco, México, 2011.
- Piñeyro José Luis y Gabriela Barajas, "Seguridad Nacional y Pobreza en México: Notas sobre el Pronasol", *El Cotidiano*, UAM- Azcapotzalco, núm. 71, septiembre 1995.
- Poy Solano Laura, *La Jornada*, 13 de abril, de 2011.
- Rea Daniela, *Reforma*, 4 de enero del 2009.

- Roux Rhina, "El Estado mexicano. Una mutación épocal", en Anguiano Arturo (Coor), *Después del 2 de julio dónde quedó la transición? Una visión desde la izquierda*, UAM. México. 2001.
- \_\_\_\_\_, "El *Príncipe* fragmentado. Liberalización, desregulación y fragmentación estatal", en *Veredas*, UAM- Xochimilco, México, núm. 20, 2010.
- \_\_\_\_\_, "La desintegración de la res publica", en *Argumentos*, UAM- Xochimilco, Núm. 53 enero-abril 2007.
- Rubí Mauricio, "Gasto electoral, de los más caros en el mundo", *El Economista*, 9 de noviembre del 2010.
- Ruiz Mondragón Ariel. "La transición inconclusa. Entrevista a Sergio Aguayo Quezada", en *Este País*, 6 de abril 2011.
- Schmitter Phillip, "¿Continuamos en el siglo del corporativismo?", en *El Buscón: Revista de Teoría y Política*, México, 1986, núm. 14 y 15.
- Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), *Balance Fiscal en México*, abril 2011.
- Valencia Escamilla Laura, "Reforma del Estado para la gobernabilidad democrática en México", en *Política y Cultura*, primavera 2008, núm 29.

## ÍNDICE

Introducción 1

**Capítulo I.** El estudio del estado y sus procesos de transformación histórica.....5

1.1 Algunos conceptos clave en la definición sociológica de Estado.....6

1.2. La configuración histórica del Estado, su dinámica los procesos de transformación.....11

1.2.1 El Estado liberal.....12

1.2.2 El Estado Social.....21

- La eficacia del Estado Social de Bienestar.....22

- Evaluación y crítica global del Estado de Bienestar.....28

- La concepción del capitalismo tardío y del Estado benefactor a partir de la teoría de los sistemas y el mundo de la vida.....28

1.2.3 El Estado nacional de competencia .....33

1.3 ¿Cómo estudiar los procesos de transformación de Estados específicos en los que los cambios están operando?.....36

- Conclusiones.....46

**Capítulo II.** La construcción del estado mexicano: concreción, rupturas, transformaciones y crisis.....47

- Introducción .....48

2.1 El Cardenismo: la concreción de todos los mitos.....50

2.1.2 Estado social y corporativismo en el Cardenismo.....60

2.2 El Proceso de descomposición del pacto original..... 63

2.3 La nueva configuración del Estado mexicano.....76

2.3.1 El cambio de régimen económico.....76

2.3.2. Los conflictos políticos y el intento de socialización del proyecto neoliberal.....	84
2.4 ¿Transformación, crisis, desintegración o renovación? A manera de conclusión.....	99
 <b>Capítulo III. Crisis estatal y fractura institucional.....</b>	<b>104</b>
- Introducción.....	104
3.1. Las tensiones entre la vieja y nueva forma estatal en México.....	110
3.2 Límites del nuevo régimen económico.....	117
3.2.1. El régimen económico en los gobiernos de la alternancia (2000-2011).....	118
3.3. Los límites de la legitimidad.....	126
3.3.1 Crisis de los espacios de legitimidad.....	129
3.4. Límites a la estabilidad social.....	136
3.5 Peculiaridad de la crisis estatal mexicana.....	150
 Conclusiones.....	162
Bibliografía.....	167